

Original

GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.
JUICIO FISCAL 12852/13-17-05-
2/905/14-S1-04-04-AS

Se interpone demanda de amparo directo en contra de la sentencia dictada el 3 de mayo de 2018, por la Primera Sección de la Sala Superior del H. Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al resolver el juicio de nulidad 12852/13-17-05-2/905/14-S1-04-04-AS.

1290

H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO EN TURNO, POR CONDUCTO DE LA PRIMERA SECCIÓN DE LA SALA SUPERIOR DEL H. TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.

JESUS MORALES AGUILAR, en mi carácter de representante legal de GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V., personalidad que se encuentra debidamente acreditada y reconocida por la autoridad responsable en los autos que integran el juicio fiscal al rubro citado, misma que solicito se tenga por reconocida en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo; autorizando en términos amplios y para los efectos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados en Derecho Óscar Guevara Hernández, Leobardo Brizuela Radilla, Mariana Vargas Esparza, Andrea Elvira Elizondo Durán, Enrique Ramírez Figueroa (1637027); Nora Morales Rodríguez (3349462); Ricardo Javier Villalobos Montalvo (1800129); Manuel González López (5348910); Juan Pablo Lemmen Meyer Valero (3877533); Luis Antonio Ávila Bravo (2780197); Calafia Franco Jaramillo (4824172); Cecilia Valeria Lapray Buendía (3627834); Xóchitl Escobedo Sandoval (22533793); Laura Olivia Ibarra Moreno (2047913); Julio Freyssinier Isoard (4517757); Fernando de la Fuente Guzmán (4899006); Luis Alonso Carrillo López (4538880); Tania Carolina Arellano Maciel (3970935); Francisco Javier De Alba Márquez (6726459); Alejandro Madero Frech (6105855); Carlos David Jiménez Chac (7031437); Adalberto Ramos Huerta (4756261); Mónica Donaji Ramírez Soberanes (5746306); Oscar Echenique Quintana (4769593); Cristina Carrasco Briones (5830756); Francisco Javier Ceballos Velasco (8123128); Viridiana Lara Perdomo (8530468); Alan Virgilio Enriquez Gómez (09113853); Santiago Ocaso García-Barquín (8010386); Jorge Caloca Terán (7096425); Christian Benjamín Hurtado Villanueva (7772226); Brenda Verónica Alvarado Flores (5843833); Luz Ariadne Zapata Bonilla (7698844); Eduardo Ángeles Viniegra (5284149); Swad Marie Abbud Chávez (7788057); Luis Gandhi López de la Luz Mendoza (9539961); Alida Teresa Carranza Zenteno (6958677); Simón Alejandro Arias Barragán (5649069); Amed Francisco Hernandez Miranda (08783482); Stephanie Du Bar Galindo (9024355); Lorena Ortiz Villarreal (09582628); Alberto David Romo Jimenez (5218885); Omar Gerardo Garza Hernández (9770658); Jonathan Sánchez Ortega (10109709); Erika Ka-Yiang Wu Estrada (9045651); Salvador Ceballos Contreras (8221444); Citli Daniela Rios González (10551412); Juan Pablo López Angel (9045132); Karla Sánchez Covarrubias (6741788); Sergio Lugo González (2752647); Erika Janet Espinosa Azarcoya (7644024); así como a los pasantes en derecho para oír, recibir notificaciones e imponerse de autos: Andrés Serrano Molina, Diego Vázquez Ruckstuhl, Oscar Iván Uribe García, Tania Jasmin Pérez Chávez, María Jimena

Campoy Martínez, Leticia Galnares Ruiz, Angel Ivan Rios Nieto, María José Jaury González, Rosaura León Domínguez, Sabrina Hernández Schetelich, Gonzalo Santibáñez García, Allan Ramírez Flores, Blanca Mariana Puentes Lozano, Veronika Cecilia Koch Thierry, Luis Arturo Sosa Enríquez, Gustavo Romo Herrera, Leonardo Fabián Brum Ramírez, Itzel Andrea Pizarro Carro, Ángeles Anahí Villanueva de Luna, Alejandro Romo Albarran, Luis Alberto Ortiz Sierra, Gabriel Razo Olivares, Brenda Liliana Cueva Gutiérrez, María José Suárez Ortiz, Fernando Javier López Reyes, Jorge Gabriel Puente Quintanilla, Luis Salvador Robles Espinoza, Ámbar Alexis de Anda Barragán, Itzel Andrea Pizarro Carro, Luis Roberto Moreno Tinoco, Silvia Jessica Lugo Mayorga, Juan Pablo Pérez Garza, Sarahi Ruiz Domínguez, Iker Domínguez De la Piedra, Jarim Sebastián Rico Roma, María Mayela Berazaluze Fernández, Carlos Ibarra Perpuli y Valeria Peña Olivera, con el debido respeto comparezco y expongo:

Con fundamento en los artículos 1º, fracción I, 2, 3, 6, 17, 170, fracción I, 175, 176 y demás aplicables de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en vigor a partir del 3 de abril de 2013, en relación con los artículos 37, fracción I, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vengo a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y de la autoridad que materia continuación se mencionan, a cuyo efecto, y en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 175 de la Ley de Amparo, manifiesto:

I. NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DE QUIEN PROMUEVE EN SU NOMBRE.

GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V., con domicilio fiscal ubicado en Ferrocarril de Río Frio, número 419, interior CJ, Colonia Cuchilla del Moral, Delegación Iztapalapa, Código Postal 09310, en la Ciudad de México, promoviendo en su nombre JESÚS MORALES AGUILAR, con el mismo domicilio.

Se señala como domicilio para recibir notificaciones, el ubicado en

II. NOMBRE Y DOMICILIO DE LOS TERCEROS INTERESADOS.

a) El C. Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero, adscrito a la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en Avenida Hidalgo, número 77, Colonia Guerrero, en la Ciudad de México.

b) El C. Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con domicilio en Avenida Hidalgo, número 77, Módulo I, Planta Baja, Colonia Guerrero, Código Postal 06300, en la Ciudad de México.

III. AUTORIDAD RESPONSABLE.

La Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien dictó la sentencia que se reclama, y tiene su domicilio en Avenida Insurgentes Sur No. 881, Edificio Torre "O", Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03810, Ciudad de México.

IV. ACTO RECLAMADO.

La sentencia de fecha 3 de mayo de 2018, emitida por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dentro del juicio de nulidad 12852/13-17-05-2/905/14-S1-04-04-AS en la que se resolvió declarar la nulidad de la resolución impugnada contenida en el oficio número 900 06 02-2013-1012, expedido el 12 de marzo de 2013 por el Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual se determinó un crédito fiscal a cargo de mi representada en cantidad de \$2,973'173,576.85, para el efecto de que la autoridad fiscal, en caso de considerarlo procedente, en uso de sus facultades, emita una nueva resolución en la que determine la situación fiscal de parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia mayor a doce meses, regulado en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

V. FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, manifiesto que la sentencia de fecha 3 de mayo de 2018, fue notificada personalmente a mi mandante el 28 de mayo de 2018, surtiendo sus efectos al día hábil siguiente, es decir, el 29 del mismo mes y año.

Por lo que estando dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la notificación del acto impugnado a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, se promueve la presente demanda de garantías.

VI. DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTIAS INDIVIDUALES VIOLADAS.

Los consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

VII. LEYES APLICADAS INEXACTAMENTE O DEJADAS DE APLICAR.

1) Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

2) Ley de Amparo, reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3) Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4) Convención Americana sobre Derechos Humanos.

VIII. FUNDAMENTO DEL AMPARO Y COMPETENCIA:

Lo son los artículos 1°, 2, 3, 6, 17, 170, fracción I, 175, 176 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 37, fracción I, inciso b) y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Ese H. Tribunal Colegiado es competente para conocer de la presente demanda de garantías, pues la autoridad señalada como responsable es un Tribunal Administrativo que tiene su domicilio dentro de la jurisdicción del Primer Circuito al que pertenece ese H. Tribunal Colegiado, tal y como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:

SEGUNDA SALA
EN MATERIA AL
DEL PRIMER

"COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO POR TERRITORIO. SE DETERMINA ATENDIENDO AL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCION QUE PONE FIN AL JUICIO. Desde la creación de los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer de los juicios de amparo directo, por virtud de los decretos de reformas a los artículos 107, fracción VI, de la Constitución Federal y 44 de la Ley de Amparo, publicados en el Diario Oficial de la Federación del diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, se consagró que la competencia por territorio de dichos tribunales se establecería atendiendo al lugar del domicilio de la autoridad que dictara la sentencia o laudo reclamado. Esta norma que por efecto del Decreto de reformas a la ley publicado en el citado Diario de treinta de abril de mil novecientos sesenta y ocho, se trasladó al artículo 45 de la misma, debe seguir rigiendo en la actualidad, no obstante que el texto de este último numeral fue derogado por el Decreto publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro y no fue recogido en otro precepto pues, por una parte, la derogación de dicho artículo no obedeció al propósito del legislador de abandonar el sistema de distribución de competencia de naturaleza territorial, según se desprende del examen integral del decreto de reformas y de la exposición de motivos de la iniciativa de la cual derivó, sino que persiguió evitar que las demandas de amparo directo se presentaran indistintamente ante esta Suprema Corte o ante los Tribunales Colegiados de Circuito, ordenando su presentación por conducto de la autoridad responsable; y, por otro, tal regla competencial corresponde a la naturaleza del juicio de amparo directo en términos de lo dispuesto por los artículos 44, 46, 95, fracción VIII, 158 y 170 a 176 de la ley de la materia, ya que la procedencia de la vía directa ante los Tribunales Colegiados de

Circuito se surte a condición de que precisamente el acto reclamado sea una sentencia, laudo o resolución que ponga fin al juicio, lo cual explica que la competencia territorial se defina por el domicilio de la autoridad de quien provienen tales actos, al margen de que se reclame también su ejecución, pues en todo caso toca a la responsable proveer sobre la suspensión y al Tribunal Colegiado que ejerza jurisdicción en el lugar de su domicilio conocer del recurso de queja en contra de sus determinaciones en esta materia. Por tales razones, la competencia territorial de los tribunales de que se trata no se rige ni aun por analogía por el artículo 36 de la ley de la materia, dado que éste responde específicamente a los principios de los juicios de amparo indirecto ante los juzgados de Distrito."

Competencia 328/94. Suscitada entre el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de marzo de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.

Competencia 196/94. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 10 de marzo de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández.

Competencia 317/94. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 10 de marzo de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Constancio Carrasco Daza.

Competencia 329/94. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 10 de marzo de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Mariano Azuela Guitrón. Secretario: Francisco Sandoval López.

Competencia 345/94. Suscitada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito. 24 de marzo de 1995. Mayoría de tres votos. Disidentes: Genaro David Góngora Pimentel y Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Guillermo Loreto Martínez.

Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Época. Novena Época. Tomo I, Abril de 1995. Tesis. 2a. XVII/95. Página. 50. Tesis Aislada.

(Énfasis añadido)

De conformidad con la tesis antes transcrita, ese H. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito es competente para conocer el presente



TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
PRIMER CIRCUITO

juicio de garantías, en virtud de que la autoridad responsable es un tribunal administrativo federal que puso fin a un juicio contencioso administrativo a través de la sentencia reclamada y cuyo domicilio se encuentra en la Ciudad de México.

IX. PROCEDENCIA DEL AMPARO.

A. Ahora bien, el juicio de amparo en que se actúa, es procedente, de conformidad con el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, el cual establece textualmente lo siguiente:

"Artículo 170. El juicio de amparo directo procede:

I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.

FORMOSA
EN MATERIA
DEL P.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva

(...)"

(Énfasis y subrayado añadidos)

Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta procedente en contra de las sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales administrativos, respecto de las cuales no proceda ningún recurso ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, que contengan violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento que afecten a las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo.

Al respecto, resulta aplicable al caso concreto la tesis de jurisprudencia que se transcribe a continuación:

7

3131

"AMPARO DIRECTO. PROCEDE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE LA MATERIA, CONTRA SENTENCIAS DEFINITIVAS DICTADAS POR TRIBUNALES DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO CUANDO SEAN "APARENTEMENTE FAVORABLES" AL QUEJOSO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El artículo 170, fracción II, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, señala que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo, cuando éstas sean "favorables" al quejoso, para el único efecto de hacer valer los conceptos de violación contra las normas generales aplicadas. Por tanto, si en la sentencia impugnada la Sala responsable declaró la nulidad del acto reclamado para determinados efectos, con lo cual limitó el alcance de ésta, derivado de la omisión de pronunciarse sobre la pretensión deducida de la demanda, el sentido del fallo es "aparentemente favorable" al quejoso, por lo que no es aplicable al caso la fracción II del referido precepto, sino la I, en donde se establece que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas dictadas por tribunales administrativos, por la violación cometida en éstas que trascienda al resultado del fallo.

TRIBUNAL COLEGIADO
ADMINISTRATIVO
PRIMER CIRCUITO

DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 519/2013. José Fernando Sánchez González. 7 de agosto de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Molina Covarrubias. Secretaria: Laura Elizabeth Miranda Torres

Amparo directo 907/2013. Holzer y Cía., S.A. de C.V. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Molina Covarrubias. Secretario: Rubén Olvera Arreola.

Amparo directo 16/2014. José Cázares Mendoza. 12 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: María Guadalupe Molina Covarrubias. Secretaria: Laura Elizabeth Miranda Torres.

Amparo directo 14/2014. Jorge Arturo Escamilla Rodríguez. 19 de febrero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretario: Carlos Augusto Amado Burguete.

Amparo directo 1186/2013. 5 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretaria: Miguelina Joaquín Amar.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencia 2a./J. 90/2014 (10a.), de título y subtítulo: "RESOLUCIÓN FAVORABLE. SU ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas y en su Gaceta, Décima Época, Libro 10, Tomo I, septiembre de 2014, página 768.

Esta tesis se publicó el viernes 06 de marzo de 2015 a las 09:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 09 de marzo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época
 Registro: 2008594
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
 Tipo de Tesis: Jurisprudencia
 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
 Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III
 Materia(s): Común
 Tesis: I.16o.A. J/4 (10a.)
 Página: 2154"

De la jurisprudencia anteriormente transcrita, se desprende que si en la sentencia impugnada la Sala responsable declaró la nulidad del acto reclamado para determinados efectos, con lo cual limitó el alcance de ésta, por lo que no obstante el sentido del fallo es "aparentemente favorable" al quejoso, resulta procedente la interposición de un juicio de amparo directo en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo.

Así, en el caso que nos ocupa, el presente juicio de garantías se promueve en contra de una sentencia dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del H. Tribunal Federal de Justicia Administrativa al resolver el juicio de nulidad 12852/13-17-05-2/905/14-S1-04-04-AS que decidió el juicio en lo principal declarando la nulidad para efectos de la resolución impugnada, contra la cual no procede ningún recurso ordinario por el que pueda ser modificada o revocada.

En efecto, como se demostrará en el capítulo de "Conceptos de Violación" del presente escrito de demanda de amparo, la sentencia que se reclama fue dictada en contravención a diversos derechos humanos y garantías de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por aplicación indebida de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que la presente demanda de garantías resulta procedente.

En este sentido, como ese H. Tribunal podrá apreciar, mi representada cuenta con el derecho subjetivo a que hace referencia el artículo 5 de la Ley de Amparo para interponer la presente demanda.

B. Por otra parte, la presente demanda de amparo directo resulta procedente en virtud de que si bien la sentencia que por esta vía se combate declaró la nulidad del acto impugnado, lo cierto es que la H. Sala Responsable resolvió que la misma debe ser para el efecto de que la autoridad demandada, de considerarlo procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación fiscal de la hoy parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro

fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

Sin embargo, es importante señalar que mi representada busca obtener un mayor beneficio que el otorgado en la sentencia reclamada, puesto que como se puede apreciar, dicha sentencia abre la posibilidad para las autoridades demandadas de reponer sus actuaciones, en perjuicio de la hoy quejosa; siendo que el efecto de que hayan resultado fundados diversos argumentos que denotan la indebida fundamentación y motivación en que incurrió la autoridad fiscal, debieron de haber sido suficientes para que mi representada hubiese obtenido la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada contenida en oficio número 900 06 02-2013-1012 de fecha 12 de marzo de 2013, lo que impediría que las demandadas repusieran las actuaciones en ejercicio de sus facultades de comprobación, contrario a lo señalado en el fallo reclamado; situación por la cual resulta procedente el juicio de amparo directo.

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación:

SEXTOS
COLEGIADO
ADMINISTRATIVA
QUINTO

"NULIDAD PARA EFECTOS. EXISTE INTERES JURIDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA SENTENCIA QUE DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE UNA RESOLUCIÓN EXPRESA, SI EL QUEJOSO PRETENDE QUE DEBIO SER LISA Y LLANA. Cuando la parte actora en un juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación demanda la nulidad de una resolución expresa y obtiene solamente la nulidad para efectos, y no la lisa y llana que pretende, se le causa un perjuicio directo a su interés jurídico, en tanto que la sentencia aparentemente favorable limita el alcance de la nulidad demandada. Lo anterior, con independencia de que, en su caso, pudiera demandar la nulidad del nuevo acto que dictara la autoridad administrativa en acatamiento de la sentencia del Tribunal Fiscal."

Contradicción de tesis 8/96. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, 13 de septiembre de 1996. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Angelina Hernández Hernández.

Tesis de jurisprudencia 50/96 Aprobada por la Segunda Sala de este alto tribunal, en sesión pública de trece de septiembre de mil novecientos noventa y seis, por unanimidad de cinco votos de los Ministros: Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Genaro David Góngora Pimentel.

Época: Novena Época

Registro: 200523

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo IV, Octubre de 1996

Materia(s): Común

Tesis: 2a./J. 50/96

Página: 282

(Énfasis añadido)

Como se desprende de la jurisprudencia transcrita, cuando la parte actora en el juicio de nulidad obtiene solamente la nulidad para efectos, y no la lisa y llana que pretende, se le causa un perjuicio directo a su interés jurídico, en tanto que la sentencia aparentemente favorable limita el alcance de la nulidad demandada.

Incluso, el Poder Judicial de la Federación ha reconocido que la calificación de una sentencia como favorable depende de la satisfacción de las pretensiones de las partes, por lo que no podrá estimarse como resolución favorable aquella que únicamente declare parcialmente fundadas las peticiones del accionante.¹

De la tesis anteriormente transcrita se desprende, en la parte que interesa, que la calificación de una sentencia como favorable depende de la satisfacción de las pretensiones de las partes, por lo que no podrá estimarse como resolución favorable aquella que únicamente declare parcialmente fundadas las peticiones del accionante.

De lo anterior, claramente se observa que procede el juicio de amparo directo, aún y cuando la resolución que se pretende combatir declare la nulidad para efectos de la resolución impugnada, ya que la pretensión de la entonces actora era obtener una nulidad lisa y llana, lo que se traduce en una lesión a su interés jurídico. MATERIA A DEL PRIME

C. De igual manera es importante mencionar, que no es obstáculo a la procedencia de la presente demanda de amparo directo, el hecho que la misma se hubiera dictado en cumplimiento a una sentencia emitida el 15 de marzo de 2018, por

¹ "AMPARO DIRECTO. PARA LOS EFECTOS DE SU PROCEDENCIA CONFORME AL ARTÍCULO 170, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA, POR RESOLUCIÓN FAVORABLE DEBE ENTENDERSE AQUELLA QUE SATISFIZO TODAS LAS PRETENSIONES DEL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD. Del precepto citado se advierte que el juicio de amparo directo que promueva quien obtuvo una resolución favorable emitida por un tribunal de lo contencioso administrativo, sólo procederá cuando en él se hagan valer argumentos contra las normas generales aplicadas. Luego, para delimitar el contenido de la locución "favorable", es necesario acudir a los criterios sostenidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que el quejoso tiene interés jurídico para promover amparo contra las sentencias emitidas por los tribunales administrativos, que si bien determinaron la nulidad del acto impugnado, lo hicieron para efectos diversos a los planteados por el accionante. En ese sentido, se concluye que la calificación de favorable depende de la satisfacción de las pretensiones de las partes, esto es, podrá considerarse como tal, aquella resolución en la que el actor en el juicio de nulidad obtenga todo lo pedido y, a contrario sensu, no podrá estimarse así el pronunciamiento que únicamente declare parcialmente fundadas las peticiones del accionante, sin que lo anterior tenga el alcance de considerar que, en todos los casos en que los tribunales de lo contencioso administrativo desestimen uno o varios conceptos de impugnación, ello se traduzca en una sentencia parcialmente favorable, ya que lo que debe analizarse es que el fondo de la pretensión del actor se satisfaga, lo que incluso puede suceder cuando uno de los agravios del gobernado resulta fundado, aun cuando los demás se desestimen."

Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época, Registro: 2005655, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: (V Región) 5o. 19 A (10a.), Página: 2178

(Énfasis añadido)

el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, al resolver el recurso de revisión fiscal R.F. 8/2017.

Lo anterior es así, toda vez que en la misma se está reclamando un acto considerado contrario a lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues como se demostrará a lo largo de la presente demanda, en la especie era conducente declarar la nulidad lisa y llana del acto impugnado, y no la nulidad para efectos.

Ello sin que sea óbice que la sentencia impugnada se hubiere dictado en cumplimiento de una ejecutoria de garantías.

Lo anterior es así, porque si como consecuencia del cumplimiento de una sentencia de amparo directo se materializa contra una de las partes el perjuicio para impugnar una violación a las leyes del procedimiento, ésta puede impugnar la resolución dictada en cumplimiento de la sentencia, pero sólo por violaciones cometidas durante el procedimiento, sin que ello sea atentatorio de la cosa juzgada, pues sólo se revisaría la violación alegada y, de concederse el amparo, sería para el único efecto de que se reponga el procedimiento y se subsane la violación cometida, sin que esto implique volver a revisar lo determinado en cuanto al fondo por el tribunal de amparo en el primer juicio de garantías.

Así las cosas, en la especie de concederse el amparo, sólo se estaría reponiendo el procedimiento, para el único efecto de que declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, en base a lo ya determinado por la Sala responsable en cuanto al fondo del asunto, lo cual no es intención de la ahora quejosa, ni pretende que ese H. Tribunal Colegiado vuelva a analizar.

Es decir, de lo que se duele mi representada en el presente juicio de amparo es de una violación meramente procesal, ya que de una debida aplicación de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Sala responsable debió haber declarado la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen, y no a nulidad para efectos declarada, pero no se pretende someter a ese H. Tribunal Colegiado ninguna cuestión de fondo que haya sido resuelta y constituya cosa juzgada, respecto a la debida fundamentación y motivación de dicha resolución impugnada en el juicio de origen.

Apoya lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, misma que es de aplicación obligatoria para ese H. Tribunal Colegiado en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo:

"VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN VÍA AMPARO DIRECTO, AUN CUANDO LA RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO SE HUBIERE DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE GARANTÍAS, SI ES HASTA ESE MOMENTO

QUE LA VIOLACIÓN TRASCIENDE AL RESULTADO DEL FALLO. Conforme a los artículos 158, 159, 160 y 161 de la Ley de Amparo, cuando durante la secuela del procedimiento se emite un acto considerado contrario a las reglas que lo rigen -con excepción de aquellos respecto de los que procede el amparo indirecto-, la parte que considere que el acto fue violatorio debe esperar a que el perjuicio se materialice en la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio que sea contrario a sus intereses para promover el amparo, sin que sea óbice que la sentencia en que se materializa el perjuicio se hubiere dictado en cumplimiento de una ejecutoria de garantías. Lo anterior es así, porque si como consecuencia del cumplimiento de una sentencia de amparo directo se materializa contra una de las partes el perjuicio para impugnar una violación a las leyes del procedimiento, ésta puede impugnar la resolución dictada en cumplimiento de la sentencia, pero sólo por violaciones cometidas durante el procedimiento, sin que esto sea atentatorio de la cosa juzgada, pues sólo se revisaría la violación alegada y, de concederse el amparo, sería para el único efecto de que se reponga el procedimiento y se subsane la violación cometida, sin que esto implique volver a revisar lo determinado en cuanto al fondo por el tribunal de amparo en el primer juicio de garantías. En efecto, si al reponerse el juicio y subsanarse la violación se llegare a dictar sentencia en sentido contrario a la que fue dictada en vías de cumplimiento, no se afectaría la cosa juzgada, ya que el tribunal colegiado sólo habría determinado que con los elementos aportados a juicio debía resolverse en determinado sentido; empero, si los elementos cambian en virtud de la violación procesal que se subsana, lo analizado por el tribunal colegiado en el primer amparo es distinto."

Contradicción de tesis 112/2011. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito. 7 de septiembre de 2011. Cinco votos. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretario: Jesús Antonio Sepúlveda Castro.

Tesis de jurisprudencia 128/2011 (9a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha diecinueve de octubre de dos mil once.

Época: Décima Época

Registro: 160333

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 3

Materia(s): Común

Tesis: 1a./J. 128/2011 (9a.)

Página: 2679

(Énfasis añadido)

De la jurisprudencia transcrita claramente se desprende que es del todo procedente un juicio de amparo directo, en contra de una sentencia dictada en



"CIMOCTAVO TRIBUNAL
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO"

cumplimiento a un juicio de garantías, si en la misma se demuestra que sólo se está reclamando una mera violación procesal que trasciende al resultado del fallo, y que nada tiene que ver sobre cuestiones de fondo ya analizadas, y respecto de las que ya hay cosa juzgada.

En estos términos, dado que la sentencia que se reclama lesiona los intereses de mi mandante en cuanto a la indebida aplicación de las normas procesales contenidas en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, por lo que el presente juicio de garantías resulta plenamente procedente.

D. Por último, resulta procedente el presente juicio de amparo directo en virtud de que de confirmarse la postura de la Sala responsable y de la autoridad fiscal, los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo resultarían violatorios de los derechos fundamentales y garantías individuales previstas en la Constitución Federal y reconocidos en instrumentos internacionales celebrados por nuestro país, por lo que mi mandante hace valer argumentos de inconstitucionalidad en contra de dicho preceptos.

Al respecto, de la lectura que efectúe ese H. Tribunal Colegiado del segundo párrafo del artículo 175 de la Ley de Amparo, podrá desprender que la procedencia del juicio de amparo directo contra leyes surge, *cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia.*

Sobre la procedencia del amparo directo contra leyes, existen criterios jurisprudenciales dictados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Tribunales Colegiados de Circuito, que establecen lo siguiente:

"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. PUEDEN IMPUGNARSE NORMAS GENERALES TANTO AUTOAPLICATIVAS COMO HETEROAPLICATIVAS, BAJO LA CONDICIÓN DE QUE SEA CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN. De la interpretación relacionada de los artículos 73, fracción XII, párrafo último, 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desprende que en el juicio de amparo directo pueden impugnarse normas tanto autoaplicativas (que son aquellas que por su sola vigencia generan una afectación a los que se encuentren inmersos en su hipótesis legal) como hetero aplicativas (que son aquellas que requieren de un acto de aplicación para actualizar un perjuicio al gobernado) pero en ambos casos se requiere que esa impugnación se sustente en la actualización de un acto concreto de aplicación en la sentencia definitiva, resolución que haya puesto fin al juicio o en el procedimiento relativo, que perjudiquen al quejoso, no así por su sola vigencia, ya que en esa vía del juicio de amparo la ley no constituye un acto reclamado y su examen se encuentra determinado por la trascendencia que haya tenido su aplicación en el sentido del fallo reclamado, siendo el

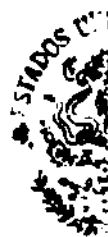
análisis de la norma general aplicada un argumento más para decidir sobre la constitucionalidad de la resolución reclamada."

(Énfasis añadido)

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 5543/2003. 15 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Armando Cortés Galván. Secretario: Israel Flores Rodríguez.

"AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. EN LA DEMANDA RESPECTIVA ES FACTIBLE PLANTEAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE CUALQUIER DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL. El párrafo segundo de la fracción IV del artículo 166 de la Ley de Amparo, adicionado mediante decreto de veintinueve de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, establecía que "Cuando se impugne la sentencia definitiva o laudo por estimarse inconstitucional la ley aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la ley, y la calificación de ésta por el tribunal de amparo se hará en la parte considerativa de la sentencia"; posteriormente, mediante el diverso decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos ochenta y siete, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho, se modificó el referido párrafo, sustituyendo el término "ley" por "la ley, el tratado o el reglamento", en concordancia con la adición de un tercer párrafo al diverso numeral 158, que hace referencia a las cuestiones surgidas dentro del juicio, que no sean de imposible reparación, sobre constitucionalidad de leyes, tratados internacionales o reglamentos, los cuales sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, asimismo, en el artículo 114, fracción I, de la propia ley, el legislador modificó la expresión genérica "contra leyes" y en su lugar hizo referencia no sólo a leyes y reglamentos federales o locales y tratados internacionales, sino incluso a una categoría específica de normas generales, constituida por "otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general". Ahora bien, de la interpretación teleológica de la exposición de motivos de los numerales citados, se advierte que la finalidad de la reforma aludida fue la de asignar a los Tribunales Colegiados de Circuito el control de la constitucionalidad de los reglamentos autónomos y municipales, por lo que es indudable que al referirse el legislador en los citados artículos 166 y 158, párrafo tercero, a "reglamentos", no tuvo en modo alguno la intención de limitar la posibilidad de impugnar disposiciones de observancia general en amparo directo, a diferencia de lo establecido en el artículo 83, fracción V, de dicha ley, sino que se refirió tanto a los reglamentos expedidos por el presidente de la República o los gobernadores de los Estados, como a la categoría de normas que en el citado numeral 114, fracción I, se integra por "otros reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general", por lo que en la demanda de amparo directo sí puede plantearse la inconstitucionalidad de cualquier disposición de observancia general, no sólo de tratados internacionales, leyes o reglamentos federales o locales. Lo anterior es congruente con el sistema de impugnación de actos de la aludida naturaleza, conforme al cual los gobernados pueden optar por controvertir la constitucionalidad de las disposiciones de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación acudiendo desde luego al amparo indirecto, o bien, agotar el recurso o medio de defensa legal que proceda contra ese primer



FCIMOCTAVO TR.
EN MATERIA A.
DEL PRIMER

acto y, en contra de la resolución que recaiga a éste, en su caso, promover amparo directo planteando tal cuestión."

(Énfasis añadido)

Amparo directo en revisión 1661/2001. Consorcio Hotelero Plus, S.A. de C.V. 20 de febrero de 2002. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Gutiérrez. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Cepeda Anaya.

De los criterios jurisprudenciales transcritos, se colige que el juicio de amparo directo será procedente en contra de las sentencias definitivas o laudos que dicten los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, siempre y cuando no exista algún medio de defensa ordinario por el que puedan ser modificadas o revocadas, además de que exista un tema sobre la inconstitucionalidad de una Ley, Reglamento o Tratado que haya sido aplicado en perjuicio del quejoso.

En la especie, al ser el acto reclamado la sentencia de 3 de mayo de 2018 emitida por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en la que se puso fin al juicio contencioso administrativo de referencia, la Sala responsable aplica los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que resulta violatorio de derechos humanos y de las garantías constitucionales.

Respecto a la procedencia del juicio de amparo en contra de la aplicación implícita de las normas tildadas de inconstitucionales, existen criterios jurisprudenciales, mismos que a la letra señalan:

"REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. LA APLICACIÓN IMPLÍCITA DE NORMAS CONSIDERADAS INCONSTITUCIONALES NO LA HACE IMPROCEDENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 53/2005, de rubro: "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, CUANDO SE IMPUGNEN POR SU APLICACIÓN EN EL ACTO O RESOLUCIÓN DE ORIGEN Y NO SE ACTUALICE LA HIPÓTESIS DE SUPLENCIA DE LA QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO (MATERIA ADMINISTRATIVA).", estableció como requisito de procedencia del amparo directo, el acreditamiento de la aplicación de la norma controvertida y el perjuicio directo y actual a la esfera jurídica del quejoso. Ahora bien, para efectos de la revisión en amparo directo no existe inconveniente legal alguno en que dicha aplicación sea implícita, pues lo importante es identificar el perjuicio que aquélla genera en la esfera jurídica del gobernado, el cual se evidencia por el resultado que produce la referida aplicación de la norma."

(Subrayado añadido)

Amparo directo en revisión 1965/2008. Bianey Vázquez Lara. 27 de mayo de 2009. Mayoría de tres votos. Disidente: Genaro David Góngora Pimentel. Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretaria: Sofía Verónica Ávalos Díaz.

Nota: La tesis 2a./J. 53/2005 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 478.

AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ES FACTIBLE EL ANÁLISIS CONSTITUCIONAL DE LAS NORMAS JURÍDICAS IMPLÍCITAMENTE APLICADAS EN LA SENTENCIA RECLAMADA O EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ORIGEN. Si bien los artículos 50., fracción VII y 62 de la Ley de Comercio Exterior (que se tildaron de inconstitucionales) no fueron aplicados expresamente en la sentencia reclamada ni en el acto administrativo de origen, pero tales preceptos sirvieron de fundamento legal a la resolución que estableció la cuota compensatoria y este acto-regla fue aplicado en el acto administrativo impugnado, resulta indudable que existió aplicación implícita de las normas tildadas de inconstitucionales, de modo que si en el juicio de amparo indirecto es procedente el examen de constitucionalidad de leyes cuando son implícita o tácitamente aplicadas, por identidad de razón también es procedente el examen del tema constitucional en el juicio de amparo directo cuando la norma jurídica se aplique implícitamente en el acto administrativo impugnado originariamente o en la sentencia reclamada."

(Subrayado añadido)

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 442/2003. Rosalinda Núñez Perea 13 de enero de 2004 Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla Secretario: José Luis Cruz Álvarez.

ESTADOS UNIDOS
FOMENTO DE
EN MATERIA
DEL PRIMER

De las tesis anteriormente transcritas, se desprende que resulta procedente el juicio de amparo directo en contra de normas jurídicas implícitamente aplicadas en la sentencia reclamada.

En estos términos, dado que la sentencia que se reclama lesiona los intereses de mi mandante y viola en su perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, el presente juicio de garantías resulta plenamente procedente.

Una vez acreditada la procedencia del presente juicio de amparo, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, a continuación manifiesto cuáles son los hechos o abstenciones que me constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado y el fundamento de los conceptos de violación.

X. HECHOS

1. Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (antes Grupo Elektra, S.A. de C.V.), es una sociedad legalmente constituida al amparo de las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Grupo Elektra, S.A. de C.V. (ahora Grupo Elektra, S.A.B. de C.V.), adquirió, el 18 de diciembre de 2003, el 99.99% de las acciones de la sociedad denominada Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V.

2.1 La sociedad Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V., surge como sociedad escindida, de la escisión de la sociedad Desarrollo de

Infraestructura, S.A. de C.V., tal y como consta en el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 8 de diciembre de 2003.

2.2 Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V., a la fecha de la escisión, contaba con pérdidas fiscales sufridas en los ejercicios 1994, 1997, 1999 y 2000, cuya suma histórica era de \$974'985,910.00, mismas que al momento de la escisión se encontraban pendientes de amortizar.

2.3 Conforme a los dictámenes y declaraciones presentadas para efectos fiscales en los ejercicios posteriores a la escisión y hasta 2007, la sociedad escindida Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V., siempre manifestó que, en la interpretación que ella misma y la escidente hicieron del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, le fueron transmitidas pérdidas fiscales por un monto de \$974'985,910.00, mismas que fueron amortizadas contra las utilidades fiscales de los ejercicios de 2004, 2005 y 2007, sin que hasta el día de hoy las autoridades hayan ejercido sus facultades para determinar contribuciones omitidas o emitido alguna resolución dirigida a dichos contribuyentes, objetando o cuestionando dicha circunstancia.

3. Grupo Elektra, S.A. de C.V. (ahora Grupo Elektra, S.A.B. de C.V.), adquirió, el 28 de diciembre de 2005, el 99.99% de las acciones de la sociedad denominada Proveedor de Contenidos CSP, S.A. de C.V.

3.1 La sociedad Proveedor de Contenidos CSP, S.A. de C.V., surge como sociedad escindida de la escisión de la sociedad escidente denominada Terra Networks México, S.A. de C.V., tal y como consta en el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas celebrada el 24 de noviembre de 2005.

3.2 Terra Networks México, S.A. de C.V., a la fecha de la escisión, contaba con pérdidas fiscales sufridas en los ejercicios 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005, cuya suma histórica era de \$651'098,323.00, mismas que se encontraban pendientes de amortizar.

3.3 Conforme a los dictámenes y declaraciones presentadas para efectos fiscales en los ejercicios posteriores a la escisión y hasta 2007, la sociedad escindida Proveedor de Contenidos CSP, S.A. de C.V., siempre manifestó que, en la interpretación que ella misma y la escidente hicieron del artículo 61 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, le fueron transmitidas pérdidas fiscales por un monto de \$651'098,323.00., mismas que fueron amortizadas contra la utilidad fiscal del ejercicio de 2006, sin que hasta el día de hoy las autoridades hayan ejercido sus facultades para determinar contribuciones omitidas o emitido alguna resolución dirigida a dichos contribuyentes, objetando o cuestionando dicha circunstancia.

4. Mediante asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada el 6 de octubre de 2003, Grupo Elektra, S.A. de C.V. (ahora Grupo Elektra, S.A.B. de C.V.), suscribió 60'843,896 acciones a la sociedad denominada Empresas

Turísticas Integradas, S.A. de C.V., empresa que cambia de denominación el 7 de octubre de 2003, por Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V.

4.1. Al cierre del ejercicio fiscal de 2003, la sociedad Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V. (ahora Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V.) contaba con pérdidas fiscales sufridas en los ejercicios 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, cuya suma histórica era de \$218'903,213.00, mismas que al momento de la suscripción de las acciones por parte de Grupo Elektra, S.A. de C.V. (ahora Grupo Elektra, S.A.B de C.V.), se encontraban pendientes de amortizar.

4.2 Dichas pérdidas fiscales fueron amortizadas por la sociedad Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V., contra sus utilidades en los ejercicios fiscales 2003, 2004 y 2005.

5. Elektra Com, S.A. de C.V., es una sociedad cuyas acciones en un 99.99% eran propiedad de Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (antes Grupo Elektra, S.A. de C.V.) en 2007.

6. Mediante asamblea general extraordinaria celebrada el 30 de septiembre de 2007, se acordó llevar a cabo la fusión entre Elektra Com, S.A. de C.V. (sociedad fusionante) y las sociedades Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V., Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V. y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V. (sociedades fusionadas), todas ellas propiedad de Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (antes Grupo Elektra, S.A. de C.V.).

7. Mediante asamblea general extraordinaria de accionistas, celebrada 30 de octubre de 2007, se acordó el aumento de capital social de la sociedad Elektra Com, S.A. de C.V., derivado de la aportación por parte de Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (antes Grupo Elektra, S.A. de C.V.) de la cantidad de \$500'000,000.00.

8. Con fecha 31 de octubre de 2007, y según consta en el acta de asamblea general extraordinaria de accionistas de dicha fecha, la sociedad denominada Elektra Com, S.A. de C.V., se escindió, subsistiendo ella y surgiendo como sociedad escindida Dilocom, S.A. de C.V.

Cabe mencionar que en los balances aprobados para fines de dicha escisión, ya se encontraban reconocidos los \$500,000,000.00 que fueron aportados al capital de Elektra Com, S.A. de C.V.

9. El 31 de diciembre de 2007, Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (antes Grupo Elektra, S.A. de C.V.), enajenó las acciones de su propiedad, representativas del capital social de la sociedad denominada Dilocom, S.A. de C.V., y como resultado de dicha enajenación y aplicando lo dispuesto en los artículos 24 y 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, determinó una pérdida en venta de acciones, misma que fue declarada en la declaración del ejercicio fiscal de 2007.

Para tal efecto, mi mandante utilizó los datos contenidos en las declaraciones y dictámenes que habían sido presentados por todas las empresas que fueron fusionadas en Elektra Com, S.A. de C.V., mismos que hasta donde tuvo conocimiento, nunca fueron objeto del ejercicio de facultades para determinar contribuciones omitidas o de alguna resolución que los cuestionase o modificase.

10. Mediante sentencia de fecha 13 de octubre de 2008, emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 179/2008, se resolvió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (antes Grupo Elektra, S.A. de C.V.), para la no aplicación de la fracción XVII del artículo 32, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y, consecuentemente, se le permita deducir la pérdida fiscal derivada de enajenación de acciones, sin las limitantes contenidas en el mismo.

11. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante oficio 900-06-02-02-00-2010-05715, emitido el 26 de mayo de 2010 por la Administración de Fiscalización al Sector Financiero "2", adscrita a la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, dependiente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria y notificado el 1° de junio de 2010, se citó al C.P. Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, para la revisión de sus papeles de trabajo que elaboró con motivo del dictamen fiscal que emitió de mi mandante Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. (antes Grupo Elektra, S.A. de C.V.), por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007, con relación a la contribución de la que es sujeto directo en materia de impuesto sobre la renta, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 52-A, primer párrafo, fracción I, inciso b), del Código Fiscal de la Federación vigente en 2010, específicamente respecto al renglón "Pérdida en enajenación de acciones" declarada en cantidad de \$4,105'369,784.80.

12. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante oficio 900-06-02-02-00-2010-05818, emitido el 23 de septiembre de 2010 por la Administración de Fiscalización al Sector Financiero "2", adscrita a la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, dependiente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria y notificado el 29 de septiembre de 2010, se le solicitó diversa información y documentación al C.P. Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, con motivo de la elaboración del dictamen fiscal del ejercicio 2007 de mi mandante, relativa al renglón "Pérdida en enajenación de acciones" declarada en cantidad de \$4,105'369,784.80.

13. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante escrito presentado el 21 de octubre de 2010, en la oficialía de partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de entrada 17348, el C.P. Gustavo Gabriel Llamas Monjardín, proporcionó diversa información y documentación relativa al renglón "Pérdida en enajenación de acciones" declarada

en cantidad de \$4,105'369,784.80, misma que a juicio de dicha autoridad, no fue suficiente para verificar la situación fiscal de mi representada.

14. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante oficio 900-06-2011-256 de fecha 1° de abril de 2011, emitido por la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, adscrito a la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, notificado el 11 de abril de 2011, se dio a conocer el inicio de facultades para determinar contribuciones omitidas, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, primer párrafo, fracción II y antepenúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación vigente en 2011, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007 y se le solicitó a Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., documentación e información relativa al renglón "Pérdida en enajenación de acciones" por \$4,105'369,784.80.

15. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante escrito ingresado el 3 de mayo de 2011, en la oficialía de partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de entrada 06861, mi mandante proporcionó diversa información y documentación, relativa al renglón citado en el oficio 900-06-2011-256 antes referido.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
EN MATERIA A
DEL PRIME

16. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante oficio 900-06-02-02-00-2011-4296 del 26 de agosto de 2011, emitido por la C.P. María Angélica Jiménez Lara Administradora de Fiscalización al Sector Financiero "2", adscrita a la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, dependiente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, mismo que fue notificado el 30 de agosto de 2011, se le solicitó a mi mandante documentación e información complementaria relativa a la "Pérdida en enajenación de acciones" por \$4,105'369,784.80.

17. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante escrito presentado el 22 de septiembre de 2011, en la oficialía de partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de entrada 013690, firmado por Jesús Morales Aguilar, en su carácter de Representante Legal de la contribuyente revisada, proporcionó diversa información y documentación complementaria, relativa al renglón citado en el oficio 900-06-02-02-00-2011-4296 antes referido.

18. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante oficio 900 06-02-02-2012-4362 del 14 de agosto de 2012, emitido por la C.P. María Angélica Jiménez Lara Administradora de Fiscalización al Sector Financiero "2", adscrita a la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, dependiente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, notificado el 15 del mismo mes y año, se le volvió a solicitar a mi mandante documentación e información complementaria relativa a la "Pérdida en enajenación de acciones" por \$4,105'369,784.80.

19. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante escrito presentado el 4 de septiembre de 2012, en la oficialía de partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de entrada 120021967, firmado por Jesús Morales Aguilar, en su carácter de Representante Legal, solicitó prórroga por diez días hábiles más, para cumplir con el requerimiento de información y documentación.

20. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante oficio 900 06 02 2012-4371 del 06 de septiembre de 2012, emitido por la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, notificado el 12 del mismo mes y año, le otorgó a mi representada la prórroga solicitada.

21. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, a efecto de desahogar el requerimiento efectuado por la autoridad fiscal en el oficio 900 06-02-02-2012-4362 del 14 de agosto de 2012, mediante escrito presentado el 19 de septiembre de 2012, en la oficialía de partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 120023847, mi mandante, manifestó y proporcionó diversa información y documentación relativa a la "Pérdida en Enajenación de acciones" por \$4,105'369,784.80.

22. Según lo sostenido en la resolución originalmente impugnada, mediante oficio 900-06-02-02-002-2012-4378 del 2 de octubre de 2012, emitido por la C.P. María Angélica Jiménez Lara, en su carácter de Administradora de Fiscalización al Sector Financiero "2" adscrita a la Administración Central de Fiscalización al Sector Financiero, dependiente de la Administración General de Grandes Contribuyentes, del Servicio de Administración Tributaria, se le dio a conocer a mi representada los hechos u omisiones conocidos que entrañaron incumplimiento de las disposiciones fiscales, en relación a la revisión sobre sus estados financieros, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007, otorgándole el plazo legal señalado en la fracción VI, del citado ordenamiento contados a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del oficio de observaciones, para presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones asentados en el mismo conforme a la fracción VI, así como para optar por corregir su situación fiscal, conforme a la fracción VIII, del mencionado artículo.

23. No obstante que mi representada nunca pudo cerciorarse de la competencia de la autoridad al emitir el oficio de observaciones, puesto que la misma no estaba debidamente fundado, mediante escrito presentado el 5 de noviembre de 2012, en la oficialía de partes de la Administración General de Grandes Contribuyentes, con folio de recepción 120029373, firmado por Jesús Morales Aguilar, representante legal de Grupo Elektra, S.A.B. de C.V., antes Grupo Elektra, S.A. de C.V., se hicieron diversos argumentos tendientes a desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de observaciones número 900 06 02-02-00-2012-4378, del 2 de octubre de 2012, dentro del plazo que a su efecto otorgó la autoridad fiscal.

24. No obstante lo anterior, mediante resolución contenida en el oficio 900 06 02-2013-1012, expedida el 12 de marzo de 2013 por el Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero, adscrito a la Administración General de Grandes Contribuyentes, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, se determinó un crédito fiscal a mi mandante en cantidad de \$2,973'173,576.85 (dos mil novecientos setenta y tres millones, ciento setenta y tres mil quinientos setenta y seis pesos 85/100 M.N.), por concepto de impuesto sobre la renta y accesorios, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007.

25. Inconforme con lo anterior, el 29 de mayo de 2013 mi representada interpuso una demanda de nulidad en contra del referido oficio, misma que fue turnada para su estudio y resolución a la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa bajo el número de expediente 12852/13-17-05-2.

Derivado de la cuantía del asunto, la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa aceptó ejercer su facultad de atracción, por lo que una vez cerrada la instrucción en el juicio, el expediente fue remitido para su resolución a la Primera Sección de la Sala Superior del referido Tribunal bajo el número de expediente 12852/13-17-05-2/905/14-S1-04-04.

26. En sesión celebrada el 11 de septiembre de 2014 los Magistrados integrantes de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvieron reconocer la validez de la resolución contenida en el oficio 900 06 02-2013-1012, expedida el 12 de marzo de 2013 por el Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero, adscrito a la Administración General de Grandes Contribuyentes, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, en la cual se determinó un crédito fiscal a mi representada en cantidad de \$2,973'173,576.85 (dos mil novecientos setenta y tres millones, ciento setenta y tres mil quinientos setenta y seis pesos 85/100 M.N.), por concepto de impuesto sobre la renta y accesorios, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007.

27. Inconforme con lo anterior, el 24 de noviembre de 2014 mi representada interpuso una demanda de amparo directo en contra de la referida sentencia, misma que fue turnada para su estudio y resolución al Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 885/2014.

28. Más tarde, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 10/2008, se informó que en sesión celebrada el 20 de abril de 2015, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región apoyaría en el dictado de sentencias al Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

29. Mediante sentencia de fecha 2 de marzo de 2016 dictada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla (en auxilio del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito), resolvió otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal a Grupo Elektra, S.A.B. de C.V. en contra de la sentencia del 11 de septiembre de 2014 dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del antes Tribunal Federal de Justicia Administrativa dentro del juicio de nulidad 12852/13-17-05-2/905/14-S1-04-04.

30. Derivado de lo anterior, con fecha 31 de marzo de 2016 la Primera Sección de la Sala Superior del referido Tribunal, dictó sentencia en cumplimiento a la ejecutoria de 2 de marzo de 2016 emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla, y declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

31. Inconforme con la sentencia de 2 de marzo de 2016, el Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos, en suplencia del Subprocurador Fiscal Federal de Amparos, interpuso en su contra recurso de revisión, mismo que fue remitido a la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación para su conocimiento, estudio y resolución.

32. El 26 de mayo de 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la autoridad en contra de la sentencia de 2 de marzo de 2016, mismo que fue turnado para su estudio y resolución a la ponencia del Ministro Eduardo Tomás Medina Mora Icaza, bajo el número de expediente 2311/2016.

33. El 1° de junio de 2016, mi mandante presentó un recurso de reclamación en contra del referido acuerdo admisorio de 26 de mayo de 2016, mismo que fue turnado para su estudio y resolución a la ponencia del Ministro Alberto Pérez Dayán, bajo el número de expediente 882/2016.

34. Mediante sesión del 21 de septiembre de 2016 se declaró fundado el recurso de reclamación interpuesto por mi mandante en contra del acuerdo de 26 de mayo de 2016 y, en consecuencia, se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad en contra de la sentencia de 2 de marzo de 2016.

35. El 7 de septiembre de 2016 la hoy quejosa fue notificada del recurso de revisión fiscal promovido por la autoridad en contra de la sentencia dictada por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa el 31 de marzo de 2016, así como en contra de su aclaración, mismo que fue turnado para su estudio y resolución al Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el número de expediente 449/2016.

En dicho recurso, la autoridad argumentó que la sentencia de 31 de marzo de 2016 era ilegal, pues la misma fue emitida antes de que la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 885/2014 se encontrara firme, entre otros argumentos.

36. En ese entendido, mediante sentencia dictada en sesión del 27 de octubre de 2016 los Magistrados integrantes de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa declararon la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

37. Mediante acuerdo de fecha 8 de noviembre de 2016, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, dio vista a las partes con la sentencia del 27 de octubre de 2016, para que manifestaran lo que a su interés convenga en relación al exceso o defecto en el cumplimiento.

38. El 28 de noviembre de 2016, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito emitió un acuerdo a través del cual se dejó sin materia el recurso de revisión fiscal 449/2016, toda vez que el mismo fue interpuesto por la autoridad en contra de la sentencia de 31 de marzo de 2016, siendo que la misma fue sustituida por la del 27 de octubre de 2016.

39. El 1° de diciembre de 2016 la autoridad interpuso recurso de revisión fiscal en contra de la sentencia de 27 de octubre de 2016, mismo que fue admitido mediante acuerdo de 17 de enero de 2017, y turnado para su estudio y resolución al Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el número de expediente 8/2017.

40. El 24 de enero de 2017 mi mandante interpuso recurso de reclamación en contra del acuerdo de 17 de enero de 2017 a través del cual se admitió el recurso de revisión interpuesto por la autoridad en contra de la sentencia de 27 de octubre de 2016, mismo que fue admitido el 26 de enero de 2017 y turnado para su estudio y resolución al Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con el número de expediente 1/2017.

41. En sesión del 16 de febrero de 2017 los Magistrados del Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito declararon infundado el recurso de reclamación 1/2017, al considerar que no existía un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del recurso de revisión 8/2017 interpuesto por la autoridad en contra de la sentencia de 27 de octubre de 2017.

42. Mediante acuerdo de 17 de abril de 2017, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 885/2014.

43. Con fecha 12 de mayo de 2017, la hoy quejosa fue notificada del acuerdo a través del cual se tuvo por interpuesto el recurso de inconformidad por parte de la autoridad en contra del acuerdo de 17 de abril de 2017, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 885/2014, mismo que quedó

radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de expediente 833/2017.

44. El 14 de junio de 2017 la hoy quejosa presentó recurso de reclamación en contra del acuerdo que admitió el recurso de inconformidad promovido por la autoridad en contra del acuerdo de 17 de abril de 2017 por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 885/2014, mismo que quedó radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el número de expediente 982/2017.

45. Mediante sesión de fecha 13 de septiembre de 2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de inconformidad presentado por la autoridad en el sentido de declararlo infundado y confirmando la sentencia recurrida.

46. Mediante sesión de fecha 25 de septiembre de 2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el recurso de reclamación presentado por la hoy quejosa en el sentido de declararlo sin materia, toda vez que el mismo fue interpuesto en contra del acuerdo admisorio del recurso de inconformidad interpuesto por la autoridad en contra del acuerdo de 17 de abril de 2017 por el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el juicio de amparo 885/2014, mismo que fue declarado infundado mediante sesión de fecha 13 de septiembre de 2017.

47. El 15 de marzo de 2018, el Tribunal Colegiado resolvió la revisión fiscal promovida por la autoridad en contra de la sentencia de fecha 27 de octubre de 2016, en el sentido de declararla parcialmente fundada, únicamente en cuanto a que corresponde a la autoridad hacendaria aplicar el método previsto en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

48. En sesión celebrada el 3 de mayo de 2018 los Magistrados integrantes de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvieron declarar la nulidad de la resolución contenida en el oficio 900 06 02-2013-1012, expedida el 12 de marzo de 2013 por el Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero, adscrito a la Administración General de Grandes Contribuyentes, dependiente del Servicio de Administración Tributaria, en la cual se determinó un crédito fiscal a mi representada en cantidad de \$2,973'173,576.85 (dos mil novecientos setenta y tres millones, ciento setenta y tres mil quinientos setenta y seis pesos 85/100 M.N.), por concepto de impuesto sobre la renta y accesorios, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007.

Lo anterior, para el efecto de que la autoridad fiscal, de considerarlo procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación de la contribuyente hoy parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de la tenencia mayor a doce meses.

regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

Así las cosas, mi representada estima que la sentencia de fecha 3 de mayo de 2018 dictada por la Sala responsable fue emitida en violación de las garantías y derechos humanos de que goza conforme a los siguientes:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN

PRIMERO. VIOLACIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN AQUELLA PARTE EN LA QUE SE DECLARA LA NULIDAD PARA EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, NO OBSTANTE DEBIÓ SER LISA Y LLANA, PUES DERIVA DE VICIOS DE FONDO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 51, 52 Y 57 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

La sentencia que por esta vía se reclama es violatoria en perjuicio de mi representada de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, toda vez que la misma se encuentra indebidamente fundada y motivada por la Sala responsable, al partir de una indebida aplicación de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Lo anterior, toda vez que en la sentencia reclamada se declara la nulidad del crédito fiscal contenido en el oficio 900 06 02-2013-1012, para el efecto de que la autoridad fiscal, de considerarlo procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación fiscal de mi representada, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de la tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

Sin embargo, como se demostrará en el presente concepto de violación, la Sala responsable aplica de manera indebida los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, violando con ello las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y de los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

A. Fundamentación y motivación

A efecto de evidenciar lo anterior, en primer lugar es preciso recordar que el artículo 16 Constitucional, en su parte conducente indica:

"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento."

La fórmula jurídica de fundamentación y motivación implica un razonamiento o silogismo lógico jurídico, consistente en una adecuación real de los hechos generadores del acto y la norma jurídica aplicada a los mismos.

Por su parte, el artículo 14 de nuestra Carta Magna establece textualmente lo siguiente:

"Artículo 14.

[...]

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho."

COLEGIADO
PATIVA

Los artículos antes transcritos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen la garantía de legalidad, merced a la cual, todos los actos de autoridad deben estar debidamente fundados y motivados, entendiendo por el primero, que estos actos deben sustentarse en lo previsto por la Ley; en tanto que por motivación legal se entiende la conducta que vierte la autoridad, en el sentido de adecuar sus actos a lo previsto por las disposiciones normativas.

En efecto, la debida fundamentación ha sido entendida como la cita de los preceptos legales aplicables al caso concreto que se analiza, y la debida motivación ha sido entendida como el señalamiento de los razonamientos lógico-jurídicos que permitan concluir que la actuación que pretende realizar la autoridad encuentra su sustento en el precepto citado como fundamento de la actuación.

En efecto, las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en el artículo 16 Constitucional, se traducen en que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado, esto es, que los motivos o causas que haya tenido la autoridad para emitir un determinado acto, encuadren dentro del supuesto normativo establecido por nuestra Carta Magna, debiendo señalarse las disposiciones legales en que se apoya la autoridad para emitir el citado acto.

Son aplicables al respecto los siguientes criterios adoptados por el Poder Judicial de la Federación, mismos que son del tenor siguiente:

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION, GARANTIA DE - Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ella debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los

razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trate, que las origine, encuadra en los supuestos de la norma que invoca"

(Énfasis añadido)

Revisión No. 1357/87.- Resuelta en sesión del 2 de agosto de 1990, por unanimidad de 7 votos.- Magistrado Ponente: Armando Díaz Olivares.- Secretaria: María de Jesús Herrera Martínez.

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que al expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas".

(Énfasis añadido)

Sexta Época, Tercera Parte: Vol. CXXXII, pág. 49, A.R. 8280/67. Augusto Vallejo Olivo. Unanimidad de 5 votos.

"ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL.- El requisito de fundamentación y motivación exigido por el artículo 16 Constitucional, al tener el rango de una garantía individual implica una obligación para las autoridades, de cualquier categoría que éstas sean, de actuar siempre con apego a las leyes y a la propia Constitución, de manera que sus actos no aparezcan emitidos arbitrariamente".

(Énfasis añadido)

Amparo en revisión 1377/1966. Salinas Mina de Oro, S.A. Septiembre 26 de 1966. Por unanimidad de 5 votos Ponente: Mtro. Octubre 2a Sala.- Boletín 1960, pág. 474

Violación al artículo 16 Constitucional, por no demostrar la legalidad de actos arbitrarios. Vol. ADMINISTRATIVA, tesis 360, pág. 126.

"MOTIVACION - La motivación exigida por el artículo 16 Constitucional consiste en el razonamiento, contenido en el texto mismo del acto autoritario de molestia, según el cual quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de determinados preceptos legales. Es decir, motivar un acto es externar las consideraciones relativas a las circunstancias de hecho que se formuló la autoridad para establecer la adecuación del caso concreto a la hipótesis legal."

(Énfasis añadido)

Sexta Época, Tercera Parte: Vol. LXXVI, Pág. 44.- A.R. 4862/59.-



FCIMOCTAVO TR
EN MATERIA A
DEL PRIME

Pfizer de México, S.A. - 5 votos.

Jurisprudencia publicada en las páginas 668 y 669 del apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1975.

De los criterios antes transcritos se advierte que para que un acto de autoridad se encuentre debidamente fundado y motivado, no sólo es suficiente que se señalen las disposiciones legales aplicables y las razones o circunstancias que aquélla tomó en consideración para aplicar dichas disposiciones, sino que también es necesario que exista una debida adecuación entre los motivos aducidos y la configuración de éstos en las hipótesis normativas correspondientes.

Dichas garantías de legalidad y seguridad jurídica se ven reflejadas en el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en el que se señalan que las sentencias emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa deben estar fundadas en derecho y resolver las pretensiones que planteé el particular en su escrito de demanda y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos de la resolución, la demanda y la contestación, lo que significa que al resolver la controversia, se haga referencia a lo planteado por las partes, sin omitir nada ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controviertan.

Al respecto, el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo señala textualmente lo siguiente:

"Artículo 50. Las sentencias del Tribunal se fundarán en derecho y resolverán sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada, teniendo la facultad de invocar hechos notorios

Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia de la Sala deberá examinar primero aquéllos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución.

Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.

Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos suficientes para ello, el Tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la resolución recurrida, en la parte que no satisfizo el interés jurídico del demandante. No se podrán anular o modificar los actos de las autoridades administrativas no impugnados de manera expresa en la demanda.

En el caso de sentencias en que se condene a la autoridad a la restitución de un derecho subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el Tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular, además de la ilegalidad de la resolución impugnada."

(Énfasis añadido)

Adicionalmente, aplicando de manera supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, en su artículo 222, se prevé de manera clara lo siguiente:

"Artículo 222. Las sentencias contendrán, además de los requisitos comunes a toda resolución judicial, una relación sucinta de las cuestiones planteadas y de las pruebas rendidas, así como las consideraciones jurídicas aplicables, tanto legales como doctrinarias, comprendiendo, en ellas, los motivos para hacer o no condenación en costas, y terminarán resolviendo, con toda precisión, los puntos sujetos a la consideración del tribunal, y fijando, en su caso, el plazo dentro del cual deben cumplirse."

De las transcripciones anteriores, se desprende que el artículo 50 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles en relación con los artículos 14, 16 y 17 de nuestra Constitución Federal establecen que las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Administrativa deben estar fundadas en derecho y resolver sobre la pretensión del actor que se deduzca de la demanda.

De lo hasta aquí expuesto, resulta claro que a fin de que se considere que una sentencia dictada por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se encuentra debidamente fundada y motivada, es menester que se ocupe del análisis de todas las pretensiones de las partes, en relación con las excepciones aducidas por la autoridad demandada, debiendo citar los fundamentos exactamente aplicables al caso en concreto y las circunstancias, razones y motivos por los cuales dichos fundamentos se adecuan a la situación particular sometida a su potestad jurisdiccional.

B. Premisas de la Sala responsable

Ahora bien, a efecto de acreditar la ilegalidad de la sentencia reclamada, resulta conveniente precisar las siguientes premisas, mismas que se desprenden a foja 242 a foja 1295 de la sentencia reclamada:

a) Que la autoridad demandada aplicó indebidamente el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues resulta aplicable a la actora el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia accionaria mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003, por lo que la actora no está imposibilitada para adicionar la amortización de pérdidas fiscales para determinar el costo promedio por acción.

b) Que le asiste la razón a la parte actora, respecto a que la autoridad indebidamente modificó el costo promedio por acción determinado por la actora respecto de las acciones emitidas por Dilocom, S.A. de C.V., al excluir las pérdidas fiscales amortizadas entre los años de 2004 a 2007, por las sociedades denominadas Proveedor de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. y Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V., en contra de las utilidades fiscales que generaron durante dichos ejercicios.

c) Que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que la autoridad hacendaria indebidamente determinó el ingreso obtenido por acción, con base en las reglas establecidas en los artículos 54, fracción II y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2007, ya que son normas reglamentarias del artículo 32, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual fue declarado inconstitucional.

d) Que la autoridad fiscal indebidamente ejerce su facultad de comprobación prevista en el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, al determinar un crédito fiscal a cargo de la actora, en base a desconocer situaciones fiscales de terceros, respecto de los cuales no ejerció facultades de comprobación.

e) Que la autoridad fiscal aplicó indebidamente el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el sentido de que consideró que las pérdidas sufridas por las empresas Terra Networks México, S.A. de C.V. y Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V., no pueden ser transmitidas a empresas escindidas, pues sus actividades no se ubicaron en el supuesto para ser consideradas como actividades empresariales, considerándose enajenación para efectos fiscales; ello, ya que el dispositivo legal aludido no hace consideración especial al hecho de que la fusión o escisión de las que derivan las acciones, sea o no considerada como enajenación de acciones, para determinar el costo comprobado de adquisición de las acciones de las sociedades.

f) Que las razones de ilegalidad por las cuales se decretó la nulidad del crédito fiscal impugnado en el caso que nos ocupa, no atienden a aquellas que destruyen la facultad de la hacienda pública para ejercer sus atribuciones fiscalizadoras, lo que genera que en el presente acaso se declare la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad fiscal en caso de considerarlo procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación fiscal de parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia mayor a doce meses, regulado en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

De las anteriores consideraciones se advierte que la Sala responsable realizó una indebida aplicación de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, motivo por el cual, la sentencia que por

esta vía se reclama resulta violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que lo procedente será conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa.

C. Ilegalidad de la sentencia reclamada, toda vez que la Sala responsable aplica de manera indebida lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada, no obstante resultaba procedente declarar su nulidad lisa y llana.

La sentencia reclamada deviene ilegal, pues al emitirla la Sala responsable declaró la nulidad del crédito fiscal contenido en el oficio 900 06 02-2013-1012, pero para el efecto de que la autoridad fiscal, de considerarlo procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación fiscal de mi representada, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de la tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

DEONTOLOGIA
EN MATERIA
DEL

Sin embargo, la Sala responsable no advirtió que existían ilegalidades de fondo que ésta misma determinó en su sentencia, que la hubieren llevado a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

Derivado de lo anterior, en los siguientes apartados se demostrará que la Sala aplica de manera indebida los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, violando con ello las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales.

a) Diferencias entre la nulidad lisa y llana y la nulidad para efectos

A efecto de evidenciar la ilegalidad de la sentencia reclamada, resulta importante recordar lo establecido en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que se transcribe al tenor siguiente:

"ARTÍCULO 51.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

- I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.
- II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso.

III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.

V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.

Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:

a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.

b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse.

c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal.

d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados.

e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsión a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.

f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.

El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.

Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el Tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor.



TRIBUNAL COLEGIADO
ADMINISTRATIVO
PR CIRCUITO

31

Los órganos arbitrales y de otra naturaleza, derivados de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales, contenidos en tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este artículo.

De lo anterior, se desprende que la Sala Fiscal podrá declarar que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre, entre otras causales, (i) que los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada, o bien (ii) si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejaron de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto.

Las anteriores causales de ilegalidad detonan los siguientes efectos en una sentencia definitiva:

"ARTÍCULO 52.- La sentencia definitiva podrá:

- I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.
- II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.
- III. (Se deroga)
- IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa.

En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento.

Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma

V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:

- a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa
- b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados.
- c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no

tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate

d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto, o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme.

Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aún cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental.

Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto.

Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo.

En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 60. de esta Ley.

Así, según se desprende del numeral transcrito, cuando la Sala Fiscal determine que se actualizan las causales de ilegalidad referentes a la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, ausencia de fundamentación o motivación

y vicios de del procedimiento, deberá declarar la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución.

De igual manera, en los demás casos, se deberá dictar una nulidad lisa y llana, que no permita volver a emitir el acto, como es el caso de la causal de ilegalidad consistente en que la resolución impugnada se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o si se dejaron de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto, ilegalidad que se actualizó en el caso concreto.

Al respecto, resulta importante analizar el contenido del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, mismo que a la letra señala lo siguiente:

ARTÍCULO 57.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente:

I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales:

a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana.

b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.

En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aún cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda.

Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con

XXCIMOCTAVO TR
EN MATERIA A
DEL PRIMI

dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada.

Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana.

c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada

Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos

d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia.

II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley

Cuando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia."

(Énfasis añadido)

De lo anterior se desprende que lo dispuesto en el inciso c), del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la parte que prevé que cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, pues esto es coherente con la declaración de una nulidad lisa y llana derivada de una resolución que se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o en la que se dejó de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto.

En conclusión, de los artículos antes transcritos, se desprende que la Sala Fiscal podrá declarar que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre, entre otras causales, (i) que los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada, o bien (ii) si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejaron de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto.

Así, según se desprende de los numerales transcritos, cuando la Sala Fiscal determine que se actualizan las causales de ilegalidad referentes a la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, ausencia de fundamentación o motivación y vicios de del procedimiento, deberá declarar la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución.

De igual manera, a contrario sensu, podríamos llegar a entender que en los demás casos, se deberá dictar una nulidad lisa y llana, que no permita volver a emitir el acto, como es el caso de la causal de ilegalidad consistente en que la resolución impugnada se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto, ilegalidad que en la especie se actualiza.

Apoya lo anterior, lo dispuesto en el inciso c), del artículo 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la parte que prevé que cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, pues esto es congruente con la declaración de una nulidad lisa y llana derivada de una resolución que se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o si se dejaron de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto.

Por lo que, podemos concluir que cuando la Sala Fiscal advierta ilegalidades que tiene que ver con el fondo del asunto, necesariamente deberá declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

Apoyan lo anterior, las siguientes jurisprudencia y tesis emitidas por el Poder Judicial de la Federación:

"NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS De lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivan las causas que dan lugar a la ilegalidad de la resolución impugnada, así como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas y los actos que la autoridad debe realizar en cumplimiento de la sentencia anulatoria. En este marco se observa que cundo la resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales y se decreta su ilegalidad por vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, sino que ésta debe ser para efectos, los cuales se traducen en que la autoridad determine dictar una nueva resolución o bien, decida no hacerlo, en el entendido de que si decide actuar deberá sujetarse al plazo de cuatro meses con los que cuenta para cumplir con el fallo y a subsanar los vicios formales de que adolecía el acto declarado nulo, en los términos expresamente señalados en la sentencia que se cumplimente

Contradicción de tesis 210/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Matena Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materias Administrativa y Civil del Décimo

Noveno Circuito. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien integró Sala, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto José Fernando Franco González Salas. Secretario: José Alvaro Vargas Omelas.

Tesis y criterio contendientes:

Tesis VI. 1o. A. J/53, de rubro: "NULIDAD LISA Y LLANA POR VICIOS DE FORMA DECLARADA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 51, FRACCIÓN III, Y 52, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE ACTUALIZA ANTE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, Y SUS ALCANCES SON LOS DEL TIPO DE NULIDAD EXCEPCIONAL QUE SE PREVEÍA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 2138, y

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 72/2013.

Tesis de jurisprudencia 133/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de marzo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época, Registro: 2008559, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 133/2014 (10a.), Página: 1689

"NULIDAD ABSOLUTA Y NULIDAD PARA EFECTOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SU ALCANCE DEPENDE DE LA NATURALEZA DE LA RESOLUCIÓN ANULADA Y DE LOS VICIOS QUE ORIGINARON LA ANULACIÓN. La nulidad, entendida en un sentido amplio, es la consecuencia de una declaración jurisdiccional que priva de todo valor a los actos carentes de los requisitos de forma o fondo que marca la ley o que se han originado en un procedimiento viciado. Ahora bien, la ley contempla dos clases de nulidad: la absoluta, calificada en la práctica jurisdiccional como lisa y llana, que puede deberse a vicios de fondo, forma, procedimiento o, incluso, a la falta de competencia, y la nulidad para efectos, que normalmente ocurre en los casos en que el fallo impugnado se emitió al resolver un recurso administrativo; si se violó

el procedimiento la resolución debe anularse, la autoridad quedará vinculada a subsanar la irregularidad procesal y a emitir una nueva; cuando el motivo de la nulidad fue una deficiencia formal, por ejemplo, la ausencia de fundamentación y motivación, la autoridad queda constreñida a dictar una nueva resolución fundada y motivada. En esa virtud, la nulidad lisa y llana coincide con la nulidad para efectos en la aniquilación total, la desaparición en el orden jurídico de la resolución o acto impugnado, independientemente de la causa específica que haya originado ese pronunciamiento, pero también existen diferencias, según sea la causa de anulación, por ejemplo, en la nulidad lisa y llana la resolución o acto quedan nulificados y no existe la obligación de emitir una nueva resolución en los casos en que no exista autoridad competente, no existan fundamentos ni motivos que puedan sustentarla o que existiendo se hayan extinguido las facultades de la autoridad competente; sin embargo, habrá supuestos en los que la determinación de nulidad lisa y llana, que aunque no constriñe a la autoridad tampoco le impedirá a la que si es competente que emita la resolución correspondiente o subsane el vicio que dio motivo a la nulidad, ya que en estas hipótesis no existe cosa juzgada sobre el problema de fondo del debate, es decir, solamente la nulidad absoluta o lisa y llana que se dicta estudiando el fondo del asunto es la que impide dictar una nueva resolución, pues ya existirá cosa juzgada sobre los problemas de fondo debatidos."



Contradicción de tesis 15/2006-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 15 de marzo de 2007. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Oliva Escudero Contreras.

El Tribunal Pleno, el quince de octubre en curso, aprobó, con el número XXXIV/2007, la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a quince de octubre de dos mil siete.

Época: Novena Época, Registro: 170684, Instancia Pleno, Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia(s): Administrativa, Tesis: P. XXXIV/2007, Página 26

(Énfasis añadido)

De las anteriores tesis jurisprudenciales, mismas que resultan de observancia obligatoria para ese H. Tribunal Colegiado en términos de lo dispuesto por el artículo 217 de la Ley de Amparo, es posible advertir que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, contempla dos clases de nulidad:

- Absoluta.- Que se ha calificado en la práctica jurisdiccional como lisa y llana, que puede deberse a vicios de fondo, de forma o de procedimiento o, incluso por falta de competencia, según sea la causa por la que el acto impugnado carezca de todo valor jurídico y por ello queda nulificado.

- Para efectos.- En la que la autoridad administrativa, en algunos casos se encuentra obligada a revocar la resolución y a emitir otra en la que subsane las irregularidades formales o procesales que provocaron su nulidad.

Por lo que toca la nulidad lisa y llana o absoluta, de las tesis jurisprudenciales transcritas se desprende que existe una coincidencia con la nulidad para efectos, a saber: la aniquilación total, la desaparición en el orden jurídico de la resolución o acto impugnado, independientemente de la causa específica que haya originado ese pronunciamiento.

De igual manera se prevé que la diferencia es muy clara; en la nulidad absoluta o lisa y llana la resolución o actos quedan nulificados y la autoridad no está obligada a emitir una nueva resolución, y solo la nulidad lisa y llana se dicta estudiando el fondo del asunto, pues existe cosa juzgada sobre el problema de fondo debatido.

Así las cosas, las tesis jurisprudenciales en cita, prevén que en el caso de una ilegalidad de una resolución que deriva de un procedimiento discrecional, como lo es un procedimiento de fiscalización, y esta se refiera a vicios de forma, la nulidad debe ser para efectos, pues no se juzgó sobre el fondo, y ello significa que no puede haber cosa juzgada al respecto.

BIADO

IA

b) Ilegalidad de la sentencia reclamada, al declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada, no obstante la Sala responsable advirtió diversas ilegalidades relacionadas con el fondo de la cuestión planteada en el juicio de nulidad de origen y por las cuales procedía declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

Ahora bien, en el presente caso, la Sala responsable declaró en la sentencia reclamada la nulidad del crédito fiscal contenido en el oficio 900 06 02-2013-1012, para el efecto de que la autoridad fiscal, de considerarlo procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación fiscal de mi representada, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de la tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003, lo cual es del todo ilegal.

Ello, pues la Sala responsable determinó y advirtió ilegalidades relacionadas con el fondo de la cuestión planteada en el juicio de nulidad de origen, mismas que derivan de una contravención a las disposiciones aplicadas o que se hubiese dejado de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto, de tal manera que ya existe cosa juzgada en cuanto a la cuestión debatida, que impide que la autoridad fiscalizadora pueda nuevamente ejercer sus facultades de comprobación y por las cuales resulta procedente declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

En efecto, como ese H. Tribunal Colegiado podrá advertir, la Sala responsable pierde de vista que había determinado ilegalidades en la sentencia reclamada, que derivan de una indebida aplicación e interpretación de las disposiciones legales en la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen y que, por lo tanto, tienen que ver con el fondo de la cuestión planteada.

Lo anterior es así, pues tal y como fue señalado en las premisas que se desprenden de los considerandos de la sentencia reclamada, la Sala Responsable ha declarado la nulidad de la resolución impugnada con base en diversas ilegalidades que tienen que ver directamente con el análisis de las disposiciones legales que sustentaron el crédito fiscal impugnado en el juicio fiscal de origen, es decir, con cuestiones de fondo.

Una vez señalado lo anterior, a efecto de que ese H. Tribunal Colegiado se encuentre en posibilidad de apreciar lo anterior, es preciso analizar de manera medular y sucinta lo resuelto por la Sala responsable a fojas 1289 a 1299 de la sentencia que ahora se reclama de fecha 3 de mayo de 2018, respecto de las cuales, **ES IMPORTANTE REITERAR QUE YA CONSTITUYEN COSA JUZGADA, PUES NUNCA FUERON COMBATIDAS POR LA AUTORIDAD FISCAL, DE TAL MANERA QUE YA FUERON CONSENTIDAS:**

1. Que la autoridad demandada aplicó indebidamente el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues resulta aplicable a la actora el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia accionaria mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2003, así, la actora no está imposibilitada para adicionar la amortización de pérdidas fiscales para determinar el costo promedio por acción.

De lo anterior, se desprende que la Sala responsable determinó la causal de ilegalidad consistente en indebida aplicación e interpretación de las disposiciones legales, ya que consideró que la fiscalizadora aplicó indebidamente el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al no ejercer en la determinación de la ganancia por enajenación de acciones el mecanismo relativo al plazo de tenencia accionaria mayor a doce meses, lo que claramente denota que no estamos en presencia de un mero vicio de forma o falta de formalidad, sino de una situación que tiene que ver con el fondo de la cuestión debatida.

2. Que le asiste la razón a la parte actora respecto a que la autoridad indebidamente modificó el costo promedio por acción determinado por la actora respecto de las acciones emitidas por Dilocom, S.A. de C.V., al excluir las pérdidas fiscales amortizadas entre los años de 2004 a 2007, por las sociedades denominadas Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. y Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V., en contra de las utilidades fiscales que generaron durante dichos ejercicios.

Lo anterior, claramente tiene que ver con el fondo de la cuestión debatida en el juicio de nulidad de origen, pues reconoce el derecho subjetivo de mi representada a adicionar las pérdidas fiscales amortizadas entre los de 2004 a 2007, por las sociedades denominadas Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. y Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V., en la determinación del costo promedio por acción.

3. Que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que la autoridad hacendaria indebidamente determinó el ingreso obtenido por acción, con base en las reglas establecidas en los artículos 54, fracción II y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2007, ya que son normas reglamentarias del artículo 32, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual fue declarado inconstitucional.

La anterior determinación claramente deriva de una ilegalidad que tiene que ver con un vicio de fondo, pues está advirtiendo que la autoridad indebidamente determinó el ingreso obtenido por acción, al aplicar en la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen, normas reglamentarias de un dispositivo legal que fue declarado inconstitucional, lo cual no se traduce en un vicio de forma, pues está directamente relacionado con la determinación y cálculo del crédito fiscal impugnado.

4. Que la autoridad fiscal indebidamente ejerce su facultad de comprobación prevista en el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, al determinar un crédito fiscal a cargo de la actora, con base en desconocer situaciones fiscales de terceros, respecto de los cuales no ejerció facultades de comprobación, como es el caso de que las empresas Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V., y Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V., no adquirieron el derecho de amortizar una parte de las pérdidas sufridas en su momento por la sociedad escidente Terra Networks México, S.A. de C.V.

La anterior ilegalidad está directamente relacionada con el fondo de la cuestión debatida en el juicio fiscal origen, pues declara que la determinación del crédito fiscal es indebida al considerarse en la determinación del mismo, situaciones fiscales de terceros ajenos a mi mandante, mismas que no son firmes, pues no se les ha practicado procedimiento de fiscalización alguno.

5. Que la autoridad fiscal aplicó indebidamente el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el sentido de que consideró que las pérdidas sufridas por las empresas Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V., Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V., Terra Networks México, S.A. de C.V. y Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V., no pueden ser transmitidas a empresas escindidas, pues sus actividades no se ubicaron en el supuesto para ser consideradas como actividades empresariales, considerándose enajenación para efectos fiscales; ello, ya que el dispositivo legal aludido no hace consideración especial al hecho de que la fusión o escisión de las derivan las acciones, sea o no considerada como enajenación de acciones, para determinar el costo comprobado de adquisición de las acciones de las sociedades.

En la anterior ilegalidad, la Sala responsable determina que se aplicó indebidamente el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y que la autoridad hacendaria no debió haber determinado el crédito fiscal impugnado por

mi representada, excluyendo para calcular el costo comprobado de adquisición de acciones las pérdidas sufridas por las empresas Terra Networks México, S.A. de C.V. y Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V.

Es decir, estamos frente a una cuestión que tiene que ver directamente sobre el fondo de la cuestión debatida en el juicio de nulidad de origen, y no podría considerarse que se trata de un vicio de forma o de procedimiento.

De lo anterior, ese H. Tribunal Colegiado podrá advertir que la Sala responsable determinó en la sentencia reclamada que en el presente caso existen ilegalidades que tienen que ver con una indebida aplicación e interpretación de las disposiciones legales aplicadas en la determinación del crédito fiscal impugnado en cantidad de \$2,973'173,576.85 (dos mil novecientos setenta y tres millones, ciento setenta y tres mil quinientos setenta y seis pesos 85/100 M.N.), por concepto de impuesto sobre la renta y accesorios, por el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007.

Las anteriores ilegalidades nada tienen que ver con un vicio de forma, por lo que resulta del todo contrario a derecho que la Sala responsable, declare la nulidad de resolución impugnada para el efecto de que la autoridad fiscal, de considerarla procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación del contribuyente hoy parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de la tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

Ello, pues la autoridad fiscalizadora no puede ejercer facultades de comprobación, sobre cuestiones que ya constituyen cosa juzgada en cuanto al fondo del asunto.

Así las cosas, vale la pena preguntarnos ¿Cómo puede declarar la Sala responsable una nulidad para efectos, si ya determinó ilegalidades directamente relacionadas con el fondo del asunto? mismas que además, están firmes, pues ya no fueron combatidas por la autoridad fiscal, misma que consisten en:

1. Que la autoridad demandada aplicó indebidamente el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

2. Que la autoridad indebidamente modificó el costo promedio por acción determinado por la actora.

3. Que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que la autoridad hacendaría indebidamente determinó el ingreso obtenido por acción, con base en las reglas establecidas en los artículos 54, fracción II y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2007.

4. Que la autoridad fiscal indebidamente ejerce su facultad de comprobación prevista en el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, al determinar un crédito fiscal a cargo de la actora.

5. Que la autoridad fiscal indebidamente aplicó el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el sentido de que consideró que las pérdidas sufridas por las empresas Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V., Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V., Terra Networks México, S.A. de C.V. y Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V., no pueden ser transmitidas a empresas escindidas.

Así, lo anterior a todas luces resulta violatorio de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues la Sala responsable declaró la nulidad para efectos de la resolución impugnada, cuando en realidad había determinado ilegalidades que la hubieran llevado a declararla de manera lisa y llana.

Por lo anterior, la sentencia reclamada es violatoria en perjuicio de mi representada de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que lo procedente será conceder a mi mandate el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se emita una nueva sentencia en la que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución originalmente impugnada.

c) Ilegalidad de la sentencia reclamada, toda vez que el hecho de que la Sala responsable determinara que la autoridad fiscal aplicó indebidamente el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta constituye una cuestión de fondo y, en consecuencia, detona una nulidad lisa y llana.

Por otro lado, conviene precisar la ilegalidad determinada por la Sala responsable en la sentencia reclamada, en el sentido de que la autoridad demandada aplicó indebidamente el artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Lo anterior, con el objeto de corroborar que dicha ilegalidad deriva de una cuestión de fondo, y contrario a lo sostenido por la Sala responsable, la misma detona una nulidad lisa y llana.

Para ello, es necesario determinar que a mi representada, la autoridad fiscal le aplicó de manera indebida los artículos 24 y 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues esta de manera general manifiesta que si desde el surgimiento de Dilocom, S.A. de C.V. el 31 de octubre de 2007, hasta la enajenación de la totalidad de sus acciones el 31 de diciembre de 2007, transcurrieron dos meses, ello evidencia que la tenencia accionaria no fue mayor al plazo de doce meses, por lo que resulta aplicable el procedimiento del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de determinar la ganancia por enajenación de acciones cuando el periodo de tenencia es igual o menor a doce meses.

Es importante mencionar que el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece los siguientes procedimientos para determinar la ganancia por enajenación de acciones, mismo que se detallan a continuación:

1) Cuando la tenencia accionaria de las acciones que se enajenan, fue por un periodo superior a doce meses, el contribuyente debe, para efectos de calcular el costo promedio por acción, entre otras operaciones, sumar (i) la diferencia positiva (saldo de CUFIN a la fecha de enajenación (menos) saldo de CUFIN a la fecha de adquisición) y (ii) las pérdidas generadas previamente al periodo de tenencia accionaria, amortizadas durante dicho periodo.

2) Cuando la tenencia accionaria de las acciones que se enajenan, fue por un periodo de doce meses o menor, el contribuyente no debe, para efectos de calcular el costo promedio por acción, sumar los conceptos mencionados.

Sin embargo, la Sala responsable determinó ya en su sentencia en cumplimiento reclamada, que la autoridad demandada aplicó indebidamente el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues en la especie, resultó aplicable a la actora el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia accionaria mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2003, así la actora no está imposibilitada para adicionar la amortización de pérdidas fiscales para determinar el costo promedio por acción. Ello ya constituye cosa juzgada.

De lo anterior, se desprende que la Sala responsable determinó la causal de ilegalidad consistente en indebida aplicación e interpretación de las disposiciones legales, ya que consideró que la fiscalizadora aplicó indebidamente el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, al no ejercer la autoridad fiscal en la determinación de la ganancia por enajenación de acciones el mecanismo relativo al plazo de tenencia accionaria mayor a doce meses, lo que claramente denota que no estamos en presencia de un mero vicio de forma o falta de formalidad, sino de una situación que tiene que ver con el fondo de la cuestión debatida, misma que forzosamente debía detonar la nulidad lisa y llana de resolución impugnada en el juicio fiscal de origen.

Apoya lo anterior, la siguiente Jurisprudencia emitida por el Poder Judicial de la Federación:

*No. Registro: 184,612 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa
Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVII,
Marzo de 2003 Tesis: I.4o.A. J/21 Página: 1534*

NULIDAD LISA Y LLANA PREVISTA EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SUPUESTOS Y CONSECUENCIAS. Conforme al artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, las sentencias definitivas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que declaren la nulidad pueden ser de

manera lisa y llana cuando ocurra alguno de los dos supuestos de ilegalidad previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del código invocado, lo que se actualiza, en el primer caso, cuando existe incompetencia de la autoridad que dicta u ordena la resolución impugnada o tramita el procedimiento del que deriva y, en el segundo, cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas, lo que implica el fondo o sustancia del contenido de la resolución impugnada. En ambos casos se requiere, en principio, que la Sala Fiscal realice el examen de fondo de la controversia. Es así que, de actualizarse tales supuestos, la nulidad debe declararse en forma lisa y llana, lo que impide cualquier actuación posterior de la autoridad en razón de la profundidad o trascendencia de la materia sobre la cual incide el vicio casado y que determina, en igual forma, un contexto específico sobre el que existirá cosa juzgada que no puede volver a ser discutida.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 66/2002. Monte del Carmen, S.A. 17 de abril de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez. Revisión fiscal 118/2002. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, Unidad Administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 5 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.

Revisión fiscal 154/2002. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y otras. 7 de agosto de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

Revisión fiscal 386/2002. Administradora Local Jurídica del Sur del Distrito Federal, Unidad Administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 15 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

Revisión fiscal 43/2003. Administrador Local Jurídico del Oriente del Distrito Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas. 5 de marzo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Claudia Patricia Peraza Espinoza."

De la anterior tesis de Jurisprudencia se desprende que cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, se dictó en contravención de las disposiciones aplicables o dejó de aplicar las debidas, lo que implica el fondo o sustancia del contenido de la resolución impugnada, dicha ilegalidad se deberá sancionar con nulidad lisa y llana.

Así, si la Sala responsable determinó en la sentencia reclamada, de que la autoridad demandada aplicó indebidamente el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, situación que ya constituye cosa juzgada, la misma debió haber declarado la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, y no para efectos.

d) **ilegalidad de la sentencia reclamada**, toda vez que el hecho de que la autoridad fiscal pueda o no recalcular la ganancia por enajenación de acciones, aplicando el mecanismo el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nunca fue materia de la *Litis* en el juicio fiscal de origen.

De igual manera, es importante hacer notar la ilegalidad de la sentencia reclamada de fecha 3 de mayo de 2018, al haber declarado la nulidad del crédito fiscal para el efecto de que la autoridad fiscal en caso de considerarlo procedente en uso de sus facultades, emita una nueva resolución en la que determine la situación fiscal de parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia mayor a doce meses, regulado en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

Lo anterior es así, ya que como lo podrá corroborar este Tribunal Colegiado, el hecho de que la autoridad fiscal pueda o no recalcular la ganancia por enajenación de acciones, aplicando el mecanismo relativo al plazo de tenencia mayor a doce meses, regulado en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nunca fue materia de la *Litis* en el juicio fiscal de origen.

De hecho la *Litis*, en el juicio fiscal de origen, consistió en dilucidar si el costo promedio por acción determinado por mi mandante con motivo de la enajenación de las acciones de la sociedad Dilocom, S.A. de C.V. puede ser adicionado con las pérdidas amortizadas por Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V. y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V. (originalmente Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V.), situación que como ya vimos, fue validada por la Sala responsable en la sentencia reclamada y constituye cosa juzgada en el presente asunto.

Así, resulta del todo ilegal que la Sala responsable declare la nulidad del crédito fiscal para el efecto de que la autoridad fiscal, en caso de considerarlo procedente en uso de sus facultades, emita una nueva resolución en la que determine la situación fiscal de parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia mayor a doce meses, regulado en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003, pues ello ni siquiera había sido parte de la *Litis* en el juicio fiscal de origen.

Por lo anterior, la sentencia reclamada es violatoria en perjuicio de mi representada de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que lo procedente será conceder a

mi mandate el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se emita una nueva sentencia en la que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución originalmente impugnada.

e) Ilegalidad de la sentencia reclamada, al declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada, al hacer nugatorio el contenido del artículo 52, fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

De igual manera, denota la ilegalidad de la sentencia reclamada de fecha 3 de mayo de 2018, el hecho de que la Sala responsable determine que toda ilegalidad que derive de una resolución dictada en un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales de la autoridad – como lo es el ejercicio de facultades de comprobación en materia fiscal –, deberá detonar la nulidad para efectos de dicha resolución.

Lo anterior, pues de sostenerse tal afirmación, se haría nugatorio la aplicación del artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al no poderse declarar nunca una nulidad lisa y llana de créditos fiscales.

En efecto, a pesar de que fue el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el R.F. 8/2017, quien realizó tal manifestación en su sentencia, lo cierto es que la Sala responsable hace suya dicha consideración en su sentencia reclamada.

Al respecto, a foja 47 de la sentencia reclamada, se transcribió parte de la sentencia del R.F. 8/2017, en la que el Colegiado hizo tal afirmación, de acuerdo con la siguiente imagen:

A la luz de las premisas sentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se anunció, los argumentos que persiguen la nulidad para efectos del acto impugnado son fundados.

En primer lugar, la jurisprudencia 2a./J. 133/2014 (10a.) claramente dispone que cuando la resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso que se trata de la comprobación de las obligaciones fiscales de la ahora quejosa, no puede decretarse su nulidad lisa y llana.

De la anterior parte de la sentencia del R.F. 8/2017 es posible desprender que el Tribunal considera que en materia de facultades de comprobación, no puede declararse la nulidad lisa y llana de los oficios liquidatorios.

En la sentencia reclamada, la Sala responsable hace suya tal conclusión en el sentido de que las ilegalidades derivadas de una resolución que se originó en un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales - como es el caso de las facultades de comprobación en materia fiscal -, detona una nulidad para efectos, y en ese sentido interpreta los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ello, tal y como se puede corroborar a foja 1294 de la sentencia reclamada, cuya imagen se inserta:

- 1294 -

cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos.

Lo anterior es así, en razón de que tal y como lo sostuvo el Tribunal de Alzada en la ejecutoria que se cumplimentó de fecha 15 de marzo de 2018, las razones de nulidad por las cuales se decretó la nulidad del crédito fiscal impugnado en el caso que nos ocupa, no atienden a aquellas que destruyen la facultad de la hacienda pública para ejercer sus atribuciones fiscalizadoras; por lo que, es evidente que la atribución revisora de la autoridad exactora está incólume, lo que genera aliento a la naturaleza y origen del acto impugnado, la nulidad para efectos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 28/J. 133/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el mes de febrero de 2015, la cual a la letra señala lo siguiente:

Época: Décima Época
Registro: 2008559
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II
Materia(s): Administrativa
Tesis: 28/J. 133/2014 (10a.)
Página: 1889

NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS. De lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivan las causas que dan lugar a la nulidad de la resolución impugnada, así como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas y los actos que la autoridad debe realizar en cumplimiento de la sentencia anulatoria. En sede materia se observa que cuando la resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales y se decreta su nulidad por vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, sino que esta debe ser para efectos, los cuales se traducen en que la autoridad determina dictar una nueva resolución o bien, decide no hacerlo, en el entendido de que si decide actuar deberá sujetarse al plazo de cuatro meses con los que cuenta para cumplir con el fallo y a subsanar los vicios formales de que adolece el acto declarado nulo, en los términos expresamente señalados en la sentencia que se cumplimenta.

Contradictoria de tesis 210/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materia Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito. 3 de noviembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien integró Sala, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez

DEFINITIVO T
EN MATERIA
DEL PRIM

Así, no podrá pasar desapercibido para ese H. Tribunal Colegiado que lo anterior hace que lo dispuesto por el artículo 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, sea nugatorio, pues en materia de facultades de comprobación, nunca existirá la nulidad lisa y llana.

Como es del conocimiento de ese H. Tribunal Colegiado, todo crédito fiscal deriva del ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal, tal y como lo prevé el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación:

"Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate.

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.

III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías

IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones:

a) Las relativas a la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes;

b) Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas y registros electrónicos, que estén obligados a llevar conforme lo establecen las disposiciones fiscales;

c) La consistente en que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos;

d) La relativa a que las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan impreso el código de seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico;

e) La de contar con la documentación o comprobantes que acrediten la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las

COLEGIO

ESTADÍSTICA

DE MEXICO

mercancías de procedencia extranjera, debiéndola exhibir a la autoridad durante la visita, y

f) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, padrones, registros o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio Exterior que emita el Servicio de Administración Tributaria.

La visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera de las obligaciones referidas en los incisos anteriores, deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código y demás formalidades que resulten aplicables, en términos de la Ley Aduanera.

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.

VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.

VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones

VIII. Derogada.

IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III, IV y IX de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales o se compensen saldos a favor, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia ya sea de la pérdida fiscal o del saldo a favor, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.

La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión.

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las fracciones II, III y IX de este artículo y



DECIMOCUARTO T
EN MATERIA
DEL FISCAL

detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario al contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de aquel, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate, para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad emitirá la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, señalando en estas actuaciones la asistencia o inasistencia de los interesados para ejercer su derecho a conocer el estado del procedimiento a que está siendo sujeto; previamente a ello, deberá levantarse un acta circunstanciada en la que se haga constar esta situación. En toda comunicación que se efectúe en términos del párrafo anterior, deberá indicárseles que pueden solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ser asistidos de manera presencial cuando acudan a las oficinas de las autoridades fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general, el procedimiento para informar al contribuyente el momento oportuno para acudir a sus oficinas y la forma en que éste puede ejercer su derecho a ser informado."

(énfasis añadido)

De lo anterior, se prevé que la autoridad fiscal a fin de comprobar que los contribuyentes han cumplido las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar créditos fiscales, estará facultada para ejercer diversos procedimientos de fiscalización, los cuales deben ejercer para determinar créditos fiscales.

Ahora bien, el hecho de que se tenga que declarar la nulidad para efectos, sin importar el tipo de legalidad - forma o fondo -, de una resolución por el simple hecho de derivar de un procedimiento de fiscalización, hace nugatoria la aplicación de la fracción II del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en la declaración de nulidad lisa y llana de créditos fiscales, por el simple hecho de que todos derivan del ejercicio de facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

En efecto, considerando lo resuelto en la sentencia reclamada, en el sentido de que en materia de facultades discrecionales, se debe dictar la nulidad para efectos, hace que la sentencia reclamada sea ilegal.

Ello, pues la Sala responsable claramente realiza una indebida interpretación y aplicación de las normas fiscales aplicables, en específico, ~~de lo dispuesto por~~ los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Por lo anterior, la sentencia reclamada es violatoria en perjuicio de mi representada de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que lo procedente será conceder a mi mandante el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se emita una nueva sentencia en la que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución originalmente impugnada.

f) **Ilegalidad de la sentencia reclamada, pues no se advirtió que la determinación de la resolución en un procedimiento de fiscalización, es en base a una facultad reglada, y no discrecional.**

Independientemente de lo anterior, es importante señalar que la sentencia reclamada de fecha 3 de mayo de 2018 es ilegal, pues en el caso de que nos ocupa, si bien el procedimiento de fiscalización del que derivó el oficio liquidatorio originalmente impugnada, constituye una facultad discrecional, lo cierto es que para efectos de la determinación del crédito fiscal, se ejerce una facultad reglada.

En efecto, cuando en el juicio contencioso administrativo se impugna la determinación del crédito fiscal derivado del ejercicio de facultades de comprobación, y se declara su nulidad por un vicio de ilegalidad, consistente en haberse determinado de forma opuesta a la prevista por la norma, no estamos en presencia de facultades discrecionales, sino regladas.

Apoya lo anterior la siguiente tesis emitida por el Poder Judicial de la Federación:

"CRÉDITOS FISCALES DERIVADOS DE VISITAS DOMICILIARIAS. SU NULIDAD POR HABERSE DETERMINADO DE FORMA OPUESTA A LA PREVISTA POR LA NORMA (VICIO DE ILEGALIDAD), NO DEBE SER LA APLICABLE A FACULTADES DISCRECIONALES. Si bien es cierto que las facultades de comprobación de la autoridad fiscal son discrecionales (por ejemplo, la orden de visita domiciliaria), también lo es que, agotada ésta y ya en la de determinación el fisco ejercerá facultades regladas para liquidar el crédito con la información obtenida. Lo anterior es así, porque en la discrecionalidad se permite a la autoridad cierta toma de decisiones de varias posibles, mientras que en las facultades regladas debe ceñirse al marco fijado por la norma que le señala la conducta específica a seguir, la cual no puede variar ni desatenderse. Por esas razones, cuando en el juicio contencioso administrativo se impugna la determinación del crédito fiscal derivado de una visita domiciliaria y se declara su nulidad por un vicio de ilegalidad, consistente en haberse determinado de forma opuesta a la prevista por la norma, la resolución de la Sala no debe ser la aplicable respecto de facultades discrecionales, sino lisa y llana, con fundamento en el artículo 51, fracción IV, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al tratarse de un tema que ya no puede ser objeto de ulterior discusión.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

(Énfasis añadido)

De la anterior tesis, claramente se desprende que cuando en un procedimiento de fiscalización se determine un crédito fiscal en base a una indebida aplicación de normas (como en el caso a estudio) tal ilegalidad únicamente puede ser sancionada con la nulidad lisa y llana.

Lo anterior es así, ya que si bien las facultades de comprobación de la autoridad fiscal son discrecionales, una vez que éstas concluyen, ya en la fase de la determinación del crédito fiscal, se ejerce una facultad reglada.

Por esas razones, cuando en el juicio contencioso administrativo se impugna la determinación del crédito fiscal derivado del ejercicio de facultades de comprobación, y se declara su nulidad por un vicio de ilegalidad, consistente en haberse determinado éste de forma opuesta a la prevista por la norma, la resolución de la Sala no debe ser la aplicable respecto de facultades discrecionales – nulidad para efectos -, sino lisa y llana.

Por todo lo anterior, es claro que en la especie, la sentencia reclamada de fecha 3 mayo de 2018 es del todo ilegal, pues declara la nulidad para efectos de la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen, al considerar que nos encontramos en presencia de facultades de discrecionales, cuando realmente son facultades regladas.

En efecto, si en el caso que nos ocupa, la determinación del oficio liquidatorio originalmente impugnado, resulta ser una facultad reglada, es evidente que el argumento de la Sala responsable en el sentido de que la nulidad debió necesariamente haber sido para efectos, es absurdo e ilegal.

Así las cosas, es claro que la sentencia reclamada es ilegal, pues a pesar de que advirtió ilegalidades en la determinación de la resolución impugnada, que versaban sobre la indebida aplicación de la ley, declaró la nulidad para efectos, y no de manera lisa y llana.

Por lo anterior, la sentencia reclamada es violatoria en perjuicio de mi representada de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que lo procedente será conceder a mi mandate el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se emita una nueva sentencia en la que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución originalmente impugnada.

g) Posibilidad de volver a emitir la resolución impugnada declarada nula, con las mismas ilegalidades.

La sentencia reclamada es ilegal, pues concede una nueva oportunidad a la autoridad fiscal de subsanar vicios en una resolución que adolecía de ilegalidades de fondo, o incluso a reponer el procedimiento de fiscalización.

En efecto, como quedó señalado en apartados anteriores, mediante la sentencia del 19 de febrero de 2016, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el juicio de amparo D.A. 885/2014, se declararon fundados diversos argumentos de fondo efectuados por mi mandante.

Sin embargo, a través de la sentencia reclamada del 3 de mayo de 2018, al declararse la nulidad para efectos, se permite a la autoridad el emitir una nueva liquidación, lo cual es realmente absurdo e ilegal.

En efecto, lo resuelto por la Sala responsable se traduce en que las autoridades fiscales podrán cometer ilegalidades de fondo, como la de fundar y motivar sus resoluciones de manera indebida, y en caso de que su resolución se declare nula por un tribunal, que será para efectos según lo suelto en la sentencia del 3 de mayo de 2018, podrán subsanar los vicios de fondo y volver a emitirla, incluso hasta con las misas ilegalidades.

Ello, como no escapará de la prudente apreciación de ese H. Tribunal, resulta violatorio de lo dispuesto por los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no obstante la autoridad demandada en el juicio fiscal de origen cometió ilegalidades de fondo, ésta podrá a emitir nuevamente la resolución declarada nula, incluso hasta con los mismos vicios de fondo.

En este sentido, con el objeto de respetar lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la LFPCA, se debe declarar la nulidad lisa y llana, de una resolución, cuando se adviertan ilegalidades de fondo en una resolución o acto, sin importar si esta deriva o no de un procedimiento de fiscalización, pues de otra manera, se le concede a la autoridad fiscal la oportunidad de volver a emitir la resolución impugnada, incluso con los mismos vicios de fondo.

En el caso a estudio, la autoridad fiscal determinó en la resolución originalmente impugnada que para determinar la ganancia por enajenación de acciones, no se debían adicionar las pérdidas amortizadas al costo fiscal de las acciones de Dilocom, S.A. de C.V.

Sin embargo, ese mismo hecho ya fue determinado como ilegal por la Sala responsable en la sentencia reclamada de fecha 3 de mayo de 2018, al resolver que el costo promedio por acción determinado por mi mandante con motivo de la enajenación de las acciones de la sociedad Dilocom, S.A. de C.V. puede ser adicionado con las pérdidas amortizadas por Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V. (originalmente Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V.).

De lo anterior, ese H. Tribunal Colegiado podrá advertir que la Sala responsable, ha dictado una nulidad para el efecto de que la autoridad vuelva a emitir una nueva resolución, que podrá sustentarse en un hecho que ya fue declarado como ilegal.--

Por lo anterior, la sentencia reclamada es violatoria en perjuicio de mi representada de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, en relación con el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que lo procedente será conceder a mi mandate el amparo y protección de la justicia federal para el efecto de que se emita una nueva sentencia en la que se declare la nulidad lisa y llana de la resolución originalmente impugnada.

D. Ilegalidad de la sentencia reclamada, toda vez que declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada, NO conduciría a nada práctico.

De igual manera, es importante hacer notar, que el hecho de que la Sala responsable hubiera declarado la nulidad de la resolución del crédito fiscal contenido en el oficio 900 06 02-2013-1012, para el efecto de que la autoridad fiscal, de considerarlo procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación de la contribuyente hoy parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de la tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1º de enero de 2003, a nada práctico conduciría.

Lo anterior es así, ya que la autoridad fiscal que aplique lo anterior, tendría que calcular el costo promedio por acción de las acciones que mi representada enajenó de Dilocom, S.A. de C.V. en el ejercicio de 2007, adicionando las pérdidas fiscales amortizadas por Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V.

A efecto de evidenciar lo anterior, en primer lugar es importante mencionar que el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en 2007 establecía dos procedimientos para determinar la ganancia por enajenación de acciones., a saber, (i) el cálculo de la ganancia por enajenación de acciones cuyo periodo de tenencia haya sido superior a doce meses, y (ii) el cálculo de la ganancia por enajenación de acciones cuyo periodo de tenencia sea doce meses o inferior.

La diferencia esencial en ambos procedimientos, es que el referente a la tenencia accionaria mayor a doce meses, reconoce el impacto que tienen conceptos como la diferencia en los saldos de la cuenta de utilidad fiscal neta y las pérdidas fiscales amortizadas, mientras que el procedimiento referente a la tenencia accionaria de doce meses o menos, no lo reconoce.

Para una mejor explicación del procedimiento que debe realizarse para determinar el monto original ajustado de las acciones, a continuación se muestra la formula general para determinar el costo promedio por acción en tenencia accionaria superior a 12 meses de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta:

$$\begin{array}{l}
 \text{Costo comprobado de adquisición} \\
 + \\
 \text{Diferencia positiva: saldo de CUFIN a la fecha de enajenación} \\
 \text{(menos) saldo de CUFIN a la fecha de adquisición} \\
 - \\
 \text{Pérdidas pendientes de disminuir generadas durante el periodo de} \\
 \text{tenencia} \\
 - \\
 \text{Reembolsos pagados respecto de las acciones por las cuales se} \\
 \text{realiza el cálculo} \\
 - \\
 \text{Suma de la diferencia a que se refiere el cuarto párrafo del artículo} \\
 \text{88 (UFIN negativa)} \\
 + \\
 \text{Pérdidas generadas previamente al periodo de tenencia accionaria,} \\
 \text{amortizadas durante dicho periodo} \\
 = \\
 \text{Monto original ajustado} \\
 \text{Entre} \\
 \text{Número total de acciones que tenga el contribuyente a la fecha de} \\
 \text{la enajenación} \\
 = \\
 \text{Costo promedio por acción}
 \end{array}$$

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
EN MATERIA
DEL FISCAL

Por su parte, para determinar el costo promedio por acción en tenencia accionaria igual o menor a 12 meses, el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecía lo siguiente:

$$\begin{array}{l}
 \text{Costo comprobado de adquisición} \\
 - \\
 \text{Reembolsos pagados respecto de las acciones por las cuales se} \\
 \text{realiza el cálculo} \\
 - \\
 \text{Dividendos o utilidades pagados respecto de las acciones por las} \\
 \text{que se realiza el cálculo} \\
 = \\
 \text{Monto original ajustado} \\
 \text{Entre} \\
 \text{Número total de acciones que tenga el contribuyente a la fecha de} \\
 \text{la enajenación} \\
 =
 \end{array}$$

Costo promedio por acción

De lo anterior, podemos concluir lo siguiente:

1) Cuando la tenencia accionaria de las acciones que se enajenan, fue por un periodo superior a doce meses, el contribuyente debe, para efectos de calcular el costo promedio por acción, sumar, entre otras operaciones, (i) la diferencia positiva (saldo de CUFIN a la fecha de enajenación (menos) saldo de CUFIN a la fecha de adquisición) y (ii) las pérdidas generadas previamente al periodo de tenencia accionaria, amortizadas durante dicho periodo.

2) Cuando la tenencia accionaria de las acciones que se enajenan, fue por un periodo de doce meses o menor, el contribuyente no debe, para efectos de calcular el costo promedio por acción, sumar los conceptos mencionados.

Así las cosas, si la Sala responsable en la sentencia reclamada de fecha 3 de mayo de 2018, declaró la nulidad del crédito fiscal impugnado, para el efecto de que la autoridad fiscal, emita una nueva resolución en la que determine la situación de la contribuyente hoy parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de la tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1º de enero de 2003, a nada práctico conduciría.

Ello, pues la autoridad fiscal tendría que calcular el costo promedio por acción de las acciones que mi representada enajenó de Dilocom, S.A. de C.V. en el ejercicio de 2007, adicionando las pérdidas fiscales amortizadas por Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V.; lo cual ya no generaría un nuevo resultado, o crédito a cargo de mi representada.

Pues, precisamente el crédito fiscal impugnado en el juicio fiscal de origen, se detonó por el rechazo de la deducción de una pérdida por venta de acciones en cantidad de \$4,098'268,359.52, deducción que tuvo lugar por el hecho de que en el costo promedio por acción determinado por mi mandante con motivo de la enajenación de las acciones de la sociedad Dilocom, S.A. de C.V. adicionó las pérdidas amortizadas por Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V. (originalmente Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V.).

De hecho, la *Litis* en el juicio fiscal de origen consistió en dilucidar si el costo promedio por acción determinado por mi mandante con motivo de la enajenación de las acciones de la sociedad Dilocom, S.A. de C.V. puede ser adicionado con las pérdidas amortizadas por Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V. (originalmente Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V.), situación que

como ya vimos fue validada por la Sala responsable en la sentencia reclamada y que constituye cosa juzgada en el presente asunto.

De lo anterior, claramente se demuestra la ilegalidad de la sentencia de fecha 3 de mayo de 2018, pues la misma determina la nulidad para efectos de la resolución impugnada, para un efecto notoriamente impráctico.

E. Ilegalidad de la sentencia reclamada, al encontrarse indebidamente fundada y motivada, pues la Sala responsable fue omisa en acatar la Jurisprudencia 2ª./J.133/2014 (10ª).

No obstante que lo anterior es más que suficiente para demostrar la ilegalidad de la sentencia reclamada, denota la indebida fundamentación y motivación de la sentencia reclamada, el hecho de que la Sala responsable hubiese sido omisa en acatar la Jurisprudencia 2ª./J.133/2014 (10ª.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro; "NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS", en franca contravención al artículo 217 de la Ley de Amparo. **EN MATERIA DEL PRIM**

Lo anterior es así, ya que la Sala responsable paso por alto, que en la especie existe una jurisprudencia de aplicación obligatoria, que determina a contrario sensu que cuando la resolución impugnada no adolezca de una ilegalidad derivada de un vicio de forma, la nulidad declarada debe ser lisa y llana.

A continuación se transcribe la Jurisprudencia mencionada para una mejor comprensión:

"NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS De lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivan las causas que dan lugar a la ilegalidad de la resolución impugnada, así como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas y los actos que la autoridad debe realizar en cumplimiento de la sentencia anulatoria. En este marco se observa que cuando la resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales y se decreta su ilegalidad por vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, sino que ésta debe ser para efectos, los cuales se traducen en que la autoridad determine dictar una nueva resolución o bien, decida no hacerlo, en el entendido de que si decide actuar deberá sujetarse al plazo de cuatro meses con los que cuenta para cumplir con el fallo y a subsanar los vicios formales de que adolecía el acto declarado nulo, en los términos expresamente señalados en la sentencia que se cumple."

Contradicción de tesis 210/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materias Administrativa y Civil del Décimo

Noveno Circuito. 5 de noviembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien integró Sala, José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez Dayán y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández; en su ausencia hizo suyo el asunto José Fernando Franco González Salas. Secretario: José Alvaro Vargas Ornelas.

Tesis y criterio contendientes

Tesis VI.1o A. J/53, de rubro: "NULIDAD LISA Y LLANA POR VICIOS DE FORMA DECLARADA CONFORME A LOS ARTICULOS 51, FRACCIÓN III, Y 52, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE ACTUALIZA ANTE LA ILEGAL NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN, Y SUS ALCANCES SON LOS DEL TIPO DE NULIDAD EXCEPCIONAL QUE SE PREVEÍA EN EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, Y ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2005.", aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, febrero de 2011, página 2138. y

El sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, al resolver el amparo directo 72/2013.

Tesis de jurisprudencia 133/2014 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiséis de noviembre de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de febrero de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 02 de marzo de 2015, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época

Registro: 2008559

Instancia: Segunda Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II

Materia(s): Administrativa

Tesis: 2a./J. 133/2014 (10a.)

Página: 1689

(Énfasis añadido)

De la anterior jurisprudencia, es evidente que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado que únicamente respecto a resoluciones que provengan de un procedimiento oficioso iniciado con motivo de facultades discrecionales – como es el caso de las facultades de fiscalización -, y

en el caso de ilegalidades que deriven de vicios de forma, la nulidad declarada siempre tiene que ser para efectos.

Lo cual a contrario sensu, nos lleva a concluir que en el caso de resoluciones que provengan de un procedimiento fiscalización, y en el caso de ilegalidades que deriven de vicios de fondo, la nulidad declarada siempre tiene que ser lisa y llana.

De igual manera, se estableció que dicha jurisprudencia entraría en vigor a partir del 2 de marzo de 2015, es decir, antes de la emisión de la sentencia reclamada.

Así las cosas, es importante hacer mención que de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, la Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya sea funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para los Tribunales Administrativos.

Para una mayor comprensión, a continuación se transcribe el contenido del citado artículo:

"Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decreta el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna."

(Énfasis añadido)

De lo anterior, claramente se advierte que la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para los juzgados los tribunales administrativos federal – como es el caso de la Sala Responsable.

No obstante lo anterior, la Sala responsable fue omisa en acatar el artículo 217 de la Ley de Amparo, pues a pesar de que existía la Jurisprudencia 2ª./J.133/2014 (10ª.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia

FCMOCTAVI
E. MATERIA
DEL PRII

de la Nación, de rubro: "NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS", misma que se encontraba vigente antes de la emisión de la sentencia reclamada, y a pesar de que la Sala responsable determinó diversas ilegalidades que derivan de cuestiones de fondo - ya que están relacionadas con la indebida aplicación e interpretación de las disposiciones legales aplicadas en la determinación del crédito fiscal impugnado en el juicio de nulidad de origen-, declaró la nulidad de la resolución impugnada para efectos.

Es decir, la Sala responsable declaró la nulidad de resolución impugnada para el efecto de que la autoridad fiscal, de considerarlo procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación de la contribuyente hoy parte quejosa, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de la tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

En virtud de todo lo anterior, ese H. Tribunal Colegiado podrá advertir que resulta ilegal que la Sala responsable haya sido omisa en acatar el contenido de la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al dictar la sentencia reclamada, en franca contravención al artículo 217 de la Ley de Amparo, lo que denota que dicha sentencia se encuentra indebidamente fundada y motivada.

F. Ilegalidad de la sentencia reclamada, toda vez que viola lo dispuesto por los artículos 50 del Código Fiscal de la Federación y 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Finalmente, la sentencia reclamada deviene ilegal, pues al emitirla la Sala responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que se pueda emitir una nueva resolución, lo cual implicaría que la autoridad fiscal determine un crédito fiscal por hechos que ya habían sido revisados, como es el caso del hecho de determinar la ganancia por enajenación de acciones del ejercicio de 2007, lo cual violenta los artículos 50 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

En efecto, la Sala responsable declaró en la sentencia reclamada, la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución, en la que determine la situación fiscal de mi representada, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Lo anterior, claramente implica que la Sala responsable valida el hecho de que la autoridad fiscal emita una nueva resolución, con base en hechos que ya

habían sido revisados previamente, como es el caso de la determinación de la ganancia por enajenación de acciones, ello, en total contravención a lo dispuesto por el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

A efecto de evidenciar la ilegalidad de la sentencia reclamada, resulta importante recordar lo establecido en el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, mismo que se transcribe al tenor siguiente:

"Artículo 50. Las autoridades fiscales que al practicar visitas a los contribuyentes o al ejercer las facultades de comprobación a que se refiere el artículo 48 de este Código, conozcan de hechos u omisiones que entrañen incumplimiento de las disposiciones fiscales, determinarán las contribuciones omitidas mediante resolución que se notificará personalmente al contribuyente, dentro de un plazo máximo de seis meses contado a partir de la fecha en que se levante el acta final de la visita o, tratándose de la revisión de la contabilidad de los contribuyentes que se efectúe en las oficinas de las autoridades fiscales, a partir de la fecha en que concluyan los plazos a que se refieren las fracciones VI y VII del artículo 48 de este Código.

El plazo para emitir la resolución a que se refiere este artículo se suspenderá en los casos previstos en las fracciones I, II y III del artículo 46-A de este Código.

Si durante el plazo para emitir la resolución de que se trate, los contribuyentes interponen algún medio de defensa en el país o en el extranjero, contra el acta final de visita o del oficio de observaciones de que se trate, dicho plazo se suspenderá desde la fecha en que se interpongan los citados medios de defensa y hasta que se dicte resolución definitiva de los mismos.

Cuando las autoridades no emitan la resolución correspondiente dentro del plazo mencionado, quedará sin efectos la orden y las actuaciones que se derivaron durante la visita o revisión de que se trate.

En dicha resolución deberán señalarse los plazos en que la misma puede ser impugnada en el recurso administrativo y en el juicio contencioso administrativo. Cuando en la resolución se omita el señalamiento de referencia, el contribuyente contará con el doble del plazo que establecen las disposiciones legales para interponer el recurso administrativo o el juicio contencioso administrativo.

Siempre se podrá volver a determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos correspondientes al mismo ejercicio, cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares en las declaraciones complementarias que se presenten o en la documentación aportada por los contribuyentes en los medios de defensa que promuevan y que no hubiera sido exhibida ante las autoridades fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en las disposiciones fiscales, de conformidad con lo previsto por el último párrafo del artículo 48 de este Código."

(Énfasis añadido)



Del numeral antes transcrito, se desprende que la autoridad fiscal podrá determinar contribuciones o aprovechamientos omitidos correspondientes al mismo ejercicio fiscal, siempre que se comprueben hechos diferentes.

Los hechos diferentes, según el numeral transcrito, deben encontrarse sustentados en información, datos o documentos de terceros, en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad, en los datos aportados por los particulares en sus declaraciones complementarias o bien en la documentación proporcionada por los contribuyentes en los medios de defensa que al efecto hagan valer.

En relación con lo anterior, los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente establecen lo siguiente:

INSTITUTO LEGISLATIVO
MINISTERIO DE ECONOMÍA
CIRCULAR

"Artículo 19. Cuando las autoridades fiscales determinen contribuciones omitidas, no podrán llevar a cabo determinaciones adicionales con base en los mismos hechos conocidos en una revisión, pero podrán hacerlo cuando se comprueben hechos diferentes. La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en información, datos o documentos de terceros o en la revisión de conceptos específicos que no se hayan revisado con anterioridad; en este último supuesto, la orden por la que se ejerzan las facultades de comprobación deberá estar debidamente motivada con la expresión de los nuevos conceptos a revisar."

"Artículo 20. Las autoridades fiscales podrán revisar nuevamente los mismos hechos, contribuciones y periodos, por los que se tuvo al contribuyente por corregido de su situación fiscal, o se le determinaron contribuciones omitidas, sin que de dicha revisión pueda derivar crédito fiscal alguno a cargo del contribuyente.

(Énfasis añadido)"

Conforme a la transcripción anterior se desprende que la autoridad fiscal no podrá determinar contribuciones omitidas, con base en los mismos hechos conocidos en una revisión previa, a menos que justifique la existencia de hechos diferentes.

Asimismo, se desprende que la autoridad fiscal podrá revisar nuevamente los mismos hechos, contribuciones y periodos por los que previamente hayan determinado contribuciones omitidas, pero NO podrá determinar crédito fiscal alguno.

Ahora bien, en el presente caso, la resolución determinante del crédito fiscal contenida en el oficio número 900 06-02-2013-1012, resolución impugnada en el juicio de nulidad de origen, versa sobre los mismos hechos respecto de los cuales versará la nueva resolución que llegara a dictar la autoridad fiscal en cumplimiento a la sentencia reclamada de fecha 3 de mayo de 2018, es decir, respecto de la determinación de la ganancia por enajenación de acciones.

En efecto, la autoridad fiscal determinó en la resolución impugnada que para efecto de determinar la ganancia por enajenación de acciones, no se debían adicionar pérdidas amortizadas al costo fiscal de las acciones de Dilocom, S.A. de

C.V., determinando así el costo promedio por acción, en términos del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, utilizando la mecánica para la tenencia accionaria igual o menor a doce meses.

Sin embargo, ese mismo hecho ya fue determinado como ilegal por la Sala responsable en la sentencia reclamada, de fecha 3 de mayo de 2018, al resolver que el costo promedio por acción determinado por mi mandante con motivo de la enajenación de las acciones de la sociedad Dilocom, S.A. de C.V. puede ser adicionado con las pérdidas amortizadas por Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V. (originalmente Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V.), y que por lo tanto le es aplicable a la empresa quejosa el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia mayor a 12 meses regulado por el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

De lo anterior, ese H. Tribunal Colegiado podrá advertir que la Sala responsable, ha dictado una nulidad para el efecto de que la autoridad vuelva a emitir una nueva resolución, que incluso puede ser un crédito fiscal, sobre un mismo hecho, que ya fue revisado, y este radica en la determinación de la ganancia por enajenación de acciones.

Situación anterior que a todas luces resulta violatoria del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, en relación con los diversos 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, pues la Sala responsable determinó se volviera a emitir una nueva resolución por el mismo ejercicio fiscal, a saber, 2007, sin advertir que no hay hechos diferentes declarados como válidos que justifiquen su nueva determinación.

Al respecto, resulta aplicable el siguiente criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mismo que es del tenor siguiente:

"REVISIÓN DE GABINETE. LA ORDEN RELACIONADA CON PERIODOS Y CONTRIBUCIONES MATERIA DE UN PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN ANTERIOR DECLARADO NULO, CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, EN SU VERTIENTE ESPECÍFICA DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM, SI EN ELLA NO SE ACREDITA LA EXISTENCIA DE HECHOS DIFERENTES. El principio mencionado, contenido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como una forma específica de evitar los actos arbitrarios de molestia mediante la prohibición de reiterar la incidencia de la autoridad en la esfera de derechos de los particulares por hechos que han sido juzgados, resulta aplicable a todas las ramas jurídicas y ha sido reiterado en los artículos 16, 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. En consecuencia, con independencia de la razón por la que se declaró la nulidad de un procedimiento de revisión de gabinete anterior, la autoridad está obligada a motivar debidamente una nueva orden por los mismos periodos y contribuciones, comprobando la existencia de hechos diferentes y que éstos se acrediten en el

mandamiento, en términos de las normas legales citadas, no obstante que se involucren nuevas contribuciones y, de no hacerlo así, la orden deviene ilegal y contraria a la garantía de seguridad jurídica, en su vertiente específica del principio non bis in idem, pues tanto el domicilio como la privacidad de los papeles (información contable) son tutelados por aquella en igual intensidad y donde existe la misma razón debe aplicarse la misma disposición.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 413/2014. 23 de septiembre de 2014. Mayoría de votos. Disidente: Osmar Armando Cruz Quiroz. Ponente: Jorge Ojeda Velázquez. Secretario: Gustavo Eduardo López Espinoza.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 134/2013 (10a.), de rubro: "REVISIÓN DE GABINETE. AL NO SERLE APLICABLE LA LIMITANTE PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, TAMPOCO LO ES LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 157/2011 (9a.) [*].", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, Tomo 2, septiembre de 2013, página 1590.

Esta tesis se publicó el viernes 27 de marzo de 2015 a las 09:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Época: Décima Época, Registro: 2008783, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Materia(s): Constitucional, Tesis: 1.3o.A.2 A (10a.), Página: 2500."

(énfasis añadido)

De lo anterior, se advierte que existe una prohibición para la autoridad fiscal en reiterar hechos que ya han sido juzgados, de conformidad con los artículos 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Como en la especie, lo sería volver a emitir una resolución, sobre un hecho que la propia Sala responsable ya declaró ilegal, y que llevo a que declare la nulidad de la resolución impugnada, como es la correcta determinación de la ganancia por enajenación de acciones.

No obstante lo anterior, y en total contravención a lo dispuesto por los artículos 1° Constitucional, 50 del Código Fiscal de la Federación, 19 y 20 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, la Sala responsable declara la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad la vuelva a emitir, en base a un hecho que fue revisado, y que ya se determinó ilegal.

Derivado de lo anterior, es clara la ilegalidad de sentencia que por esta vía se reclama, pues la conclusión de la Sala responsable de declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada, a pesar de que determinó y advirtió ilegalidades que

TRIBUNAL COLEGIADO
MATERIA ADMINISTRATIVA
CIRCUITO

3101

están directamente relacionadas con el fondo de la cuestión debatida, en el sentido de que el crédito fiscal impugnado se determinó en base a la aplicación e interpretación indebida de diversos dispositivos legales, es errónea y contraviene lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, por lo que lo procedente será que ese H. Tribunal Colegiado conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a la hoy quejosa.

SEGUNDO. INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 51, 52 Y 57 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN RELACIÓN A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 CONSTITUCIONALES.

La Sala responsable efectuó en la sentencia reclamada un incorrecto control de convencionalidad y de constitucionalidad.

En efecto, para evidenciar la ilegalidad de la resolución impugnada, era necesario que la Sala responsable llevara a cabo una interpretación y aplicación de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo conforme a los derechos y garantías consagradas por la Constitución Federal.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CINCOCTAVO T
EN MATERIA
DEL PR.

Derivado de que a través de los argumentos hechos valer con anterioridad, se demuestra claramente la ilegalidad de la sentencia reclamada al declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada, es importante señalar que ese H. Tribunal Colegiado debe llevar a cabo de igual forma una interpretación y aplicación de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo conforme a los derechos y garantías consagradas por la Constitución Federal.

A. Control de convencionalidad y de constitucionalidad

Al respecto, es importante señalar que a partir de la reforma constitucional de junio de 2011, el artículo 1° de nuestra Carta Magna se reconoce la obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, a velar no sólo por los derechos fundamentales contenidos en la propia Constitución Federal y por aquéllos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

Asimismo, dicha disposición establece que las normas relativas a derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Constitución Federal y los tratados favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

En estos términos, no pasará desapercibido para ese H. Tribunal Colegiado, que las normas previstas en la legislación secundaria deberán ser interpretadas y aplicadas, en todo tiempo, respetando los derechos fundamentales y garantías previstas en la Constitución.

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en este mismo sentido, señalando que las disposiciones legales siempre deben ser interpretadas y aplicadas de la manera más conforme al texto constitucional, tal como se advierte del contenido de la siguiente tesis jurisprudencial cuyo contenido es el siguiente:

"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SELECCIÓN DE LA INTERPRETACIÓN LEGAL MÁS CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN. La Suprema Corte, como garante supremo de la eficacia jurídica de la Constitución, debe resolver cualquier asunto sometido a su conocimiento tomando en consideración la fuerza normativa superior de que gozan las previsiones de la Carta Magna. Dado que las contradicciones entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados de Circuito emergen de manera típica en ámbitos o respecto de puntos en los que la interpretación de las leyes puede hacerse de varios modos, cuando esta Suprema Corte establece cuál de estas posibilidades debe prevalecer, uno de los elementos de juicio sin ninguna duda más relevantes debe ser el que evalúa cuál de ellas materializa de modo más efectivo, en el caso concreto, las previsiones constitucionales. Al desarrollar su labor, la Suprema Corte debe siempre tener presente el contenido de los imperativos constitucionales. Por ello, el contenido de la Constitución debe tenerse en cuenta no solamente en aquellas vías jurisdiccionales en las que el pronunciamiento de la Corte desemboca en la declaración de inconstitucionalidad de un acto o una norma, sino en la totalidad de tareas que tiene encomendadas, incluida la resolución de contradicciones de tesis.

Contradicción de tesis 163/2007-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Civil del Séptimo Circuito. 9 de abril de 2008. Mayoría de tres votos. Disidentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Roberto Lara Chagoyán."

Como se puede advertir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para interpretar y aplicar correctamente una disposición legal, ello debe efectuarse de manera que sea conforme al texto constitucional, es decir, respetando los derechos y garantías constitucionales.

Incluso, nuestro Máximo Tribunal ha establecido que en términos del artículo 1º de la Constitución Federal, en caso de que una disposición legal contravenga derechos fundamentales, todas las autoridades del país están obligadas a dejar de aplicarlas dando preferencia a las normas contenidas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales en la materia.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el mandato contenido en el nuevo texto del artículo 1º constitucional debe interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133, para ejercer el control difuso o de convencionalidad ex officio en materia de derechos fundamentales.

MEXICO
TRIBUNAL COLEGIADO
ADMINISTRATIVO
PRIMERO

31

Para llevar a cabo el control difuso o de convencionalidad ex officio en materia de derechos fundamentales, nuestro Máximo Tribunal señala que los juzgadores, en su función jurisdiccional, están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior, estando obligados a dejar de aplicar dichas normas inferiores dando preferencia a las contenidas en nuestra Carta Magna y en los tratados en la materia.

Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece lo siguiente:

"CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. De conformidad con lo previsto en el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio pro persona. Estos mandatos contenidos en el artículo 1º constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 10 de junio de 2011, deben interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país. Es en la función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1º constitucionales, en donde los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior. Si bien los jueces no pueden hacer una declaración general sobre la invalidez o expulsar del orden jurídico las normas que consideren contrarias a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados (como sí sucede en las vías de control directas establecidas expresamente en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución), sí están obligados a dejar de aplicar las normas inferiores dando preferencia a las contenidas en la Constitución y en los tratados en la materia."

Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. (Énfasis y subrayado añadidos)

De la tesis transcrita, se desprende que derivado de la reforma constitucional del artículo 1º de la Constitución Federal, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en esa Ley Fundamental, sino también por aquéllos

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 TRECEIMOS OCTAVO
 EN MATERIA
 DEL FEU

39
71
contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se conoce en la doctrina como principio *pro persona*.

Continúa señalando dicha tesis, que el mandato contenido en el artículo 1º constitucional, debe interpretarse junto con lo establecido por el diverso 133 para determinar el marco dentro del que debe realizarse el control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos a cargo de las autoridades, el que deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país.

Señala la referida tesis, que dentro de su función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133 en relación con el artículo 1º constitucionales, los jueces están obligados a preferir los derechos fundamentales contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior, estando obligados a dejar de aplicar éstas dando preferencia a las contenidas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales en la materia, lo que se conoce como control difuso o de convencionalidad ex officio.

En relación con lo anterior, la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ha establecido que las autoridades deben realizar el control difuso o de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos conforme los siguientes pasos:

a) Realizar la interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país –al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano–, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia;

b) Llevar a cabo la interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,

c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.

Lo anterior, con la finalidad de fortalecer el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

Sirve de sustento a lo anterior, la siguiente tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual establece lo siguiente:

"PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. La posibilidad de inaplicación de leyes por los jueces del país, en ningún momento supone la eliminación o el desconocimiento de la presunción de constitucionalidad de ellas, sino que, precisamente, parte de esta presunción al permitir hacer el contraste previo a su aplicación. En ese orden de ideas, el Poder Judicial al ejercer un control de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, deberá realizar los siguientes pasos: a) Interpretación conforme en sentido amplio, lo que significa que los jueces del país —al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano—, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia; b) Interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y, c) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte."

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
 OCTAVO TRIBUNAL
 EN MATERIA ADMINISTRATIVA
 DEL PRIMER C

Varios 912/2010. 14 de julio de 2011. Mayoría de siete votos; votaron en contra: Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Jorge Mario Pardo Rebolledo con salvedades y Luis María Aguilar Morales con salvedades. (Énfasis y subrayado añadidos)

De lo hasta aquí expuesto, es procedente concluir lo siguiente:

1. A partir de junio de 2011, en el artículo 1º constitucional se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
2. Derivado de dicha reforma constitucional, es obligación de todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, a velar no sólo por los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también por aquéllos contenidos en los instrumentos internacionales celebrados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate.
3. Dentro de su función jurisdiccional, como está indicado en la última parte del artículo 133, en relación con el artículo 1º constitucionales, los jueces están obligados a preferir los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los

tratados internacionales, aun a pesar de las disposiciones en contrario que se encuentren en cualquier norma inferior, estando obligados a dejar de aplicar éstas dando preferencia a las contenidas en nuestra Carta Magna y en los tratados internacionales en la materia, lo que se conoce como control difuso o de convencionalidad ex officio.

4. En relación con lo anterior, nuestro Máximo Tribunal establece que las autoridades deben realizar el control difuso o de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos conforme los siguientes pasos:

i) Realizar la interpretación conforme en sentido amplio, conforme a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia;

ii) Llevar a cabo la interpretación conforme en sentido estricto, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, preferir aquélla que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos; y,

iii) Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles.

B. Interpretación conforme

Ahora bien, en el caso concreto, en términos de la interpretación que efectúa la Sala responsable, en el sentido de que debe declararse la nulidad para efectos, siempre que se adviertan ilegalidades – ya sea que deriven de vicios de forma o fondo – de una resolución emitida en ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, ocasiona que los contribuyentes no tengan certeza del tipo de ilegalidad que detona una nulidad lisa y llana, y la autoridad fiscal puede independientemente del tipo de ilegalidad que cometa, obtener siempre una nulidad para efectos.

Así, la interpretación y aplicación anterior no es conforme con los derechos humanos y garantías contenidas en la Constitución Federal, al ser violatoria de los derechos fundamentales y garantías de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad y legalidad, lo cual conlleva a una violación a lo dispuesto por el artículo 1º Constitucional, en relación con el diverso 133.

Por el contrario, de una interpretación conforme con los derechos y garantías contenidos en la constitución señalados en el párrafo anterior, a efecto de que la declaración de la nulidad del acto impugnado, sea acorde con dichos derechos humanos, deben cumplir con las formalidades esenciales que las rigen conforme al

artículo 16 Constitucional y el diverso 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación.

Lo anterior, pues si bien compete al órgano jurisdiccional determinar las ilegalidades y declarar la nulidad del acto impugnado, su ejercicio es reglado por las leyes que la rigen la nulidad del acto administrativo impugnado en juicio de nulidad, como lo son los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Así, de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que la Sala Fiscal podrá declarar que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre, entre otras causales, que los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o si se dejaron de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto.

Por lo que se prevé en dichos numerales, que cuando la Sala responsable determine que se actualizan las causales de ilegalidad referentes a la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, ausencia de fundamentación o motivación y vicios de del procedimiento, deberá declarar la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita una nueva resolución.

De igual manera, a contrario sensu, en los demás casos, se deberá dictar una nulidad lisa y llana, que no permita volver a emitir el acto, como es el caso de la causal de ilegalidad consistente en que la resolución impugnada se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto, ilegalidad que en la especie se actualizó, tal y como antes se explicó.

Sin embargo, la Sala responsable determinó en la sentencia reclamada, que toda ilegalidad advertida en una resolución que deriva del ejercicio de facultades de comprobación, solo da lugar a su nulidad para efectos, situación que de acuerdo a lo antes expuesto no solo es ilegal, sino que expone a los gobernados a una situación totalmente incierta, pues ya que todo crédito fiscal deriva del ejercicio de facultades de comprobación, éstos nunca van a tener certeza de cuando la ilegalidad de dicho crédito puede generar una nulidad lisa y llana.

Por otro lado, la autoridad podrá a su arbitrio cometer las ilegalidades que desee - sin importar si son de fondo o de forma -, sabiendo que únicamente se declarará la nulidad para efectos de dicha resolución, pudiendo reponer el ejercicio de facultades de comprobación o emitir en su caso una nueva resolución subsanando vicios de forma, actuación arbitraria que no se encuentra acorde con la Constitución.

Derivado de lo anterior, una interpretación conforme que debió haber realizado la Sala responsable, equivaldría a declarar la nulidad lisa y llana del acto administrativo impugnado, aunque éste derive del ejercicio de facultades de

comprobación, siempre que se hubiere advertido una ilegalidad respecto a un vicio de fondo, como es el caso de la indebida fundamentación y motivación del acto impugnado, situación que ya no daría lugar a que la autoridad pudiera subsanar los vicios del acto declarado nulo, o incluso reponer el procedimiento de fiscalización.

Así, ese H. Tribunal Colegiado podrá percatarse que lo anterior equivaldría a que la autoridad cometiera las ilegalidades que quisiera, es decir, que emitiera una resolución fundada en disposiciones o motivara en hechos totalmente inaplicables e inexistentes, o que interpretara cualquier disposición de manera incorrecta, pues ya de antemano sabe que con el hecho de ejercer facultades de comprobación, solo se va declarar la nulidad para efectos de la resolución impugnada, que le va dar la oportunidad de subsanar sus vicios y de reponer un procedimiento de fiscalización, situación que sería por demás arbitraria y por tanto violatoria del artículo 16 Constitucional.

En este sentido, ha quedado evidenciada la interpretación conforme que debe realizar ese H. Tribunal Colegiado respecto de las ilegalidades que detonan la nulidad lisa y llana del acto impugnado.

C. Interpretación pro persona

Aunado a lo anterior, conforme al principio pro persona, ese H. Tribunal Colegiado podrá percatarse que la interpretación que efectuó la Sala responsable de lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación al tipo de nulidad que provocan las causales de ilegalidad de un acto, de ninguna manera se traduce en favorecer la protección más amplia que otorgara la Constitución Federal.

Esto es así, ya que la interpretación más favorable para mi mandante, atendiendo al principio pro persona, es la aplicación estricta de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en relación con el derecho fundamental y garantía de legalidad, esto es, que las autoridades no pueden hacer más allá de lo que la ley les permite, y que los órganos jurisdiccionales deben dictar sentencia conforme a la Ley.

En este orden de ideas, lo precedente será que ese H. Tribunal Colegiado conceda el amparo y protección de la Justicia Federal a mi mandante, favoreciendo en todo momento la protección más amplia a mi mandante que le conceden los derechos humanos y garantías contenidas en la Constitución Federal y los tratados internacionales de los que México es parte, lo cual se traduce en interpretar los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en un sentido estricto, esto es, que en el caso la autoridad fiscal no puede fundar y motivar indebidamente un acto, pues ello implica que el acto se declare nulo de manera absoluta - liso y llana -, y ello implica que esta ya no puede volver a subsanar dichos vicios, o incluso a reponer el procedimiento de fiscalización.

Dicho de otra manera, ese H. Tribunal Colegiado deberá aplicar los artículos 52, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en un sentido limitativo de lo que pueden hacer las autoridades fiscales al momento de ejercer sus facultades de comprobación, pues ello resulta ser la interpretación más favorable para mi mandante, pues como ese H. Tribunal Colegiado podrá advertir de todo lo anteriormente expuesto, las autoridades fiscales no pueden cometer ilegalidad de fondo, es decir, que indebidamente fundan y motiven su actos, y que en el peor de los escenarios obtengan un nulidad para efectos de que subsanen los vicios de fondo del mismo, y vuelvan a emitirlo.

Lo anterior es así, ya que a través de la interpretación que efectuó la Sala responsable respecto de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se transgredirán los derechos fundamentales y garantías de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad legalidad, lo cual claramente no puede ser considerado como la aplicación más favorable, ya que ello conllevaría a desatender lo dispuesto por el artículo 133 Constitucional, en relación con el diverso 133.

En este sentido, con el objeto de respetar lo dispuesto por los artículos 133 Constitucionales y aplicando el control difuso o de convencionalidad ex officio en materia de derechos fundamentales, ese H. Tribunal Colegiado deberá adoptar la interpretación más favorable para la hoy quejosa, la cual consiste en aplicar los dispositivos legales antes aludidos, considerando que de su interpretación se desprende que procede declarar la nulidad lisa y llana, cuando se adviertan ilegalidades de fondo en una resolución o acto, sin importar si esta deriva o no de un procedimiento de fiscalización, pues sólo así se atendería al contenido de los artículos 1º y 133 Constitucionales.

Derivado de lo anterior, ese H. Tribunal Colegiado deberá conceder a mi mandante el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, interpretando las disposiciones anteriormente precisadas, favoreciendo en todo momento la protección más amplia a la parte quejosa.

D. La interpretación efectuada por la Sala responsable al contenido de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo viola el principio pro personae.

Finalmente, en el caso concreto, la Sala responsable al determinar que se debe declarar la nulidad para efectos de toda resolución ilegal que derive del ejercicio de facultades de comprobación, realiza una interpretación que conlleva una violación a la obligación que actualmente impone el artículo 1º Constitucional, en relación con el diverso 133, consistente en adoptar la interpretación más favorable al derecho humano.

Ello, pues con la interpretación realizada por la Sala responsable de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se pretende limitar el derecho que le asiste a mi representada para

obtener por medio de una sentencia la declaración de una nulidad absoluta – lisa y llana – del acto administrativo, por vicios de fondo, que le impida a la autoridad volver a dictar una resolución sobre los mismos hechos.

Es decir, la Sala responsable pretende limitar el derecho que le asiste a mi representada de obtener una sentencia que declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en juicio de nulidad, por encima del derecho fundamental de legalidad y seguridad jurídica, situación que evidencia que la Sala responsable NO está dando cumplimiento a la obligación que establece el artículo 1° constitucional vigente a partir de junio de 2011, de ahí que la sentencia reclamada sea inconstitucional.

Bajo este contexto, resulta inconstitucional que la Sala responsable pretenda que por el mero hecho de que la autoridad fiscal ejerza facultades de comprobación, se desconozca el derecho que tienen los contribuyentes a que se les permita obtener mediante sentencia la declaración de la nulidad lisa de un crédito fiscal.

TRIBUNAL COLEGIADO
4 ADMINISTRATIVO
MERCANTIL

Ello, pues con motivo de darle preferencia al ejercicio de un procedimiento de fiscalización y a las facultades discrecionales de las autoridades fiscales, se está haciendo nugatorio un derecho fundamental de mi mandante, lo que claramente contraviene el principio -"pro personae", establecido por el artículo 1° de nuestra Carta Magna.

Lo anterior, ha sido confirmado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los amparos directos en revisión 1662/2011 y 2293/2011, en donde ese Máximo Tribunal sostuvo que los formalismos y requisitos para el ejercicio de las prerrogativas de los ciudadanos forman parte de una dimensión institucional del derecho, de las reglas bajo las cuales opera un sistema normativo, pero NO pueden ser el pretexto para hacer nugatorios los derechos de los contribuyentes, máxime si se atiende al principio "pro personae", establecido por el texto del artículo 1° Constitucional, reformado al amparo del "Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, y que entro en vigor al día siguiente de su publicación.

En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de los amparos directos en revisión 1662/2011 y 2293/2011 resolvió esencialmente lo siguiente:

"Los formalismos y requisitos para el ejercicio de las prerrogativas de los ciudadanos forman parte de una dimensión institucional del derecho, de las reglas bajo las cuales opera un sistema normativo, pero no pueden ser el pretexto para hacer nugatorios los derechos de los contribuyentes, máxime si se atiende al principio "pro personae", establecido por el texto del artículo 1° constitucional, reformado al amparo del "Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos

artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, y que entro en vigor al día siguiente de su publicación.

[...]" (Énfasis y subrayado añadidos)

Derivado de lo anterior, con el objeto de respetar lo dispuesto por el artículo 1° constitucional y aplicando el control difuso o de convencionalidad ex officio en materia de derechos fundamentales, esa H. Sala debe declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, pues solo así se adoptaría la interpretación más favorable para la hoy actora y solo así se daría preferencia a lo dispuesto por los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, en cuanto a los derechos fundamentales y garantías de legalidad y seguridad jurídica.

De sostener lo contrario, es decir, de confirmarse la interpretación de la Sala responsable, ello provocaría que se le aplicara a mi mandante los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo de forma contraria a lo previsto por los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, lo cual de ninguna forma puede ser permitido por ese H. Tribunal Colegiado.

Así las cosas, es clara la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada, pues la Sala responsable no interpretó lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 57, atendiendo al principio pro personae, conforme a lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal.

En este sentido, con el objeto de respetar lo dispuesto por el artículo 1° y 133 constitucional y aplicando el control difuso o de convencionalidad ex officio en materia de derechos fundamentales, ese H. Tribunal Colegiado deberá adoptar la interpretación más favorable para la hoy quejosa, la cual consiste en aplicar los dispositivos legales antes aludidos, considerando que de su interpretación se desprende que procede declarar la nulidad lisa y llana, cuando se adviertan ilegalidades de fondo en una resolución o acto, sin importa si esta deriva o no de un procedimiento de fiscalización, pues sólo así se dará preferencia al contenido de los artículos 1° y 133 Constitucionales.

Derivado de lo anterior, es evidente la inconstitucionalidad de la sentencia reclamada, por lo que lo procedente será que, realizando el control difuso o de convencionalidad ex officio en materia de derechos humanos, esa H. Sala realice la interpretación de dichas disposiciones conforme a lo previsto por el artículo 1° constitucional, en relación con el diverso 133, adoptando la interpretación más favorable para la hoy actora.

TERCERO. INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 51, 52 Y 57 DE LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, AL VIOLAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE SEGURIDAD JURÍDICA E INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.

Con fundamento en el artículo 175 de la Ley de Amparo, en el presente Concepto de Violación se evidenciará la inconstitucionalidad directa de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, ello derivado de la interpretación que de los mismos efectúa la Sala responsable en la sentencia reclamada.

Al respecto, no obstante que ha quedado debidamente evidenciado que dicha interpretación es incorrecta y, por tanto, la sentencia reclamada deviene inconstitucional al sustentarse en ella, en caso de que ese H. Tribunal Colegiado considere que la interpretación que realizó la Sala responsable de lo dispuesto por los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es la correcta y la que debe prevalecer, entonces se combaten los mismos por inconstitucionales.

Lo anterior pues de sostenerse dicha interpretación, se estaría en contraviniendo a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de seguridad jurídica en relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad y prohibición del exceso.

3 A. Seguridad jurídica

En primer lugar, es importante recordar que el artículo 16 constitucional consagra el derecho fundamental a la seguridad jurídica.

"Artículo 16.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

(...)

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia.

(...)

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos.

[...]."

De la transcripción anterior, se desprende que el artículo 16 constitucional establece el derecho humano a la legalidad de los actos de autoridad que afecten o infrinjan alguna molestia a los particulares, sin privarlos de sus derechos, e impone a las autoridades que los emitan la obligación de que tales actos de molestia se expresen por escrito, provengan de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho que se consideraron por la autoridad para emitir el acto, los cuales deberán ser reales y ciertos, e investidos con la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad.

Asimismo, constitucionalmente se otorga la facultad a la autoridad administrativa para practicar visitas domiciliarias, sujetándose en todo caso a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos, las cuales establecen límites a la revisión de las autoridades.

Podemos decir que la seguridad jurídica consiste en que los gobernados no se encuentren en incertidumbre respecto de sus obligaciones y, por tanto, en estado de indefensión. Dicho en otras palabras, es el saber a qué atenerse respecto de los actos de autoridad.

En materia tributaria, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en jurisprudencia respecto a los alcances del derecho a la seguridad jurídica:

"SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA TRIBUTARIA. EN QUÉ CONSISTE. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución General de la República, es la base sobre la cual descansa el sistema jurídico mexicano, de manera tal que lo que tutela es que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. En ese sentido, el contenido esencial de dicho principio radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y a la actuación de la autoridad. Así, en materia tributaria debe destacarse el relevante papel que se concede a la ley (tanto en su concepción de voluntad general, como de razón ordenadora) como instrumento garantizador de un trato igual (objetivo) de todos ante la ley, frente a las arbitrariedades y abusos de la autoridad, lo que equivale a afirmar, desde un punto de vista positivo, la importancia de la ley como vehículo generador de certeza, y desde un punto de vista negativo, el papel de la ley como mecanismo de defensa frente a las posibles arbitrariedades de los órganos del Estado. De esta forma, las manifestaciones concretas del principio de seguridad jurídica en materia tributaria, se pueden compendiar en la certeza en el derecho y la interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso; la primera, a su vez, en la estabilidad del ordenamiento normativo, suficiente desarrollo y la certidumbre sobre los remedios jurídicos a disposición del contribuyente, en caso de no cumplirse con las previsiones del ordenamiento; y, la segunda, principal, más no exclusivamente, a través de los principios de proporcionalidad y jerarquía normativa,

44
81
por lo que la existencia de un ordenamiento tributario, participe de las características de todo ordenamiento jurídico, es producto de la juridificación del fenómeno tributario y su conversión en una realidad normada, y tal ordenamiento público constituirá un sistema de seguridad jurídica formal o de "seguridad a través del Derecho"

Amparo en revisión 820/2011. Estación de Servicios Los Alamos, S.A. de C.V. 8 de febrero de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 251/2012. Maquilas y Detallistas, S.A. de C.V. 7 de marzo de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 686/2012. Incomer, S.A. de C.V. 25 de abril de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

Amparo directo en revisión 1073/2012. Gold Medal Construction, S.A. de C.V. 27 de junio de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Amparo en revisión 416/2012. Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 8 de agosto de 2012. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: Carmen Vergara López.

Tesis de jurisprudencia 139/2012 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de veintiuno de noviembre de dos mil doce.

De la anterior transcripción, se desprende que nuestro Máximo Tribunal le otorga especial relevancia al derecho fundamental a la seguridad jurídica en materia tributaria, frente a las arbitrariedades y abusos de las autoridades, siendo principalmente su objetivo el dar certeza al gobernado respecto de las consecuencias de sus actos, así como manifestándose a través de la interdicción de la arbitrariedad y prohibición del exceso.

Respecto a este último principio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que consiste en hacer mesurable la actuación pública, buscando que cada medida que se adopte en el ejercicio del poder estatal sea equilibrada y razonable, libre de todo capricho o abuso; así, dicho principio impone la justicia en la medición de los medios que se dispongan en relación con un fin determinado, una "adaptabilidad" que transforme el efecto de la actividad impositiva pública objeto de esa actividad.

Es una regla de equilibrio de la acción impositiva del Estado dirigida a un objeto determinado, es decir, vincula la medida de comparación a un objeto justificador de la imposición, colectivamente relevante, valorando las consecuencias de la imposición según sus efectos, atendiendo al objeto de aquélla.²

² COMPROBANTES FISCALES. EL ARTÍCULO 29-C, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VULNERA EL PRINCIPIO DE INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD

B. Contenido de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo

Ahora bien, a efecto de evidenciar la inconstitucionalidad de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a la luz de la interpretación efectuada por la Sala responsable en la sentencia reclamada, es necesario transcribirlos:

"ARTÍCULO 51.- Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales

- I. Incompetencia del funcionario que la haya dictado, ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución.
- II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso

FCIMOCTAVO TRN
EN MATERIA AC
DEL PRIMEE

(LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2004). El precepto citado establece que las personas que conforme a las disposiciones fiscales estén obligadas a llevar contabilidad y efectúen el pago por distintas actividades a través de dos medios -cheque nominativo para abono en cuenta o traspasos de cuenta en instituciones de crédito o casas de bolsa-, podrán optar por utilizar como comprobantes fiscales para los efectos de las deducciones y los acreditamientos autorizados en las leyes fiscales, el original del estado de cuenta en donde conste el pago realizado. Ahora bien, el ejercicio de la citada opción se encuentra condicionado a que se cumpla, entre otros requisitos, con la consignación en el cheque respectivo, de la clave del Registro Federal de Contribuyentes del destinatario, girado o persona a favor de quien se hace el pago. Para tal efecto, se establece una presunción iuris tantum, consistente en que dicho requisito se tendrá por satisfecho cuando en el estado de cuenta expedido por la institución de crédito o casa de bolsa, se señale dicha clave del beneficiario del cheque. Por otra parte, el principio de interdicción de la arbitrariedad o prohibición del exceso consiste en hacer mesurable la actuación pública, buscando que cada medida que se adopte en el ejercicio del poder estatal sea equilibrada y razonable, libre de todo capricho o abuso; así, dicho principio impone la justicia en la medición de los medios que se dispongan en relación con un fin determinado, una "adaptabilidad" que transforme el efecto de la actividad impositiva pública objeto de esa actividad. Es una regla de equilibrio de la acción impositiva del Estado dirigida a un objeto determinado, es decir, vincula la medida de comparación a un objeto justificador de la imposición, colectivamente relevante, valorando las consecuencias de la imposición según sus efectos, atendiendo al objeto de aquélla. Consecuentemente, el hecho de que en el cheque nominativo para abono en cuenta o en el estado de cuenta respectivo deba asentarse la clave del Registro Federal de Contribuyentes del destinatario del pago, cuando se utilice como comprobante fiscal, no vulnera el principio de interdicción de la arbitrariedad, al no resultar arbitrario o excesivo, pues el legislador lo justificó, en atención al principio de seguridad jurídica, y con ello buscó promocionar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes y la reducción de los costos administrativos, liberando a éstos de la emisión de facturas. Además, la razón de crear el Registro Federal de Contribuyentes responde al control que debe tener la autoridad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, lo que implica que el requisito señalado sirve para saber, a ciencia cierta, quién es el contribuyente a quien se le hizo el pago; de manera que, a partir del señalamiento de dicha clave, la autoridad fiscal puede ejercer sus facultades de comprobación para cerciorarse de que el contribuyente que recibió el pago efectivamente tiene su domicilio fiscal en el lugar que señaló, que se dedica a las actividades manifestadas y que está obligado al cumplimiento de las obligaciones fiscales asentadas en su cédula de identificación o registro fiscal.

Amparo directo en revisión 84/2013. Lechera Alteña, S.A. de C.V. 6 de marzo de 2013. Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: Jorge Jiménez Jiménez.

III. Vicios del procedimiento siempre que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de la resolución impugnada.

IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto.

V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiera dichas facultades.

Para los efectos de lo dispuesto por las fracciones II y III del presente artículo, se considera que no afectan las defensas del particular ni trascienden al sentido de la resolución impugnada, entre otros, los vicios siguientes:

a) Cuando en un citatorio no se haga mención que es para recibir una orden de visita domiciliaria, siempre que ésta se inicie con el destinatario de la orden.

b) Cuando en un citatorio no se haga constar en forma circunstanciada la forma en que el notificador se cercioró que se encontraba en el domicilio correcto, siempre que la diligencia se haya efectuado en el domicilio indicado en el documento que deba notificarse.

c) Cuando en la entrega del citatorio se hayan cometido vicios de procedimiento, siempre que la diligencia prevista en dicho citatorio se haya entendido directamente con el interesado o con su representante legal.

d) Cuando existan irregularidades en los citatorios, en las notificaciones de requerimientos de solicitudes de datos, informes o documentos, o en los propios requerimientos, siempre y cuando el particular desahogue los mismos, exhibiendo oportunamente la información y documentación solicitados.

e) Cuando no se dé a conocer al contribuyente visitado el resultado de una compulsión a terceros, si la resolución impugnada no se sustenta en dichos resultados.

f) Cuando no se valore alguna prueba para acreditar los hechos asentados en el oficio de observaciones o en la última acta parcial, siempre que dicha prueba no sea idónea para dichos efectos.

El Tribunal podrá hacer valer de oficio, por ser de orden público, la incompetencia de la autoridad para dictar la resolución impugnada o para ordenar o tramitar el procedimiento del que derive y la ausencia total de fundamentación o motivación en dicha resolución.

Cuando resulte fundada la incompetencia de la autoridad y además existan agravios encaminados a controvertir el fondo del asunto, el Tribunal deberá analizarlos y si alguno de ellos resulta fundado, con base en el principio de mayor beneficio, procederá a resolver el fondo de la cuestión efectivamente planteada por el actor.

TRIBUNAL DE EJECUTIVO
ADMINISTRATIVO
CIRCUITO

Los órganos arbitrales y de otra naturaleza, derivados de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia de prácticas desleales, contenidos en tratados y convenios internacionales de los que México sea parte, no podrán revisar de oficio las causales a que se refiere este artículo.

Del anterior, artículo transcrito se prevén diversas causales que hacen ilegal un acto o resolución administrativa, entre las cuales se encuentra la indebida fundamentación y motivación del mismo, es decir, si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicarse las debidas en cuanto al fondo del asunto.

Las anteriores, causales de ilegalidad, detonan los siguientes efectos en una sentencia definitiva:

"ARTÍCULO 52.- La sentencia definitiva podrá:

- I. Reconocer la validez de la resolución impugnada.
- II. Declarar la nulidad de la resolución impugnada.
- III. (Se deroga)
- IV. Siempre que se esté en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III, del artículo 51 de esta Ley, el Tribunal declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o se emita nueva resolución; en los demás casos, cuando corresponda a la pretensión deducida, también podrá indicar los términos conforme a los cuales deberá dictar su resolución la autoridad administrativa.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER C

En los casos en que la sentencia implique una modificación a la cuantía de la resolución administrativa impugnada, la Sala Regional competente deberá precisar, el monto, el alcance y los términos de la misma para su cumplimiento.

Tratándose de sanciones, cuando dicho Tribunal aprecie que la sanción es excesiva porque no se motivó adecuadamente o no se dieron los hechos agravantes de la sanción, deberá reducir el importe de la sanción apreciando libremente las circunstancias que dieron lugar a la misma.

V. Declarar la nulidad de la resolución impugnada y además:

- a) Reconocer al actor la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de la obligación correlativa.
- b) Otorgar o restituir al actor en el goce de los derechos afectados.
- c) Declarar la nulidad del acto o resolución administrativa de carácter general, caso en que cesarán los efectos de los actos de ejecución que afectan al demandante, inclusive el primer acto de

aplicación que hubiese impugnado. La declaración de nulidad no tendrá otros efectos para el demandante, salvo lo previsto por las leyes de la materia de que se trate.

d) Reconocer la existencia de un derecho subjetivo y condenar al ente público federal al pago de una indemnización por los daños y perjuicios causados por sus servidores públicos.

Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado acto o iniciar un procedimiento, conforme a lo dispuesto en la fracción IV, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del Juicio Ordinario o un mes tratándose del Juicio Sumario de conformidad con lo previsto en el artículo 58-14 de la presente Ley, contados a partir de que la sentencia quede firme.

Dentro del mismo término deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando, tratándose de asuntos fiscales, hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

Si el cumplimiento de la sentencia entraña el ejercicio o el goce de un derecho por parte del demandante, transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior sin que la autoridad hubiere cumplido con la sentencia, el beneficiario del fallo tendrá derecho a una indemnización que la Sala que haya conocido del asunto determinará, atendiendo el tiempo transcurrido hasta el total cumplimiento del fallo y los perjuicios que la omisión hubiere ocasionado, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 58 de esta Ley. El ejercicio de dicho derecho se tramitará vía incidental.

Cuando para el cumplimiento de la sentencia, sea necesario solicitar información o realizar algún acto de la autoridad administrativa en el extranjero, se suspenderá el plazo a que se refiere el párrafo anterior, entre el momento en que se pida la información o en que se solicite realizar el acto correspondiente y la fecha en que se proporcione dicha información o se realice el acto.

Transcurridos los plazos establecidos en este precepto, sin que se haya dictado la resolución definitiva, precluirá el derecho de la autoridad para emitirla salvo en los casos en que el particular, con motivo de la sentencia, tenga derecho a una resolución definitiva que le confiera una prestación, le reconozca un derecho o le abra la posibilidad de obtenerlo.

En el caso de que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.

La sentencia se pronunciará sobre la indemnización o pago de costas, solicitados por las partes, cuando se adecue a los supuestos del artículo 60 de esta Ley."

(Énfasis añadido)

De igual manera, se dispone en el siguiente artículo, los efectos que puede tener la nulidad declarada en la sentencia definitiva, entre ellos, el que prevé que

cuando la resolución impugnada este viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos, y de igual manera se prevé que si se declara la nulidad por un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el procedimiento:

"ARTÍCULO 57.- Las autoridades demandadas y cualesquiera otra autoridad relacionada, están obligadas a cumplir las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, conforme a lo siguiente:

I. En los casos en los que la sentencia declare la nulidad y ésta se funde en alguna de las siguientes causales:

a) Tratándose de la incompetencia, la autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución, sin violar lo resuelto por la sentencia, siempre que no hayan caducado sus facultades. Este efecto se producirá aun en el caso de que la sentencia declare la nulidad en forma lisa y llana.

b) Si tiene su causa en un vicio de forma de la resolución impugnada, ésta se puede reponer subsanando el vicio que produjo la nulidad; en el caso de nulidad por vicios del procedimiento, éste se puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir del mismo.

CIMOCTAVO TR.
EN MATERIA A
DEL PRIME

En ambos casos, la autoridad demandada cuenta con un plazo de cuatro meses para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 del Código Fiscal de la Federación.

En el caso previsto en el párrafo anterior, cuando sea necesario realizar un acto de autoridad en el extranjero o solicitar información a terceros para corroborar datos relacionados con las operaciones efectuadas con los contribuyentes, en el plazo de cuatro meses no se contará el tiempo transcurrido entre la petición de la información o de la realización del acto correspondiente y aquél en el que se proporcione dicha información o se realice el acto. Igualmente, cuando en la reposición del procedimiento se presente alguno de los supuestos a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, tampoco se contará dentro del plazo de cuatro meses el periodo por el que se suspende el plazo para concluir las visitas domiciliarias o las revisiones de gabinete, previsto en dicho párrafo, según corresponda.

Si la autoridad tiene facultades discrecionales para iniciar el procedimiento o para dictar una nueva resolución en relación con dicho procedimiento, podrá abstenerse de reponerlo, siempre que no afecte al particular que obtuvo la nulidad de la resolución impugnada.

Los efectos que establece este inciso se producirán sin que sea necesario que la sentencia lo establezca, aun cuando la misma declare una nulidad lisa y llana.

c) Cuando la resolución impugnada esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una nueva resolución sobre

los mismos hechos, salvo que la sentencia le señale efectos que le permitan volver a dictar el acto. En ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor que la resolución anulada.

Para los efectos de este inciso, no se entenderá que el perjuicio se incrementa cuando se trate de juicios en contra de resoluciones que determinen obligaciones de pago que se aumenten con actualización por el simple transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país o con alguna tasa de interés o recargos.

d) Cuando prospere el desvío de poder, la autoridad queda impedida para dictar una nueva resolución sobre los mismos hechos que dieron lugar a la resolución impugnada, salvo que la sentencia ordene la reposición del acto administrativo anulado, en cuyo caso, éste deberá reponerse en el plazo que señala la sentencia.

II. En los casos de condena, la sentencia deberá precisar la forma y los plazos en los que la autoridad cumplirá con la obligación respectiva, conforme a las reglas establecidas en el artículo 52 de esta Ley.

Quando se interponga el juicio de amparo o el recurso de revisión, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la resolución que ponga fin a la controversia."

(Énfasis añadido)

De los artículos antes transcritos, se desprende que la Sala podrá declarar que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre, entre otras causales, que los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron de forma equivocada, o bien si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas en cuanto al fondo del asunto, y se prevé el tipo de nulidad que detona dicha ilegalidad, la cual si es de fondo provoca que la autoridad no pueda nuevamente emitir el acto (nulidad lisa y llana), y si es forma, el efecto es que esta subsane el vicio (nulidad para efectos).

C. Inconstitucionalidad de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a la luz de la interpretación de la Sala responsable en la sentencia reclamada.

Ahora bien, conforme a la interpretación que efectúa la Sala responsable de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, estos resultan inconstitucionales al violar en perjuicio de la hoy quejosa su derecho fundamental a la seguridad jurídica.

Lo anterior, ya que la Sala responsable determinó que los dispositivos legales aludidos prevén que en cualquier caso que se advierta una ilegalidad sobre una resolución que deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales - como es el caso de las facultades de comprobación previstas en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación-

sin importar si esta se refiere a vicios de fondo o de forma, se deberá declarar la nulidad para efectos.

Por lo anterior, la Sala responsable determinó declarar la nulidad de resolución impugnada en el juicio fiscal de origen, para el efecto de que la autoridad fiscal, de considerarlo procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación de la contribuyente hoy parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de la tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003.

Lo anterior, lo sustenta en lo resuelto por el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en el R.F. 8/2017, mediante sentencia de fecha 15 de marzo de 2018, en la cual determinó que cuando la resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales, como son el ejercicio de facultades de comprobación en materia fiscal, no puede decretarse su nulidad lisa y llana, y sólo procede decretar la nulidad para efectos.

DECIMOCTA.
EN MATERIA

Al respecto, a foja 47 de la sentencia reclamada, se transcribió parte de la sentencia del R.F. 8/2017, en la que el Colegiado hizo tal afirmación, de acuerdo con la siguiente imagen:

A la luz de las premisas sentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se anunció, los argumentos que persiguen la nulidad para efectos del acto impugnado son fundados.

➡ En primer lugar, la jurisprudencia 2a./J. 133/2014 (10a.) claramente dispone que cuando la resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales, como en el caso que se trata de la comprobación de las obligaciones fiscales de la ahora quejosa, no puede decretarse su nulidad lisa y llana.

De la anterior parte de la sentencia del R.F. 8/2017 es posible desprender que el Tribunal considera que en materia de facultades de comprobación, no puede declararse la nulidad lisa y llana de los oficios liquidatorios.

En la sentencia reclamada, la Sala responsable hace suya tal conclusión en el sentido de que las ilegalidades derivadas de una resolución que se originó en un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales - como es el caso de las facultades de comprobación en materia fiscal -, detona una

28

89

nulidad para efectos, y en ese sentido interpreta los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Ello, tal y como se puede corroborar a foja 1294 de la sentencia reclamada, cuya imagen se inserta:

- 1294 -

cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003. lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos.

Lo anterior es así, en razón de que tal y como lo sostuvo el Tribunal de Alzada en la ejecutoria que se cumplimenta de fecha 16 de marzo de 2016, las razones de nulidad por las cuales se decretó la nulidad del crédito fiscal impugnado en el caso que nos ocupa, no atienden a aquellas que destruyen la facultad de la hacienda pública para ejercer sus atribuciones fiscalizadoras, por lo que, es evidente que la atribución revisora de la autoridad exactora está incólume, lo que genera atento a la naturaleza y origen del acto impugnado, la nulidad para efectos.

Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número 2a/J/ 133/2014 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en el mes de febrero de 2016, la cual a la letra señala lo siguiente:

"Época: Decimo Época
Registro: 2006559
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 16, Febrero de 2016, Tomo II
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a/J/ 133/2014 (10a.)
Página: 1655

NULIDAD DE RESOLUCIONES O ACTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO DE FACULTADES DISCRECIONALES. LA DECRETADA POR VICIOS DE FORMA DEBE SER PARA EFECTOS. De lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, derivan las causas que dan lugar a la nulidad de la resolución impugnada, así como el tipo de nulidad que origina cada una de ellas y los actos que la autoridad debe realizar en cumplimiento de la sentencia anulatoria. En este marco se observa que cuando la resolución o acto materia del juicio deriva de un procedimiento oficioso incoado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales y se decreta su nulidad por vicios de forma, no puede decretarse su nulidad lisa y llana, ni simple o discrecional, sino que esta debe ser para efectos. Las cuales se traducen en que la autoridad determine (lisa y llana) la resolución o bien, decida no hacerlo, en el entendido de que si decide volver deberá sujetarse al plazo de cuatro meses con los que cuenta para cumplir con el fallo y a subsanar los vicios formales de que adolece el acto declarado nulo, en los términos expresamente señalados en la sentencia que se cumple.

Contradicción de tesis 210/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Administrativa del Sexto Circuito y Primero en Materia Administrativa y Civil del Decimo Noveno Circuito 5 de noviembre de 2014. Mayoría de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, quien integra Sala José Fernando Franco González Salas y Luis María Aguilar Morales. Disidentes: Alberto Pérez

Así, no podrá pasar desapercibido para ese H. Tribunal Colegiado que lo anterior hace que los dispositivos legales mencionados sean violatorios de los derechos fundamentales y garantías de seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad, consagradas en el artículo 16 Constitucional, ya que entonces los contribuyentes nunca tendrán la certeza de cuándo o en qué momento una causal de ilegalidad detona la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, pues todo crédito fiscal deriva necesariamente del ejercicio de facultades de comprobación, y así, cualquier ilegalidad que contenga el mismo - sin importar si es de fondo o de forma -, siempre va a dar lugar a una nulidad para efectos.

Lo anterior, además permite la arbitrariedad de las autoridades, para que ellas decidan el tipo de nulidad que les conviene, pues de entrada ya saben que basta con que ejerzan facultades de comprobación, para que cualquier ilegalidad

317

que cometan, ya sea en el procedimiento o en la misma determinación de la resolución, tenga el efecto de detonar una nulidad para efectos, y esta pueda nuevamente volver a emitir la resolución declarada nula, subsanando sus vicios.

(i) **Certeza de consecuencias jurídicas respecto de la realización de un acto.**

Conforme a la interpretación que efectúa la Sala responsable del tipo de nulidad aplicable, un gobernado nunca podrá tener certeza sobre cual ilegalidad – si es de forma o de fondo – detona una nulidad absoluta, es decir lisa y llana, pues cualquier ilegalidad que se cometa en una resolución que derive de un procedimiento de fiscalización siempre será sancionada con nulidad para efectos.

En párrafos anteriores, mencionamos que el derecho fundamental a la seguridad jurídica consiste primordialmente en que los gobernados sepan "a qué atenerse" respecto de las consecuencias de los actos que realizan.

Esto es, que si una persona realiza determinada acción, sepa las consecuencias jurídicas de dicho acto frente a la autoridad, o si se advierte determinada ilegalidad, sepa el tipo de nulidad que detona.

Situación anterior, que es imposible cuando se afirma que los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo prevén que por toda ilegalidad que derive de una resolución dictada en un procedimiento oficioso iniciado con motivo del ejercicio de facultades discrecionales de la autoridad – como lo es el ejercicio de facultades de comprobación en materia fiscal -, deberá declararse la nulidad para efectos de dicha resolución; ya que entonces nunca se tendrá certeza del tipo de ilegalidad que provoca la nulidad absoluta – lisa y llana - de un crédito fiscal.

Como es del conocimiento de ese H. Tribunal Colegiado, todo crédito fiscal deriva del ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal, tal y como lo prevé el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, mismo que se transcribe a continuación:

"Artículo 42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y aduaneras y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales, estarán facultadas para:

I. Rectificar los errores aritméticos, omisiones u otros que aparezcan en las declaraciones, solicitudes o avisos, para lo cual las autoridades fiscales podrán requerir al contribuyente la presentación de la documentación que proceda, para la rectificación del error u omisión de que se trate.

II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzón tributario, dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad, así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.

III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y mercancías.

IV. Revisar los dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y sobre las operaciones de enajenación de acciones que realicen, así como cualquier otro dictamen que tenga repercusión para efectos fiscales formulado por contador público y su relación con el cumplimiento de disposiciones fiscales.

V. Practicar visitas domiciliarias a los contribuyentes, a fin de verificar que cumplan con las siguientes obligaciones:

a) Las relativas a la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet y de presentación de solicitudes o avisos en materia del registro federal de contribuyentes;

b) Las relativas a la operación de las máquinas, sistemas y registros electrónicos, que estén obligados a llevar conforme lo establecen las disposiciones fiscales;

c) La consistente en que los envases o recipientes que contengan bebidas alcohólicas cuenten con el marbete o precinto correspondiente o, en su caso, que los envases que contenían dichas bebidas hayan sido destruidos;

d) La relativa a que las cajetillas de cigarros para su venta en México contengan impreso el código de seguridad o, en su caso, que éste sea auténtico;

e) La de contar con la documentación o comprobantes que acrediten la legal propiedad, posesión, estancia, tenencia o importación de las mercancías de procedencia extranjera, debiéndola exhibir a la autoridad durante la visita;

f) Las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, padrones, registros o patentes establecidos en la Ley Aduanera, su Reglamento y las Reglas Generales de Comercio Exterior que emita el Servicio de Administración Tributaria.

La visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera de las obligaciones referidas en los incisos anteriores, deberá realizarse conforme al procedimiento previsto en el artículo 49 de este Código y demás formalidades que resulten aplicables, en términos de la Ley Aduanera.

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA FISCAL
CIRCULAR

Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes la información necesaria para su inscripción y actualización de sus datos en el citado registro e inscribir a quienes de conformidad con las disposiciones fiscales deban estarlo y no cumplan con este requisito.

VI. Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda clase de bienes, incluso durante su transporte.

VII. Recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios, los informes y datos que posean con motivo de sus funciones.

VIII. Derogada.

IX. Practicar revisiones electrónicas a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, basándose en el análisis de la información y documentación que obre en poder de la autoridad, sobre uno o más rubros o conceptos específicos de una o varias contribuciones.

Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta, indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

En el caso de que la autoridad fiscal esté ejerciendo las facultades de comprobación previstas en las fracciones II, III, IV y IX de este artículo y en el ejercicio revisado se disminuyan pérdidas fiscales o se compensen saldos a favor, se podrá requerir al contribuyente dentro del mismo acto de comprobación la documentación comprobatoria con la que acredite de manera fehaciente el origen y procedencia ya sea de la pérdida fiscal o del saldo a favor, independientemente del ejercicio en que se haya originado la misma, sin que dicho requerimiento se considere como un nuevo acto de comprobación.

La revisión que de las pérdidas fiscales efectúen las autoridades fiscales sólo tendrá efectos para la determinación del resultado del ejercicio sujeto a revisión.

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo alguna de las facultades previstas en las fracciones II, III y IX de este artículo y detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, deberán informar por medio de buzón tributario al contribuyente, a su representante legal, y en el caso de las personas morales a sus órganos de dirección por conducto de aquel, en un plazo de al menos 10 días hábiles previos al del levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate, para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado.

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, la autoridad emitirá la última acta parcial, el oficio de observaciones o la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónicas, señalando



CIMOTAVO TRI
EN MATERIA AL
DEL PRIME

en estas actuaciones la asistencia o inasistencia de los interesados para ejercer su derecho a conocer el estado del procedimiento a que está siendo sujeto; previamente a ello, deberá levantarse un acta circunstanciada en la que se haga constar esta situación. En toda comunicación que se efectúe en términos del párrafo anterior, deberá indicárseles que pueden solicitar a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ser asistidos de manera presencial cuando acudan a las oficinas de las autoridades fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria establecerá mediante reglas de carácter general, el procedimiento para informar al contribuyente el momento oportuno para acudir a sus oficinas y la forma en que éste puede ejercer su derecho a ser informado."

(énfasis añadido)

De lo anterior, se prevé que la autoridad fiscal a fin de comprobar que los contribuyentes han cumplido las disposiciones fiscales, y en su caso determinar créditos fiscales, estarán facultadas para ejercer diversos procedimientos de comprobación, los cuales deben ejercer para determinar créditos fiscales.

Ahora bien, el hecho de que se tenga que declarar la nulidad para efectos, sin importar el tipo de legalidad - forma o fondo -, de una resolución por el simple hecho de derivar de un procedimiento de fiscalización, escapa de toda proporción en relación al derecho fundamental a la seguridad jurídica.

Lo anterior, pues entonces los contribuyentes no tendrán la certeza de que tipo de ilegalidades detonan la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, prevista en la fracción II, del artículo 52 de Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Además, en el caso que nos ocupa, se llegaría al extremo de que sin importar el tipo de ilegalidad, sea la propia autoridad la que elija en su caso el tipo de nulidad que le puede declarar la autoridad jurisdiccional, pues sólo tendría que iniciar cualquier procedimiento de fiscalización previsto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Ello no puede ser más violatorio del derecho fundamental y garantía de seguridad jurídica, pues los contribuyentes nunca tendrán certeza respecto de que tipo de ilegalidades cometidas por la autoridad pueden dar lugar a una nulidad lisa y llana.

Por lo anterior, es que ese H. Tribunal Colegiado deberá conceder a mi mandante el amparo y protección de la Justicia Federal respecto de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, pues de prevalecer la interpretación de la Sala responsable, es inconcuso que dichos dispositivos legales violentan el derecho fundamental y garantía de seguridad jurídica.

(ii) Interdicción de la arbitrariedad y prohibición del exceso

Asimismo, la interpretación que efectúa la Sala responsable de los artículos 51, 52 y 57 de la LFPCA, implica que las autoridades fiscales no tengan un límite para cometer ilegalidades en sus resoluciones, lo cual claramente va en contra del derecho fundamental y garantía de seguridad jurídica, en relación al principio de interdicción de la arbitrariedad y prohibición del exceso.

Ello, pues dichos artículos dejan abierta la posibilidad para que las autoridades fiscales elijan el tipo de nulidad que les conviene, que por obviedad siempre será para efectos, pues tendrán la posibilidad de corregir hasta vicios de fondo y lo único que tienen que hacer es determinar una resolución ejerciendo sus facultades de comprobación.

Esto es, que las autoridades fiscales pueden válidamente perpetrar cualquier tipo de ilegalidades, pues solo basta que ejerzan facultades de comprobación, y tendrán en caso de que se declare la nulidad de la resolución impugnada, una nueva oportunidad para subsanar dichas ilegalidades.

En este sentido, es que conforme a la interpretación que efectúa la Sala a lo dispuesto por los artículos 51, 51 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, éstos resultan inconstitucionales al violentar el derecho fundamental y garantía a la seguridad jurídica, conforme al cual nadie puede ser molestado en su domicilio, posesiones o familia sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento.

Lo anterior, pues ni siquiera tendría lógica ya distinguir qué tipo de nulidad detonan las ilegalidades de un acto administrativo en materia fiscal, pues es todos por el simple hecho de derivan de un procedimiento de fiscalización, entonces detonan la nulidad para efectos. ¿Qué razón de ser tendría ya la fracción II, del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo?

Al respecto, ¿qué seguridad jurídica podría proporcionar un precepto que permite a las propias autoridades fiscales, determinar el tipo de nulidad que le va ser declarada, sin importar las ilegalidades que cometan?

Máxime que dicha facultad arbitraria podría implicar una nueva oportunidad para las autoridades de corregir vicios de fondo en sus determinaciones, vicios que tienen que ver con una indebida fundamentación y motivación, y que fueron determinados así al ejercerse sus facultades de comprobación.

Lo anterior, en total contravención al derecho fundamental y garantía de seguridad jurídica, en relación con el principio de interdicción de la arbitrariedad consagrado en el artículo 16 constitucional, tal como ha sido reconocido en repetidas ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver sobre

la constitucionalidad de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales en cuanto a que estas deben de tener límites fijados.³

En este sentido, es clara la inconstitucionalidad de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo conforme a la interpretación que efectúa la Sala responsable, pues ya cualquier tipo de ilegalidad, va detonar en el peor de los casos, una nulidad que solo es para efectos, y que va

³ "VISITAS DOMICILIARIAS O REVISIÓN DE LA CONTABILIDAD. EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN (VIGENTE EN 1998), ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL, EN CUANTO NO SEÑALA UN LÍMITE A LA DURACIÓN DE TALES ACTOS DE FISCALIZACIÓN QUE SE PRACTICAN A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES. Si bien es cierto que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus párrafos primero, octavo y undécimo, establece como un derecho subjetivo público de los gobernados el que no puedan ser molestados en su persona, papeles o domicilio y la inviolabilidad de éste; también lo es que el propio precepto permite a las autoridades practicar tales actos de molestia, a fin de que cumplan con el propósito que dio origen a dichos actos, cubriendo desde luego los requisitos que debe contener todo acto de molestia o la orden de visita; Por consiguiente, debe entenderse que esos actos están delimitados temporalmente, esto es, que deben estar acotados por un tiempo prudente para lograr el objetivo que con ellos se pretende, pues de no ser así se volverían en una molestia constante o en una permanente intromisión al domicilio, lo que es contrario a la protección que otorga el citado precepto constitucional. En congruencia con lo anterior, es de estimarse que el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación, vigente en mil novecientos noventa y ocho, sólo en lo que establece la segunda parte de su primer párrafo, es violatorio de la garantía constitucional de referencia, en razón de que prevé una regla general de duración máxima de las visitas domiciliarias o de la revisión de la contabilidad, a la que deben ajustarse las autoridades fiscales, pero excluye de la aplicación de la misma a ciertos grupos de contribuyentes, respecto de los cuales no señala un plazo máximo de duración para los actos de fiscalización que se les practiquen, de modo que queda al arbitrio de las mencionadas autoridades la duración del acto de molestia, pudiendo, incluso, volverse indefinido o extender la conclusión de la visita, lo que es contrario a la citada garantía de seguridad jurídica "

"PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN. EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 50 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA 2003, AL NO SEÑALAR UN LÍMITE PARA LA DURACIÓN DEL QUE SE PRACTIQUE A DETERMINADOS GRUPOS DE CONTRIBUYENTES, VIOLA EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El procedimiento de fiscalización consta de dos etapas: la primera consiste en la verificación de documentación y concluye con el acta final o emisión de oficio de observaciones; y en la segunda, en caso de encontrar alguna irregularidad derivada de la revisión, la autoridad fiscal competente emite la resolución correspondiente en la cual determina y liquida un crédito fiscal a cargo del contribuyente. Ahora bien, dichas etapas deben acotarse a un tiempo prudente para lograr el objetivo pretendido con ellas, pues de no ser así las facultades de verificación y determinación de las autoridades hacendarias se tornarían arbitrarias, en contravención a la garantía de seguridad jurídica contenida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, el segundo párrafo del artículo 50 del Código Fiscal de la Federación, vigente hasta 2003, viola dicha garantía constitucional, pues aunque su primer párrafo establece un plazo máximo para la emisión del acto de determinación con el cual concluye el procedimiento de fiscalización, excluye de tal limitante a los contribuyentes señalados en el primer párrafo del artículo 46-A del mencionado Código: 1) sujetos que integran el sistema financiero; 2) sujetos respecto de los cuales la autoridad fiscal o aduanera solicite información a autoridades fiscales o aduaneras de otro país o esté ejerciendo sus facultades para verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 58, fracción XIV, 64-A y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta; 3) sujetos respecto de los cuales la autoridad aduanera esté llevando a cabo la verificación de origen a exportadores o productores de otros países, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por México, por el o los ejercicios sujetos a revisión; y, 4) sujetos que en los ejercicios revisados consoliden para efectos fiscales conforme al Título II, Capítulo IV de la citada Ley. De ahí que en tales casos la autoridad fiscal competente podría dictar una resolución en la que determine un crédito fiscal a cargo de dichos sujetos, sin limitación temporal para su emisión."

a permitir a las autoridades fiscales reponer todo el procedimiento de fiscalización a las autoridades o en su caso, volver a emitir la resolución subsanando ya vicios de fondo.

En este sentido, al haberse demostrado la inconstitucionalidad de los artículos 51, 52 y 57 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo conforme a la interpretación que efectúa la Sala responsable, ese H. Tribunal Colegiado deberá conceder a mi mandante el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado.

CUARTO. VIOLACIÓN DE LA SENTENCIA RECLAMADA A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, EN AQUELLA PARTE EN LA QUE LA SALA RESPONSABLE VIOLENTA LA FIGURA PROCESAL DE COSA JUZGADA.

Finalmente, la sentencia que por esta vía se reclama deviene ~~ilegal~~ en aquella parte en la que la Sala responsable declaró la nulidad de la resolución impugnada para el efecto de que la autoridad demandada emita una nueva resolución en la que determine la situación fiscal de la contribuyente hoy parte quejosa, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Ello, sin advertir que en el presente asunto existe ya cosa juzgada, en cuanto a que la nulidad declarada de dicha resolución es lisa y llana, tal y como se desprende de la sentencia de fecha 19 de febrero de 2016, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, al resolver el juicio de amparo D.A. 885/2014.

En efecto, la Sala A *quo* declaró la nulidad para efecto de la resolución impugnada, sin advertir que en la especie se actualiza la figura procesal de cosa juzgada, en cuanto a la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen.

Ello, en virtud de que hay identidad de cosas, ya que en ambos juicios, tanto en el D.A. 885/2014, como en el juicio fiscal 12852/13-17-05-2/905/14-S1-04-04, se determinó que resulta ilegal por cuestiones de fondo, el crédito fiscal contenido en el oficio 900 06 02-2013-1012 de fecha 12 de marzo de 2013, en cantidad de \$2,973'1783,576.85 por concepto de impuesto sobre la renta, actualización, recargos y multas, correspondientes al ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2007.

En efecto, en relación con lo anterior, resulta necesario determinar cada uno de los elementos que deben actualizarse para efecto de que exista cosa juzgada, y que en la especie son:

En cuanto a los sujetos, debe de subsistir la identidad de los sujetos, es decir, deben ser los mismos en ambos procedimientos. Así en la especie en ambos juicios el promovente fue GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.

Por lo que hace al objeto, es necesario que ambos procedimientos tengan el mismo objeto procesal es decir; dilucidar si el costo promedio por acción determinado por mi mandante con motivo de la enajenación de las acciones de la sociedad Dilocom, S.A. de C.V., podía ser adicionado o no, con las pérdidas amortizadas por Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V. (originalmente Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V.).

Por último, por lo que se refiere a la causa: es necesario que exista la misma pretensión en ambos procedimientos; que en la especie es declarar el derecho subjetivo que tiene mi representada a calcular el costo promedio por acción con motivo de la enajenación de las acciones de la sociedad Dilocom, S.A. de C.V., adicionando las pérdidas amortizadas por Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V. (originalmente Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V.).

A. Cosa juzgada

Con la finalidad de evidenciar lo anterior, en primer lugar, resulta necesario precisar qué debe entenderse por el concepto de cosa juzgada, mismo que se encuentra previsto en los artículos 354, 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y el Código Fiscal de la Federación, mismos que a la letra disponen lo siguiente:

"Artículo 354. La cosa juzgada es la verdad legal, y contra ella no se admite recurso ni prueba de ninguna clase salvo los casos expresamente determinados por la ley "

"Artículo 355 Hay cosa juzgada cuando la sentencia ha causado ejecutoria

"Artículo 356 Causan ejecutoria las siguientes sentencias:

I. Las que no admitan ningún recurso;

II. Las que, admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o haya desistido el recurrente de él, y

III. Las consentidas expresamente por las partes, sus representantes Legítimos o sus mandatarios con poder bastante."

De los preceptos transcritos se desprende que la cosa juzgada consiste en la verdad legal, en contra de la cual no se admite recurso ni prueba de ninguna clase, salvo los casos expresamente determinados por la ley.

Asimismo, se desprende que la cosa juzgada se actualiza cuando una sentencia ha causado ejecutoria, en cuyo caso se considera que la misma causa ejecutoria cuando se trate de una sentencia que i) no admita ningún recurso, ii) que admitiendo algún recurso, no fueren recurridas, o, habiéndolo sido, se haya declarado desierto el interpuesto, o el recurrente se haya desistido de él, y iii) aquellas consentidas expresamente por las partes, sus representantes o sus mandatarios con poder bastante.

En relación con lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nuestros Tribunales Colegiados de Circuito se han pronunciado en relación con la figura de la cosa juzgada, a través de diversos criterios jurisprudenciales, mismos que señalan textualmente lo siguiente:

DECIMIOCTAVO TI
EN MATERIA
DEL PRIM

"COSA JUZGADA, EXISTENCIA DE LA.- Para que exista cosa juzgada es necesario que se haya hecho anteriormente un pronunciamiento de derecho entre las mismas partes, sobre las mismas acciones, la misma cosa y la misma causa de pedir, por tanto, debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer."

Sexta Época, Quinta Parte

Volumen X, página 61. Amparo directo 7757/57. José Gómez Gómez. 18 de abril de 1958. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Ángel González de la Vega

Volumen XXVIII, página 28. Amparo directo 1747/59. Alfredo Sánchez Barrera y coagraviados. 21 de octubre de 1959. Cinco votos. Ponente: Gilberto Valenzuela

Volumen XLII, página 13. Amparo directo. 4031/60. Sindicato Nacional de Trabajadores Terraceros Constructores y Conexos de la República Mexicana y coagraviados. 8 de diciembre de 1960. Cinco votos. Ponente: Arturo Martínez Adame.

Séptima Época, Quinta Parte:

Volumen 5, página 13. Amparo directo 3069/68. María Moreno Barbosa. 14 de mayo de 1969. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

Volumen 71, página 15. Amparo directo 2994/74. Hipólito Guzmán García. 11 de noviembre de 1974. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

"COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EXISTENCIA.-

Para que proceda la excepción de cosa juzgada en otro juicio es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta se invoque concurren identidad en la cosa demandada (eadem res), en la causa (eadem causa pretendi), y en las personas y la calidad con que intervinieron (eadem conditio personarum). Ahora bien, si la identidad en la causa se entiende como el hecho generador que las partes hacen valer como fundamento de las pretensiones que reclaman, es requisito indispensable para que exista cosa juzgada se atienda no únicamente a la causa próxima (consecuencia directa e inmediata de la realización del acto jurídico) sino además a la causa remota (causal supeditada a acontecimientos supervenientes para su consumación) pues sólo si existe esa identidad podría afirmarse que las cuestiones propuestas en el segundo procedimiento ya fueron materia de análisis en el primero, y que por ello deba declararse procedente la excepción con la finalidad de no dar pauta a posibles sentencias contradictorias. Lo anterior, en el entendido de que cuando existan varias acciones contra una misma persona respecto de una misma cosa, deben intentarse en una sola demanda todas las que no sean contrarias, ya que el ejercicio de una extingue las otras, salvo que fuera un hecho superveniente debidamente acreditado. Por tanto, es claro que esto último no se daría si la causa remota que se involucra en uno y otro son distintas, con mayor razón si la causa próxima también es otra."

Contradicción de tesis 39/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Décimo Noveno Circuito, el anterior Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del mismo circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 3 de octubre de 2007. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Juan Carlos de la Barrera Vite.

Tesis de jurisprudencia 161/2007. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha catorce de noviembre de dos mil siete

COSA JUZGADA. REQUISITOS PARA QUE SE CONFIGURE. De los criterios sostenidos por la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto del concepto de cosa juzgada, se pueden establecer los supuestos que deben verificarse a fin de determinar su existencia en un juicio, los que son: a) Identidad de las personas que intervinieron en los dos juicios; b) Identidad en las cosas que se demandan en los juicios; y, c) Identidad de las causas en que se fundan las dos demandas; sin embargo, se advierte un cuarto elemento de convicción que requiere verificar el juzgador a fin de actualizar la institución de la cosa juzgada y que se refiere a que en la primera sentencia se haya procedido al análisis del fondo de las pretensiones propuestas. Este último requisito cobra relevancia, pues debe considerarse que para que la excepción de cosa juzgada surta efectos, es necesario que entre el caso resuelto por la sentencia que ha causado ejecutoria y aquel asunto en el que dicha excepción sea invocada, concurre identidad

en las cosas, en las causas, en las personas de los litigantes, en la calidad con la que intervinieron y, por supuesto, que en el primer juicio se hubiere analizado en su totalidad el fondo de las prestaciones reclamadas, en razón a que de no concurrir este último no podría considerarse que se está ante la figura de la cosa juzgada, pues lo contrario, llevaría al absurdo de propiciar una denegación de justicia al gobernado, al no darle la oportunidad de que lo demandado sea resuelto en alguna instancia

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 9106/2003. Moisés Arturo Hernández Moya 9 de octubre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Miguel Ángel Burguete García

Amparo directo 11566/2003. Ramón Reyes Huerta. 19 de noviembre de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos.

Amparo directo 436/2006. Saúl Galicia Juárez. 9 de febrero de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Claudia Gabriela Soto Calleja

Amparo directo 618/2012. Rafael Salas Pantoja. 12 de julio de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez. Secretario: Ramón Eusebio García Rodríguez.

Amparo directo 79/2017. 30 de marzo de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretario: Miguel Barrios Flores.

Esta tesis se publicó el viernes 23 de junio de 2017 a las 10:29 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 26 de junio de 2017, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

Época: Décima Época, Registro: 2014594, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, Materia(s): Común, Tesis: I.6o.T. J/40 (10a.), Página: 2471

(Énfasis añadido)*

De los criterios transcritos es posible advertir que para que se actualice la figura de cosa juzgada, resulta indispensable que exista un pronunciamiento anterior de derecho entre i) las mismas partes, ii) sobre las mismas acciones, iii) la misma cosa y iv) la misma causa de pedir.

Lo anterior, implica que necesariamente debe existir identidad de partes, identidad de cosa u objeto materia de los juicios de que se trate, e identidad en la causa de pedir o hecho jurídico generador del derecho que se haga valer, de lo contrario no se configura la cosa juzgada.



En relación con lo anterior, resulta necesario definir cada uno de los elementos que deben actualizarse para efecto de que exista cosa juzgada.

En cuanto a los sujetos, debe de subsistir la identidad de los sujetos, es decir, deben ser los mismos en ambos procedimientos.

Por lo que hace al objeto, es necesario que ambos procedimientos tengan el mismo objeto procesal.

Por último, por lo que se refiere a la causa: es necesario que exista la misma pretensión en ambos procedimientos.

B. Una vez precisado lo anterior, a continuación se demostrará que en el caso que nos ocupa se actualiza la figura de la cosa juzgada, motivo por el cual la sentencia reclamada deviene ilegal.

TRIBUNAL COLEGIADO DE ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO
Para efectos de lo anterior, es necesario analizar los siguientes antecedentes:

1. Mi mandante promovió una demanda de nulidad en contra de la resolución contenida en el oficio 900 06 02-2013-1012, emitida por el Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, mediante la cual se determinó un crédito fiscal por concepto de impuesto sobre la renta, actualizaciones, recargos y multas, correspondiente al ejercicio fiscal de 2007.

2. El juicio de nulidad se resolvió por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la que, con fecha 11 de septiembre de 2014, dictó sentencia en la que reconoció la validez de la resolución impugnada.

3. En contra de la anterior determinación, mi representada promovió juicio de amparo directo, radicado en el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y registrado con el número de expediente 885/2014.

4. El 19 de febrero de 2016, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, concedió el amparo a la quejosa, para los efectos siguientes:

"DECIMOQUINTO. Efectos de la sentencia de amparo. En mérito de lo expuesto, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para efectos de que los Magistrados que integran la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa:

a) dejen insubsistente la sentencia reclamada.

b) emitan una nueva resolución en la que consideren que resulta aplicable a la quejosa el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil tres;

c) prescindan de cualquier razonamiento que parta de la base de que era aplicable a la impetrante, el procedimiento para determinar la ganancia por enajenación de acciones con tenencia accionaria igual o menor a doce meses, especialmente, las consideraciones contenidas en el punto B del considerando quinto del acto reclamado, ubicados en las páginas setecientos noventa y ocho a ochocientos, relativos a que la actora estaba imposibilitada para adicionar la amortización de pérdidas fiscales, al no cumplir con el supuesto de tenencia accionaria de doce meses y, por ende, serie aplicable la segunda mecánica prevista en el artículo 24 de la legislación antes citada;

d) atendiendo a los razonamientos plasmados en el considerando decimotercero de este fallo, dejen sin efectos los argumentos que esgrimieron en las páginas trescientas ochenta y seis a trescientas noventa y cuatro, y declaren que la autoridad hacendaria no debió determinar el ingreso obtenido por acción, con base en las reglas establecidas en los artículos 54, fracción II, y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta dos mil siete;

e) declaren fundado el concepto de anulación a través del cual la quejosa sostuvo que no resultaba aplicable al caso la facultad prevista en el artículo 42, fracción II, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, esto es, que la autoridad fiscal no se encontraba facultada para determinar a la quejosa un crédito fiscal, a partir de desconocer los resultados fiscales firmes declarados por contribuyentes diversos, respecto de los cuales no se ejerció facultad de comprobación alguna, por lo que la sociedad enajenante debió forzosamente basarse en los resultados declarados por las emisoras de las acciones, y, por ende, prescindan de las consideraciones mediante las cuales avaló la legalidad de la resolución determinante del crédito fiscal, ubicadas en los puntos A y una porción del E, del considerando quinto de la sentencia reclamada, concretamente, las que validaron el actuar de la autoridad hacendaria al desconocer declaraciones fiscales de terceros, y a cuestionar la legalidad de las operaciones de éstos, en perjuicio de la ahora quejosa; pues ésta únicamente debió considerar los resultados declarados por la sociedad emisora, respecto de la cual enajenó sus acciones, en términos del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil siete

f) partan de la base de que el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil tres, establece una regla específica para determinar el costo comprobado de adquisición de las acciones de las sociedades, tratándose de fusiones o escisiones, y declaren fundado el concepto de anulación en el que dichas operaciones sean gravadas o exentas, ello no impacta en el costo fiscal de las acciones, y

DECIMOTERCERO
EN MATERIA / D
DEL PRIMER

g) hecho lo anterior, resuelvan conforme a derecho corresponde.

(Énfasis añadido)"

5. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el 27 de octubre de 2016, la Sala responsable emitió una nueva resolución, en la que declaró la nulidad lisa y llana del acto impugnado.

De dicha resolución se estima pertinente destacar las siguientes consideraciones:

"B.- Ahora, la parte actora argumenta que le es aplicable lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para determinar el costo promedio por acción, cuyo precepto le permite realizar dicho cálculo con la información contenida en la constancia que emita la emisora.

En este punto, se estima pertinente tener presente lo señalado por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en la ejecutoria que nos ocupa; por lo que, esta Juzgadora procede a transcribir lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el año del ejercicio fiscal revisado (2007), precepto que señala lo siguiente:

(...)

De la transcripción anterior, el Tribunal Colegiado, señaló que dicho precepto legal contempla tres supuestos normativos para determinar el costo promedio por acción, como concepto de deducción frente a los ingresos obtenidos por la enajenación de acciones, a saber:

- a) el primero, para acciones enajenadas cuya tenencia haya sido superior a doce meses;
- b) el segundo para acciones cuya tenencia haya sido de doce meses o inferior; y
- c) el tercero, para enajenación de acciones emitidas por personas morales residentes en el extranjero, no siendo relevante este último supuesto para el presente asunto, en virtud que la parte actora no se ubica en dicha hipótesis, ni es motivo de reclamo.

Asimismo, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región señaló que en cualquiera de estos supuestos, el costo promedio por acción se determinará dividiendo el monto original ajustado de las acciones, entre el número total de acciones que tenga el contribuyente a la fecha de enajenación, incluidas todas las que se tenga de la misma persona moral a la fecha de enajenación, aun cuando no enajene todas ellas y que para cada uno de los casos, la diferencia estriba en los elementos que se consideran al calcular el monto original ajustado.

(...)

317,

Por lo que, es de concluirse que en estricto cumplimiento a la ejecutoria de fecha 19 de febrero de 2016, que nos ocupa, la actora, en su carácter de tenedora del (...) de las acciones emitidas por la sociedad escindida (...), le correspondía aplicar el procedimiento para el costo comprobado de adquisición con tenencia accionaria mayor a 12 meses, en consecuencia, debía adicionar las pérdidas fiscales pendientes de amortizar de la sociedad emisora de las acciones, y disminuir pérdidas fiscales pendientes de ejercicios fiscales pasados.

Por tanto, no le era aplicable el procedimiento para determinar la ganancia por enajenación de acciones con tenencia accionaria igual o menor a doce meses, entonces le correspondía las pérdidas fiscales pendientes de disminuir a la fecha de enajenación, adicionar las pérdidas amortizadas antes de la adquisición, al no considerarse estos conceptos en tal procedimiento para obtener el monto original ajustado a las acciones y llevar cabo de esa forma el cálculo del costo promedio por acción. Bajo, ese orden de ideas, resultan fundados los argumentos de la parte actora, toda vez que, tal y como lo señaló el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en la resolución impugnada, el Administrador Central de Fiscalización al Sector Financiero, al determinar el costo promedio por acción de la persona moral denominada Dilocom, Sociedad Anónima de Capital Variable, no empleó la mecánica relativa a cuando el periodo de tenencia accionaria sea superior a doce meses, dado que no aplicó el procedimiento a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artículo 24 de la mencionada ley, por lo que a contrario sentido, debe entenderse que empleó la diversa mecánica prevista en el mencionado dispositivo, que ha sido precisada anteriormente.

De ahí que la actora no estaba imposibilitada para adicionar la amortización de las pérdidas, y por tanto disminuir las pérdidas pendientes conforme al primer supuesto del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Es decir, la parte actora, tenía la posibilidad de disminuir las pérdidas fiscales pendientes de disminuir actualizadas, tal y como lo establece el primer supuesto contemplado en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, para determinar el costo promedio por acción.

(...)

Lo anterior, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de fecha 19 de febrero de 2016, mediante la cual el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, señaló que esta Juzgadora, debía partir de la base de que era aplicable la impetrante, el procedimiento para determinar la ganancia por enajenación de acciones con tenencia accionaria superior a doce meses, y por tanto la actora no estaba imposibilitada para adicionar la amortización de pérdidas fiscales; es decir, bajo el primer supuesto de tenencia accionaria de doce meses y, por ende, sería aplicable la segunda mecánica prevista en el artículo 24 de la legislación antes citada.

(...)

UNIDO
CINCOCTAVO TRIBI
EN MATERIA ADI
DEL PRIMER

En virtud de lo anterior, y ante la indebida fundamentación y motivación, tal y como lo determinó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, resulta ilegal la resolución impugnada en contravención al artículo 38, fracción IV del Código Fiscal de la Federación y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que en términos de los artículos 51, fracción IV y 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se declara la nulidad lisa y llana.

(...)

6. Mediante acuerdo de fecha 17 de abril de 2017, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa tuvo por cumplida la sentencia de amparo.

7. En contra de dicha determinación, la tercero interesada – autoridad demandada en el juicio de origen–, interpuso recurso de inconformidad, mismo que fue radicado en la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y registrado con el número de expediente 833/2017.

En sesión de fecha 13 de septiembre de 2017, la Segunda Sala de la Suprema Corte declaró infundado el recurso de inconformidad, al tenor de las siguientes consideraciones:

"CUARTO. Estudio. A fin de resolver el recurso de inconformidad, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera conveniente precisar que con fundamento en los artículos 196, párrafo tercero, 213 y 214, de la Ley de Amparo, la materia de esta resolución consiste en examinar si la ejecutoria se ha cumplido en su totalidad, sin excesos, ni defectos, supliendo, en su caso, la deficiencia de la vía y de los argumentos de la parte recurrente, de modo tal que se concluya si existe o no materia para la ejecución, sin que pueda archivarse ningún juicio de amparo en el que no se haya cumplido la sentencia o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional.

(...)

Ahora, de las constancias exhibidas por la Sala responsable, se advierte que por auto de quince de marzo de dos mil dieciséis, dejó insubsistente la sentencia reclamada de once de septiembre de dos mil catorce, aclarada mediante resolución de ocho de diciembre del citado año. Posteriormente, se dejó sin efectos la subsecuente sentencia de treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis y su aclaración; además, el veintisiete de octubre de dos mil dieciséis, se dictó una nueva, con lo cual se tiene por satisfechos los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, identificados con los numerales 1 y 2

(...)

Por otra parte, con el propósito de cumplimentar los deberes impuestos en el fallo protector, identificados como punto 2, incisos

a) y b), la Primera Sección de la Sala responsable al dictar la nueva sentencia, efectuó lo que sigue:

(...)

Como se observa, la responsable consideró que resultaba aplicable a la quejosa el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil tres.

Además, tomando en cuenta los lineamientos de la ejecutoria de amparo, la responsable prescindió de cualquier razonamiento que partiera de la base de que era aplicable a la quejosa el procedimiento para determinar la ganancia por enajenación de acciones con tenencia accionaria igual o menor a doce meses, especialmente, las consideraciones contenidas en el punto B del considerando quinto del acto reclamado, ubicados en las páginas setecientos noventa y ocho a ochocientos, relativos a que la actora estaba imposibilitada para adicionar la amortización de pérdidas fiscales, al no cumplir con el supuesto de tenencia accionaria de doce meses; consecuentemente, determinó que le era aplicable la segunda mecánica prevista en el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, antes citada

De ahí que, con tales consideraciones, se tengan por satisfechos los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo, identificados con el punto 2, incisos a) y b).

Por lo que respecta al lineamiento especificado como punto 2, inciso c, la responsable resolvió lo siguiente:

(...)

De lo anterior, se advierte que la responsable, tomando en cuenta los razonamientos plasmados en el considerando decimotercero del fallo constitucional, dejó sin efectos los argumentos que se esgrimieron en las páginas trescientas ochenta y seis a trescientas noventa y cuatro, y declaró que la autoridad hacendaria no debió determinar el ingreso obtenido por acción, con base en las reglas establecidas en los artículos 54, fracción II, y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta dos mil siete, por lo que, se tiene por satisfecho el deber impuesto en la ejecutoria de amparo, identificado con el punto 2, inciso c).

En relación con el deber especificado como punto 2, inciso d), la responsable resolvió lo siguiente:

(...)

De lo anterior, se advierte que la responsable, declaró fundado el concepto de anulación a través del cual la quejosa adujo que no resultaba aplicable al caso la facultad prevista en el artículo 42, fracción II, penúltimo párrafo, del Código Fiscal de la Federación, esto es, que la autoridad fiscal no se encontraba facultada para



DECIMOTAVO
EN MATERIA
DEL PR

determinar a la quejosa un crédito fiscal, a partir de desconocer los resultados fiscales firmes declarados por contribuyentes diversos, respecto de los cuales no se ejerció facultad de comprobación alguna, por lo que, la sociedad enajenante debió forzosamente basarse en los resultados declarados por las emisoras de las acciones.

En consecuencia, prescindió de las consideraciones mediante las cuales avaló la legalidad de la resolución determinante del crédito fiscal, ubicadas en los puntos A y una porción del E, del considerando quinto de la sentencia reclamada, concretamente, las que validaron el actuar de la autoridad hacendaria al desconocer declaraciones fiscales de terceros, y a cuestionar la legalidad de las operaciones mediante las cuales avaló la legalidad de la resolución determinante del crédito fiscal, ubicadas en los puntos A y una porción del E, del considerando quinto de la sentencia reclamada, concretamente, las que validaron el actuar de la autoridad hacendaria al desconocer declaraciones fiscales de terceros, y a cuestionar la legalidad de las operaciones de éstos, en perjuicio de la quejosa; pues ésta únicamente debió considerar los resultados declarados por la sociedad emisora, respecto de la cual enajenó sus acciones, en términos del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil siete.

De ahí que con la actuación de la responsable, se tenga por satisfecho el deber impuesto en la ejecutoria de amparo, identificado con el punto 2, inciso d).

Por otra parte, en relación con el deber especificado como punto 2, inciso e), la responsable resolvió lo siguiente:

(...)

De lo anterior, se advierte que la responsable partió de la base de que el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente en dos mil tres, establece una regla específica para determinar el costo comprobado de adquisición de las acciones de las sociedades, tratándose de fusiones o escisiones, y declaró fundado el concepto de anulación en el que la quejosa argumentó que el hecho de que dichas operaciones sean gravadas o exentas, ello no impacta en el costo fiscal de las acciones.

De ahí que con esa actuación, se tenga por satisfecho el deber impuesto en la ejecutoria de amparo, identificado con el punto 2, inciso e).

Por otra parte, en relación con el deber especificado como punto 2, inciso f), la responsable resolvió lo siguiente:

(...)

De lo anterior, se advierte que la responsable, resolvió conforme a derecho, por lo que, con esa actuación, se tiene por satisfecho el deber impuesto en la ejecutoria de amparo en la ejecutoria de amparo, identificado con el punto 2, inciso f).



TRIBUNAL COLEGIAL
ADMINISTRATIVO
PRIMER CIRCUITO

En ese contexto, se colige que los deberes impuestos en la ejecutoria de amparo se encuentran satisfechos; por lo que se debe tener por cumplida, tal y como lo consideró el Tribunal Colegiado, de modo que hasta lo aquí analizado, no se advierte exceso o defecto en el cumplimiento a la sentencia de amparo.

(...)

A mayor abundamiento, se desestima lo aducido por la recurrente en el sentido de que la Sala responsable debió realizar las operaciones aritméticas relativas al mecanismo que era aplicable para obtener la ganancia por enajenación de acciones, ello, en razón de que esas cuestiones son ajenas a la materia de análisis en este recurso de inconformidad, siendo que constituyen aspectos que, en todo caso, corresponden determinar a la autoridad demandada en el contencioso administrativo al emitir el nuevo acto en el que se establezca la ganancia por enajenación de acciones, atendiendo al procedimiento identificado por el Tribunal Colegiado del conocimiento.

En las relatadas consideraciones, se arriba a la conclusión de que la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, dado que la Sala responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada y emitió una nueva conforme a los lineamientos precisados por el Tribunal Colegiado del conocimiento."

DEC. TRIB
EN MATERIA AD
DEL PRIMER

(Énfasis añadido)"

8. El 1° de diciembre de 2016, la autoridad demandada interpuso recurso de revisión fiscal, radicado en el Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, y registrado con el número de expediente 8/2017.

Entre los agravios que dicha autoridad hizo valer en dicho recurso, se encuentra el siguiente:

"2. La Sala responsable indebidamente declara la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, impidiendo que la autoridad hacendaria se pronuncie respecto de la aplicación del artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, como se ordenó en la ejecutoria de amparo; máxime que en la sentencia de nulidad tampoco se hace un pronunciamiento expreso al respecto, lo que revela que es a la autoridad fiscalizadora a quien corresponde aplicar dicho cálculo y verificar la correcta determinación de las pérdidas declaradas por la contribuyente actora."

9. El 15 de marzo de 2018, el Tribunal Colegiado resolvió la revisión fiscal de mérito en el sentido de declararla parcialmente fundada, conforme a lo siguiente:

"Es fundado el agravio esgrimido por las inconformes, únicamente en cuanto a que corresponde a la autoridad hacendaria aplicar el método previsto en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil tres.

En principio, debe aclararse que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de inconformidad 833/2017, determinó que la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo 885/2014 quedó cumplida con la emisión de la sentencia de nulidad ahora impugnada.

De tal manera que está fuera de discusión el tema relativo al cumplimiento de aquella resolución de amparo; por ende, resultan inoperantes los alegatos que al respecto se arguyen.

(...)

Con la salvedad precisada, la defensa propuesta por la parte recurrente es acertada, en la medida que conforme a los razonamientos a los que atiende la nulidad decretada por la Sala del conocimiento debió reconocerse la posibilidad de que la hacienda pública reasuma sus facultades fiscalizadoras y de determinación, esto es, que la anulación del acto de autoridad debió ser para efectos y no absoluta.

(...)*

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO
DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
PRIMER CIRCUITO

10. En sesión celebrada el 3 de mayo de 2018, los Magistrados integrantes de la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa resolvieron declarar la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la autoridad fiscal, de considerarlo procedente, emita una nueva resolución en la que determine la situación de la contribuyente hoy parte actora, aplicando el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de la tenencia mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente a partir del 1° de enero de 2003.

C. Ilegalidad de la sentencia reclamada, ya que existe cosa juzgada respecto a que en el presente caso, resulta procedente declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.

De los antecedentes antes descritos, es importante desprender que en el presente asunto se actualiza la figura de cosa juzgada respecto a la sentencia emitida el 27 de octubre de 2016, por la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por virtud del cual se declaró la nulidad lisa y llana del crédito fiscal impugnado contenida en el oficio 900 06 02-2013-1012, expedida el 12 de marzo de 2016, y la cual a su vez cumplimentó la sentencia de 19 de febrero de 2016, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en apoyo al Decimoctavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Cumplimiento anterior, que mediante acuerdo de fecha 17 de abril de 2017, el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa tuvo por efectuado.

Corroboró de igual manera lo anterior, lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de fecha 13 de septiembre de

2017, en el que resolvió el recurso de inconformidad presentado por la autoridad fiscal, en el sentido de declararlo infundado, ya que mediante sentencia de fecha 3 de 2016 – misma que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada –, se tenía por cumplida la del 19 de febrero de 2016.

Así es evidente que al existir identidad de sujetos, objetos y causa de pedir, respecto a la sentencia emitida el 27 de octubre de 2016, y respecto a la ahora sentencia reclamada de 3 de mayo de 2018, se actualiza la figura de la cosa juzgada respecto a la segunda; es decir, es cosa juzgada la nulidad lisa y llana del crédito fiscal impugnado contenida en el oficio 900 06 02-2013-1012, expedida el 12 de marzo de 2013.

Sin embargo, como ese H. Tribunal Colegiado podrá advertir, la Sala responsable, violentó la figura de la cosa juzgada de la sentencia de 27 de octubre de 2016, al haber declarado la nulidad para efectos de la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen.

Lo anterior, toda vez que la Sala Fiscal dejó de advertir que existieron diversos argumentos de fondo que fueron declarados fundados en la sentencia de 27 de octubre de 2016, dictada en cumplimiento a la sentencia de 19 de febrero de 2016, que llevaron a la propia Sala responsable a declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, y que incluso dicha sentencia sirvió para que tanto el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, como la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvieran por cumplida la sentencia de fecha 19 de febrero de 2016.

En relación con lo anterior, resulta necesario determinar cada uno de los elementos que deben actualizarse para efecto de que exista cosa juzgada, y que en la especie son:

En cuanto a los sujetos, debe subsistir la identidad de los sujetos, es decir, deben ser los mismos en ambos procedimientos. Así en la especie en ambos juicios el promovente fue GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.

Por lo que hace al objeto, es necesario que ambos procedimientos tengan el mismo objeto procesal es decir; dilucidar si el costo promedio por acción determinado por mi mandante con motivo de la enajenación de las acciones de la sociedad Dilocom, S.A. de C.V., podía ser adicionado o no, con las pérdidas amortizadas por Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V. (originalmente Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V.).

Por último, por lo que se refiere a la causa: es necesario que exista la misma pretensión en ambos procedimientos; que en la especie es declarar el derecho subjetivo que tiene mi representada a calcular el costo promedio por acción con motivo de la enajenación de las acciones de la sociedad Dilocom, S.A. de C.V., adicionando las pérdidas amortizadas por Soluciones Empresariales de Negocios,

S.A. de C.V. Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., y Bodega de Remates Elektra, S.A. de C.V. (originalmente Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V.).

Por lo que es del todo claro, que al declararse una nulidad para efectos en la sentencia reclamada, de la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen, violenta la figura de cosa juzgada, respecto a la sentencia de 27 de octubre de 2016, en la que se declaró la nulidad lisa y llana por las mismos motivos de ilegalidad a saber:

1. Que la autoridad demandada aplicó indebidamente el artículo 24 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pues resulta aplicable a la actora el mecanismo para obtener la ganancia por enajenación de acciones relativa al plazo de tenencia accionaria mayor a doce meses, regulado en las cuatro fracciones del artículo 24 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente a partir del 1° de enero de 2003, así la actora no está imposibilitada para adicionar la amortización de pérdidas fiscales para determinar el costo promedio por acción.



JUNTA COLEGIAL
ADMINISTRATIVA
CIRCUITO

2. Que le asiste la razón a la parte actora respecto a que la autoridad indebidamente modificó el costo promedio por acción determinado por la actora respecto de las acciones emitidas por Dilocom, S.A. de C.V., al excluir las pérdidas fiscales amortizadas entre los años de 2004 a 2007, por las sociedades denominadas Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V. y Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V., en contra de las utilidades fiscales que generaron durante dichos ejercicios.

3. Que la resolución impugnada es ilegal, toda vez que la autoridad hacendaria indebidamente determinó el ingreso obtenido por acción, con base en las reglas establecidas en los artículos 54, fracción II y 58 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente hasta 2007, ya que son normas reglamentarias del artículo 32, fracción XVII de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el cual fue declarado inconstitucional.

4. Que la autoridad fiscal indebidamente ejerce su facultad de comprobación prevista en el artículo 42, fracción II del Código Fiscal de la Federación, al determinar un crédito fiscal a cargo de la actora, en base a desconocer situaciones fiscales de terceros, respecto de los cuales no ejerció facultades de comprobación, como es el caso de que las empresas Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V., y Empresas Turísticas Integradas, S.A. de C.V., no adquirió el derecho de amortizar una parte de las pérdidas sufridas en su momento por la sociedad escidente Terra Networks México, S.A. de C.V.

5. Que la autoridad fiscal aplicó indebidamente el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el sentido de que consideró que las pérdidas sufridas por las empresas Proveedora de Contenidos CSP, S.A. de C.V., Soluciones Empresariales de Negocios, S.A. de C.V., Empresas Turísticas Integradas, S.A. de

59

3133

C.V., Terra Networks México, S.A. de C.V. y Desarrollo de Infraestructura, S.A. de C.V., no pueden ser transmitidas a empresas escindidas, pues sus actividades no se ubicaron en el supuesto para ser consideradas como actividades empresariales, considerándose enajenación para efectos fiscales; ello ya que el dispositivo legal aludido no hace consideración especial al hecho de que la fusión o escisión de las derivan las acciones, sea o no considerada como enajenación de acciones, para determinar el costo comprobado de adquisición de las acciones de las sociedades.

Por lo que es claro que la sentencia reclamada de fecha 3 de mayo de 2018, violenta la figura de la cosa juzgada, respecto a la sentencia de fecha 27 de octubre de 2018, en la que ya se había declarado la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en el juicio fiscal de origen, por las mismas ilegalidades determinadas en la sentencia que actualmente se impugna.

Derivado de lo anterior, lo procedente será que ese H. Tribunal Colegiado conceda el amparo y protección de la Justicia Federal que se solicita, pues resulta evidente que la sentencia reclamada se emitió en contravención a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, situación que se traduce en una violación a los derechos fundamentales y garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Por lo antes expuesto,

A ESA H. SALA, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentado en representación de GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V., promoviendo en tiempo y forma legales el presente juicio de amparo.

SEGUNDO. Con las copias simples que se exhiban, correr traslado a las partes, y en su momento remitir el original al H. Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para efectos de su sustanciación, conjuntamente con el informe justificado que se formule y los autos del juicio fiscal que dieron origen al acto reclamado.


A ESE H. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, EN TURNO, atentamente solicito se sirva:

PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, en representación de la quejosa, demandando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y de la autoridad que han quedado debidamente precisados.

SEGUNDO. Admitir a trámite la demanda de amparo presentada y tener por autorizados en términos amplios a las personas que en el proemio se designan.

ÚLTIMO. Acordar de conformidad con lo solicitado.

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,


JESUS MORALES AGUILAR,
En representación legal de
GRUPO ELEKTRA, S.A.B. DE C.V.

Ciudad de México, a la fecha de su presentación

3134



TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
PRIMER CIRCUITO

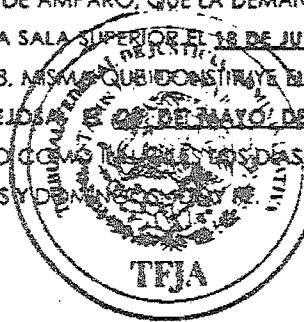
12852/13-17-05-2/905/14-S1-04-04-AS

CIUDAD DE MÉXICO, A VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.- LA LICENCIADA TERESA ISABEL TÉLLEZ MARTÍNEZ, SECRETARIA ADJUNTA DE ACUERDOS DE LA PRIMERA SECCIÓN, DE LA SALA SUPERIOR, DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN VI, DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, APLICABLE EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO SEXTO, DEL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN; LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, Y LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DÍA 18 DE JULIO DE 2016.

CERTIFICA

PARA LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 178, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LA DEMANDA DE GARANTÍAS FUE PRESENTADA EN LA OFICIALÍA DE PARTES DE LA SALA SUPERIOR EL 18 DE JUNIO DE 2018; POR OTRA PARTE, LA SENTENCIA DE 3 DE MAYO DE 2018, MISMA QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO, FUE NOTIFICADA PERSONALMENTE A LA QUEJOSA EL 22 DE MAYO DE 2018, SURTIENDO EFECTOS AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE, TRANSCURRIENDO COMO TAL ENTRE LOS DÍAS 2, 3, 9, 10, 16 Y 17 DE JUNIO DE 2018, POR CORRESPONDER A SÁBADOS Y DOMINGOS.

LICENCIADA TERESA ISABEL TÉLLEZ MARTÍNEZ.



SECRETARÍA GENERAL
DE ACUERDOS DE
LA PRIMERA SECCIÓN

SIN TEXTO



DÉCIMO OCTAVO TRIB
EN MATERIA ADI
DEL PRIMER



DÉCIMO OCTAVO TI
EN MATERIA A
DEL PRIME

Evidencia criptográfica · Firma electrónica certificada
Nombre del documento firmado: DocFirExpElect1_1.pdf
Secuencia: 2732287

Este documento digitalizado es copia fiel de su versión impresa, la cual corresponde a su original.

AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Firmante	Nombre:	CARLOS DELGADILLO VILLEGAS	Estado del certificado:	OK	Vigente
	CURP:	DEVC680313HDFLLR08			
Firma	Serie del certificado del firmante:	706a6673636a6e0000000000000000000000000015c2	Revocación:	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/07/2019T23:54:08Z / 12/07/2019T18:54:08-05:00	Estatus de firma:	OK	Valida
	Algoritmo:	SHA256/RSA_ENCRYPTION			
	Cadena de firma:	71 52 c1 a4 a0 a8 52 2b 60 e8 af 59 14 3b 6f 3f 9c c3 89 71 1c ee e8 5d 54 32 f9 b5 d0 18 d6 10 96 57 fe 3c 6b 59 e8 cb de 36 72 38 b1 7d 5d ae 82 a3 5a 3e 39 e7 ba 8a 0a 7d c6 3c 3f 4b 94 f5 8c 86 cc c8 83 8f b9 a2 ba ae 92 58 cd ba cc 42 2d 0f 3d 94 c0 08 c4 d8 9d 3c 45 8b 27 58 1c 28 a0 46 9b 17 2a 6c 4c 61 3c 6b cb 31 8f 0e 95 62 b9 06 26 b8 01 de 4d 8d 52 87 63 56 95 0b 38 65 23 36 51 2b 74 2d 9e 43 e6 7c b5 38 00 06 3f 34 63 a2 86 b2 5d 22 2b 7b 84 1b 3e 9d 99 14 9a e4 3d db ea aa 01 7a 2a 64 74 81 09 09 a1 0b 9b 89 a5 7e d8 7d fd e0 89 71 1f f1 d6 05 63 8a ea b3 fd 62 92 cd 0a c7 45 a1 fd 4c 6b e1 6e 89 12 85 de 5f f0 8c b7 2c 39 10 4c b7 45 dd a1 66 01 4b d3 39 cc dc 7a d1 e3 6f c7 92 15 bd c9 4b 08 1e d0 ec 62 6c e1 60 b3 17 28 ea 1b 70 3f 2b 3d 2e			
Validación OCSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/07/2019T23:54:09Z / 12/07/2019T18:54:09-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta OCSP:	OCSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado de OCSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Número de serie del certificado OCSP:	706a6673636a6e0000000000000000000000000015c2			
Estampa TSP	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	12/07/2019T23:54:08Z / 12/07/2019T18:54:08-05:00			
	Nombre del emisor de la respuesta TSP:	TSP FIREL de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Emisor del certificado TSP:	AC de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			
	Identificador de la secuencia:	2736030			
	Datos estampillados:	755E9AD82E7B6CDF2C96A7D1DC74D20E5190209A			